



**Apoyo Técnico a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para sistematizar los
aportes de la sociedad civil en el proceso de elaboración del
Informe Nacional Voluntario ODS 2026**

Asociación Pro-fundación para las Ciencias Sociales (APFCS)

Unidad de Métodos y Acceso a Datos (UMAD) - Facultad de Ciencias Sociales (FCS)

Producto 3: Informe Final

16 mayo 2026

Equipo de trabajo:

Fernando Filgueira

Gustavo Méndez Barbato

Ana Paula García

Sofía Lenzi

Nahuel Roel

Florencia Sciaraffia

Rodrigo Seroubian

Índice

Índice.....	1
1. Introducción.....	2
2. Proceso y metodología.....	2
2.1 Diseño del proceso, participación y actores.....	3
2.2. Sistematización.....	11
2.3 Limitaciones del proceso.....	12
3. Mesas de intercambio por ODS.....	13
3.1. ODS 6.....	13
3.2 ODS 7.....	21
3.3 ODS 9.....	33
3.4 ODS 11.....	44
3.5 ODS 17.....	54
4. Mesas de intercambio transversales.....	64
4.1 Mesa transversal virtual I (4 marzo mañana).....	64
4.2 Mesa transversal virtual II (4 marzo tarde).....	70
4.3 Mesa transversal virtual III (17 marzo).....	77
4.4 Mesa transversal virtual IV (28 abril).....	86
5. Sistematización de Propuestas.....	96
5.1 Gobernanza, articulación institucional y participación.....	97
5.2 Información, monitoreo, reporte y transparencia.....	98
5.3 Financiamiento, incentivos y compras públicas sostenibles.....	100
5.4 Infraestructura, servicios básicos y transición socioambiental.....	101
5.5 Innovación, desarrollo productivo y economía circular.....	102
5.6 Formación, capacidades y cultura de sostenibilidad.....	103
5.7 Territorialización, descentralización y comunidades sostenibles.....	105
5.8 Regulación, fiscalización y coherencia normativa.....	106
5.9 Síntesis.....	107
6. Consideraciones finales.....	110
Anexos.....	114
Anexo I. Propuestas.....	114
Anexo II. Documentos enviados por participantes (mesa virtual 28 Abril).....	143

1. Introducción

El presente informe sistematiza los aportes de la sociedad civil recogidos en el marco del proceso de elaboración del Informe Nacional Voluntario de Uruguay 2026 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Su propósito es contribuir a que el INV 2026 incorpore, junto con la perspectiva gubernamental, las voces, experiencias, valoraciones y propuestas de actores sociales, académicos, territoriales, profesionales, cooperativos y del sector privado que participaron en las distintas instancias de consulta.

El proceso se organizó en torno a los cinco ODS priorizados para este ciclo —ODS 6: Agua limpia y saneamiento; ODS 7: Energía asequible y no contaminante; ODS 9: Industria, innovación e infraestructura; ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles; y ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos—, incorporando además tres ejes transversales: no dejar a nadie atrás, perspectiva de género y cambio climático.

El documento se estructura en seis secciones. Luego de esta introducción, la segunda sección presenta el proceso y la metodología de trabajo, incluyendo el diseño de la consulta, la participación de actores, la estrategia de sistematización y sus principales limitaciones. La tercera sección reúne los resultados de las mesas de intercambio organizadas por ODS. La cuarta sección presenta las mesas transversales, en las que se abordaron de manera integrada los distintos objetivos y ejes de la Agenda 2030. La quinta sección sistematiza las propuestas surgidas del proceso, agrupándolas en ejes temáticos y distinguiendo entre acciones de corto plazo y líneas de mediano y largo plazo. Finalmente, la sexta sección ofrece las consideraciones finales, destacando los principales aprendizajes del proceso y su potencial para habilitar caminos de trabajo conjunto más allá del INV 2026.

2. Proceso y metodología

El proceso de consulta pública para la elaboración del Informe Nacional Voluntario de ODS Uruguay 2026 tuvo como objetivo incorporar la perspectiva de la sociedad civil en el análisis del avance de Uruguay en la implementación de la Agenda 2030. Esta es la segunda ocasión

en que Uruguay incluye la visión de la sociedad civil en el INV, retomando la experiencia del proceso desarrollado en 2017.

La consulta se organizó en torno a los cinco ODS priorizados para el ciclo 2026:

- ODS 6: Agua limpia y saneamiento
- ODS 7: Energía asequible y no contaminante
- ODS 9: Industria, innovación e infraestructura
- ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles
- ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos

Asimismo, especialmente en las mesas virtuales, se incorporó el énfasis en tres ejes transversales: i) el principio de “no dejar a nadie atrás”; ii) perspectiva de género y iii) cambio climático

El presente reporte se organiza de la siguiente manera. En la segunda sección se describe el diseño del proceso y las características de la participación de los distintos actores. La tercera sección presenta el proceso de sistematización de la información relevada. En la cuarta sección se exponen las principales limitaciones del proceso. Finalmente, la última sección reúne las consideraciones finales.

2.1 Diseño del proceso, participación y actores

El proceso de consulta pública se llevó a cabo entre febrero y abril de 2026. Combinó mecanismos presenciales, virtuales y participación digital asincrónica, con el objetivo de ampliar la cobertura y diversidad de actores. Se establecieron dos vías principales para relevar la perspectiva de sociedad civil: i) mesas de intercambio multiactor presenciales y virtuales, para recoger aportes sustantivos de la sociedad civil, en diálogo con actores involucrados en la implementación de políticas públicas; ii) la plataforma de participación ciudadana de AGESIC, para relevar propuestas.

2.1.1 Mesas de intercambio multiactor

El 4 de marzo de 2026 se realizaron nueve mesas de intercambio presencial en el Anexo de Torre Ejecutiva y dos mesas virtuales de intercambio. Cada ODS priorizado tuvo dos mesas presenciales, aunque en el caso del ODS 7 y 9 una de ellas fue conjunta. En el caso de las cuatro mesas virtuales, la agenda estuvo abierta a todos los ODS y se buscó enfatizar los ejes transversales de no dejar a nadie atrás, género y cambio climático.

La convocatoria para la jornada del 4 de marzo estuvo a cargo de la OPP y en ella se incluyeron una gama amplia de actores: sociedad civil, academia, gobierno central, gobiernos subnacionales, organismos públicos estatales y no estatales y agencias multilaterales. La moderación estuvo a cargo del equipo de la Unidad de Métodos y Acceso a Datos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (UMAD-FCS-UDELAR).

El 17 de marzo se realizó una mesa virtual de intercambio adicional, convocada por la UMAD-FCS-UDELAR, con el objetivo de agregar una instancia más de relevamiento de perspectiva de la sociedad civil, facilitando la participación de actores territoriales y organizaciones no presentes en las instancias presenciales. Al igual que las otras instancias de intercambio virtual se abordaron de forma integrada los distintos ODS y se buscó profundizar en los ejes transversales mencionados.

En tanto, el 28 de abril se realizó una mesa virtual de intercambio adicional, convocada por OPP, con el objetivo de incorporar perspectivas del sector privado y cooperativo, fundamentalmente. Al igual que las otras instancias de intercambio virtual se abordaron de forma integrada los distintos ODS y se buscó profundizar en los ejes transversales mencionados.

Todas las mesas de intercambio se estructuraron en torno a los siguientes ejes: i) conocimiento y apropiación de la agenda 2030; ii) acciones y experiencias; iii) identificación de desafíos; iv) valoración del estado de avance; v) formulación de propuestas. Este esquema permitió organizar los aportes en categorías comparables entre ODS y facilitar su posterior sistematización.

2.1.1.a Participación

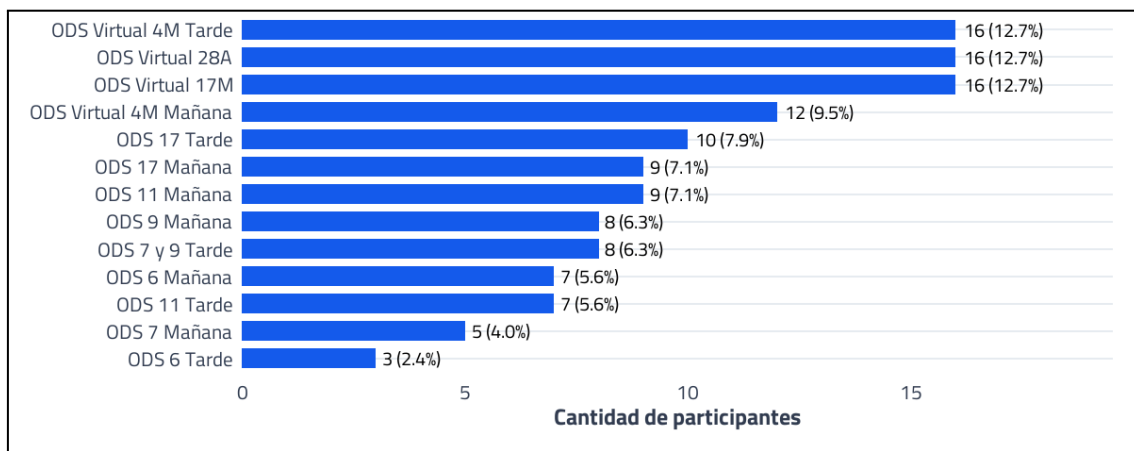
En total, el proceso de mesas de intercambio reunió a 118 participantes, sin considerar a los equipos de moderación. Los gráficos de participación muestran, en primer lugar, que se trató de una convocatoria de escala relevante para un proceso de consulta acotado temporalmente y organizado en torno a cinco ODS priorizados. Al mismo tiempo, permiten observar que la participación no se distribuyó de manera homogénea entre las distintas instancias. Algunas mesas concentraron una asistencia mayor, mientras que otras tuvieron una composición más reducida, algo esperable en función de la especificidad temática de ciertos objetivos y del carácter más transversal de las instancias virtuales.

En segundo lugar, la información gráfica permite apreciar la heterogeneidad de actores convocados. Junto a organizaciones de la sociedad civil participaron organismos del Estado, gobiernos subnacionales, academia, organismos públicos no estatales y agencias multilaterales, configurando un intercambio efectivamente multiactor. Esta composición refuerza una de las características centrales del proceso. Si bien el objetivo fue relevar la perspectiva de la sociedad civil, ello se realizó en espacios de diálogo ampliados, donde esa

perspectiva pudo ponerse en relación con experiencias institucionales, capacidades técnicas y miradas territoriales diversas. En este sentido, los gráficos ilustran magnitudes de participación y también la amplitud y pluralidad de voces incorporadas al proceso.

En tercer lugar, las instancias virtuales fueron las que mayor participación de la sociedad civil registraron, algo importante a destacar para futuros procesos que puedan derivarse de esta consulta pública. Asimismo, estas instancias fueron las que mayor participación de personas fuera de Montevideo registraron, algo sustantivo para dejar constancia, más allá de que no se desagrega la información por zona geográfica.

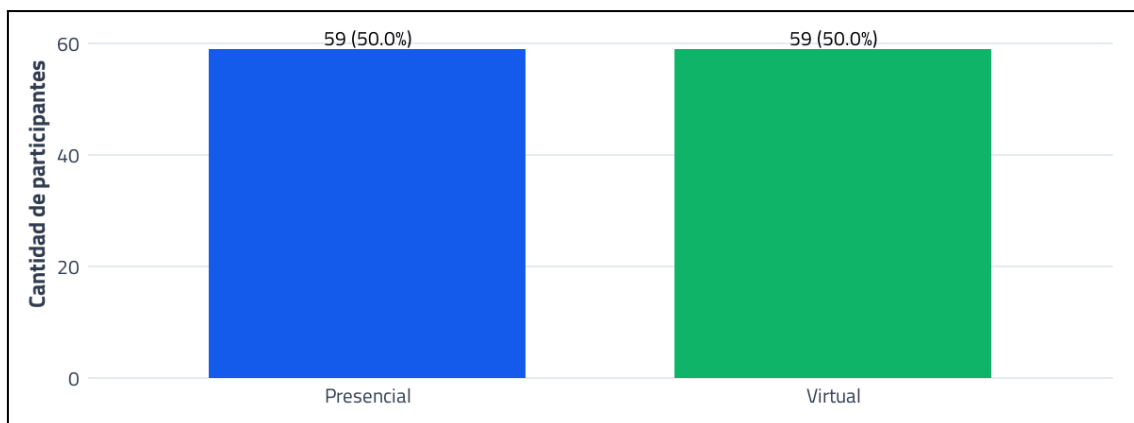
Gráfico 1. Participación según mesa



* Participantes por mesa, excluyendo moderación. Incluye participantes en más de una mesa.

Fuente: Elaboración Propia

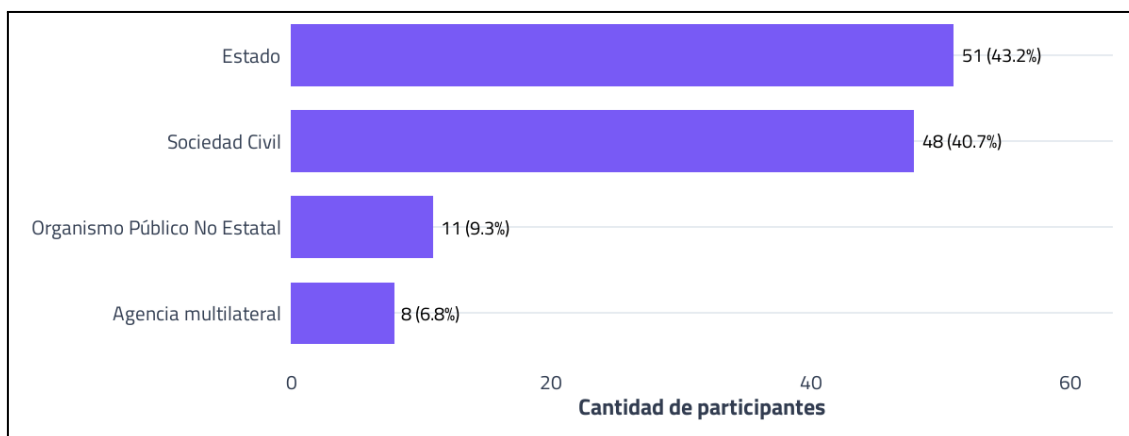
Gráfico 2. Participación según modalidad



* Participantes únicos, excluyendo moderación.

Fuente: Elaboración Propia

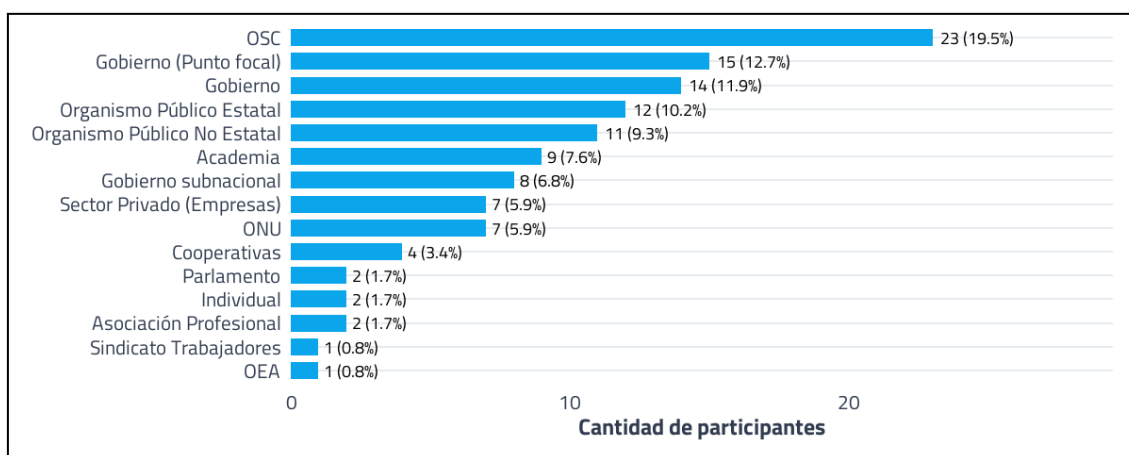
Gráfico 3. Participación según tipo de actor



* Participantes únicos, excluyendo moderación.

Fuente: Elaboración Propia

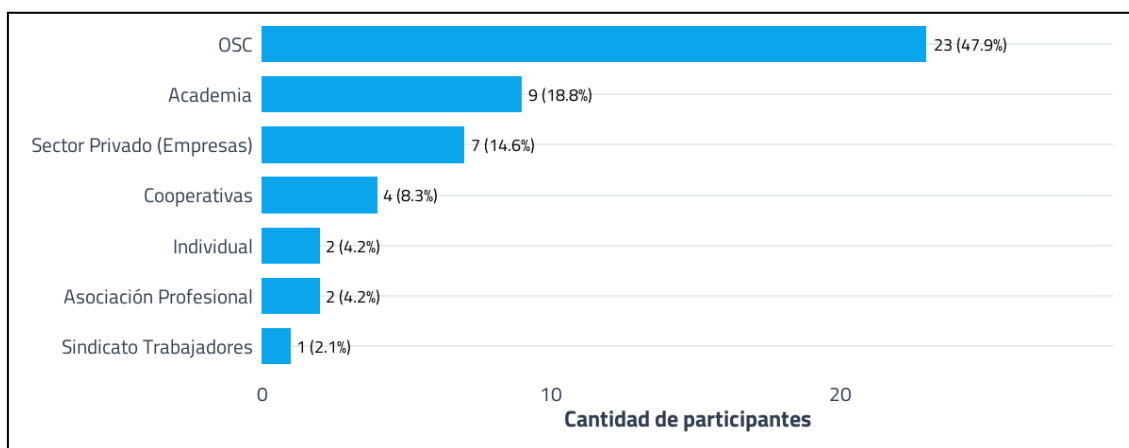
Gráfico 4. Participación según categoría de actor



* Participantes únicos, excluyendo moderación.

Fuente: Elaboración Propia

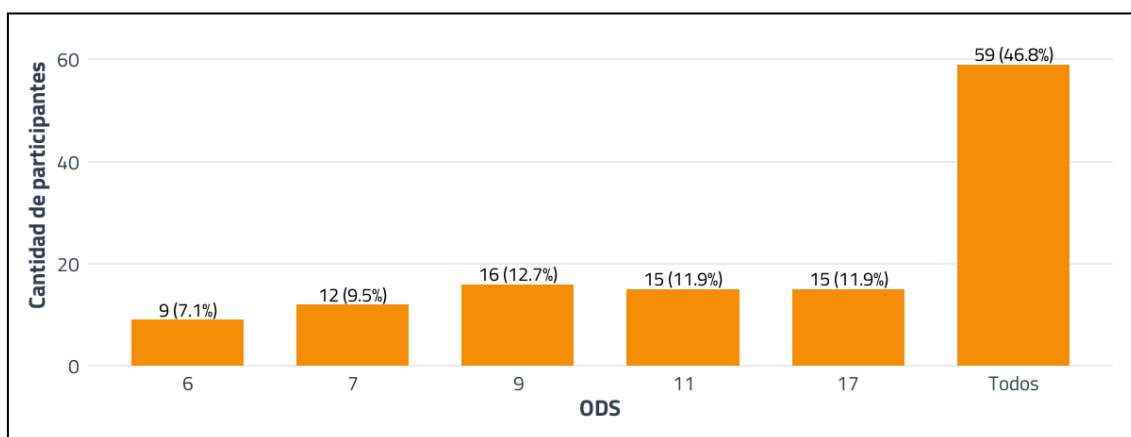
Gráfico 5. Participación según categoría de actor: Sociedad Civil



* Participantes únicos, excluyendo moderación.

Fuente: Elaboración Propia

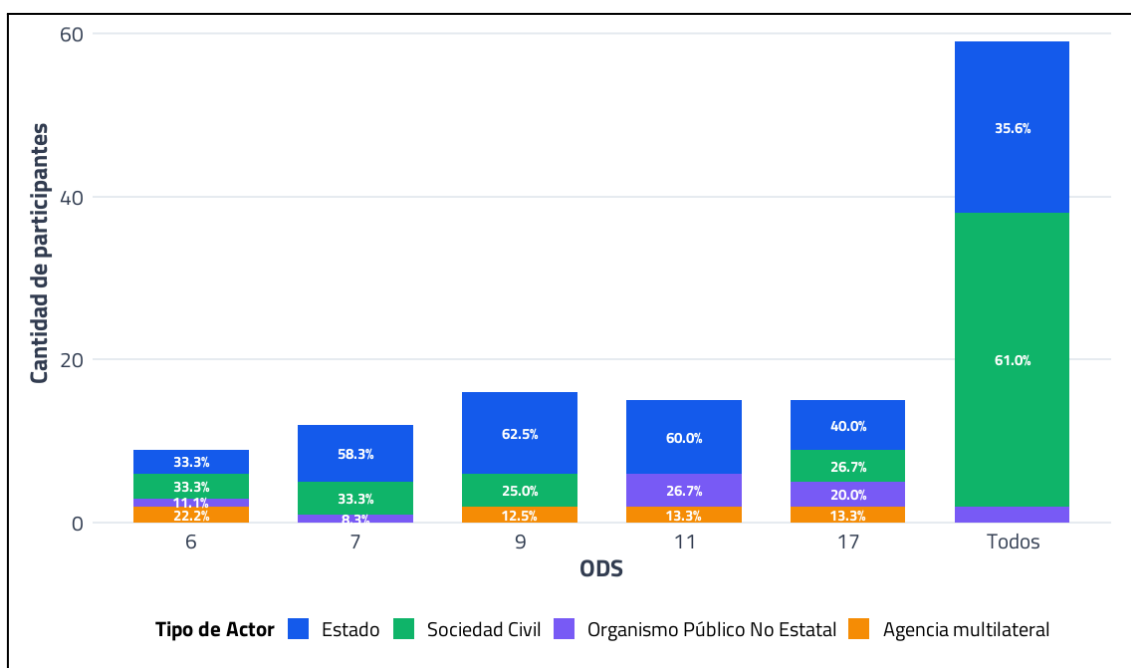
Gráfico 6. Participación según ODS



* Participantes excluyendo moderación. Los participantes de mesa conjunta de ODS 7 y 9 se incluyen en ambos.

Fuente: Elaboración Propia

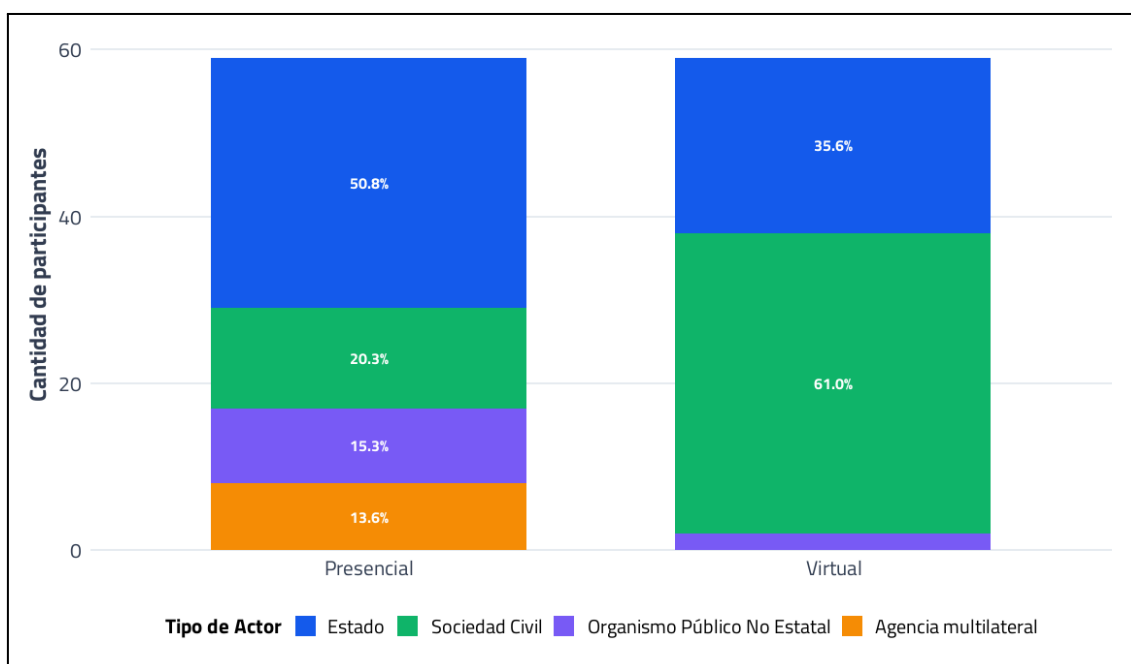
Gráfico 7. Participación según ODS y tipo de actor



* Participantes excluyendo moderación. Los participantes de la mesa conjunta de ODS 7 y 9 se incluyen en ambos.

Fuente: Elaboración Propia

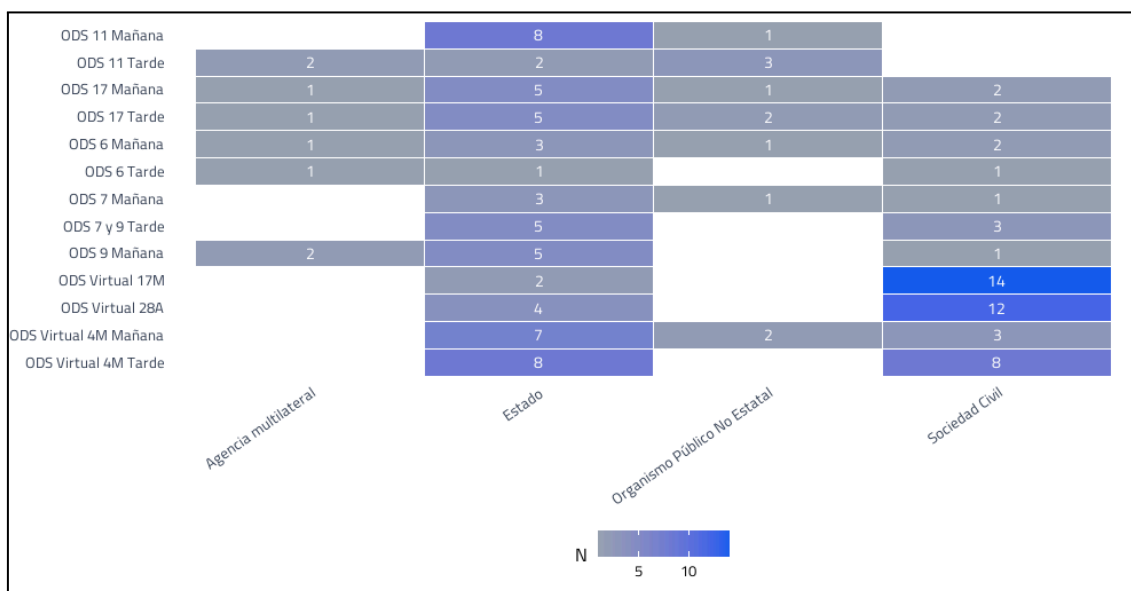
Gráfico 8. Participación por modalidad y tipo de actor



* Participantes excluyendo moderación.

Fuente: Elaboración Propia

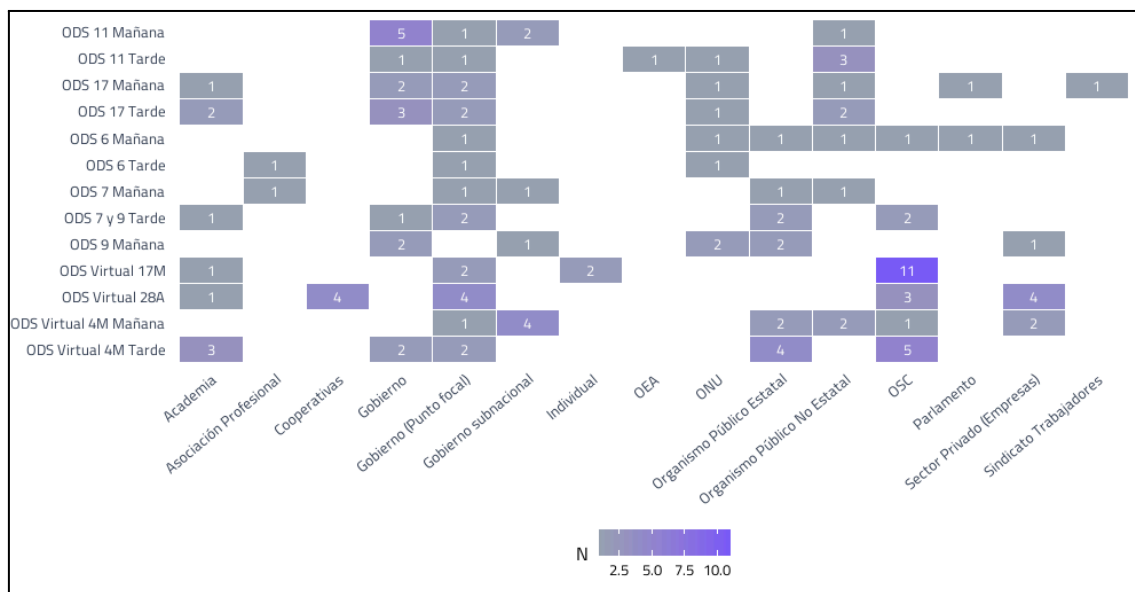
Gráfico 9. Participación por mesa y tipo de actor (mapa de calor)



* Participantes excluyendo moderación. Los participantes de la mesa conjunta de ODS 7 y 9 se incluyen en ambos.

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 10. Participación por mesa y categoría de actor (mapa de calor)



* Participantes excluyendo moderación. Los participantes de la mesa conjunta de ODS 7 y 9 se incluyen en ambos.

Fuente: Elaboración Propia

2.1.2 Plataforma digital de participación

El proceso de consulta se complementó con la utilización de la plataforma digital de participación ciudadana de AGESIC: [Aportes de la ciudadanía para la elaboración del 'Informe País de los Objetivos de Desarrollo Sostenible \(ODS\)'](#). Este dispositivo, que estuvo habilitado para la recepción de propuestas entre el 12 de febrero y el 22 de marzo de 2026, permitió ampliar el alcance del proceso participativo más allá de las instancias sincrónicas, habilitando la incorporación de aportes tanto de organizaciones de la sociedad civil como de ciudadanía en general. De este modo, la plataforma funcionó como un canal alternativo de participación y como un espacio más abierto e inclusivo, capaz de recoger miradas que no necesariamente se expresan en ámbitos institucionalizados de intercambio.

A diferencia de las mesas presenciales y virtuales, donde las intervenciones están mediadas por el tiempo y la dinámica del diálogo, la plataforma posibilitó la elaboración de aportes más reflexivos y desarrollados, así como la incorporación de documentos y evidencias complementarias. Al mismo tiempo, introdujo una dimensión interactiva en el proceso, permitiendo que los participantes presentaran propuestas y que también pudieran comentar, complementar y manifestar apoyo a otras iniciativas.

Esta lógica buscó construir un espacio de participación más horizontal, en el que las contribuciones podían dialogar entre sí y adquirir visibilidad más allá del momento puntual de su presentación. Asimismo, la plataforma facilitó la organización y trazabilidad de los

aportes, al estructurarlos en función de los ODS priorizados y mantenerlos disponibles para su consulta.

2.1.2.a Participación

En términos cuantitativos, la plataforma recibió 22 propuestas distribuidas entre los cinco ODS priorizados, con una participación relativamente equilibrada entre ellos.

Cuadro 1. Cantidad de propuestas en Plataforma de Participación Ciudadana según ODS

ODS	Cantidad de propuestas
ODS 6	4
ODS 7	3
ODS 9	5
ODS 11	5
ODS 17	5
Total	22

Fuente: Elaboración propia

2.2. Sistematización

Los insumos generados a través de las mesas presenciales, las instancias virtuales y la plataforma digital fueron objeto de un proceso de sistematización secuencial, orientado a asegurar tanto la fidelidad del registro como su aprovechamiento analítico para la elaboración del Informe Nacional Voluntario 2026. Este proceso no se limitó a ordenar la información relevada, ya que buscó transformar los intercambios y propuestas en materiales comparables, trazables y utilizables en la redacción del informe final.

En una primera etapa, se realizó la transcripción de las mesas presenciales y virtuales, con el propósito de preservar de la manera más completa posible el contenido de las intervenciones y asegurar una base documental homogénea para el trabajo posterior. A partir de esas transcripciones se elaboraron borradores de relatoría para cada ODS, organizando los aportes según los ejes comunes definidos para todas las mesas: conocimiento y apropiación de la Agenda 2030, acciones y experiencias, desafíos, valoración del estado de avance y propuestas. Esta estructura permitió ordenar el material de manera

[Volver al índice](#)

comparable entre objetivos y facilitar la identificación de convergencias, énfasis y tensiones entre participantes.

En una segunda etapa, los borradores de relatoría fueron enviados a las personas participantes, habilitando un período de una semana para la realización de observaciones, correcciones o agregados. Esta instancia de devolución buscó fortalecer la calidad del registro, mejorar la precisión en la atribución institucional de los aportes y ofrecer una oportunidad de validación a quienes habían participado en las mesas. Sobre esa base se elaboraron las versiones finales de las relatorías, que constituyeron uno de los principales insumos cualitativos del proceso.

En paralelo, los aportes recibidos a través de la plataforma de participación ciudadana de AGESIC fueron procesados mediante la elaboración de fichas de propuestas, con el objetivo de homogeneizar su presentación y facilitar su posterior análisis. Este trabajo permitió ordenar la información recibida según ODS, identificar contenidos recurrentes y distinguir entre diagnósticos, recomendaciones, acciones en curso y propuestas específicas. La sistematización de la plataforma se articuló así con las relatorías de las mesas, permitiendo integrar en una misma lógica analítica tanto los intercambios orales como los aportes escritos.

Finalmente, a partir del conjunto de estos materiales, se elaboraron cuadros sintéticos por ODS centrados especialmente en las dimensiones de acciones y experiencias y de propuestas, así como un reporte general del proceso. Estos productos intermedios funcionaron como puente entre el relevamiento original y el informe final, permitiendo condensar la información sin perder de vista la diversidad de actores, enfoques y aportes recogidos. De este modo, la sistematización operó como una etapa clave para traducir la consulta pública en un insumo sustantivo para la elaboración del Informe Nacional Voluntario 2026.

Proceso de Consulta Pública – INV 2026

Este diagrama detalla las fases de recolección de información a través de mesas de intercambio y plataformas digitales, su posterior procesamiento técnico y la consolidación de estos aportes como insumos clave para el Informe Nacional Voluntario (INV) 2026 de Uruguay.

Fase de Captación de Aportes

Mesas de Intercambio Multiactor

118 participantes distribuidos en 9 mesas presenciales y 4 instancias virtuales de diálogo.



Plataforma Digital (AGESIC)

Total de propuestas: 22

Recolección de 22 propuestas ciudadanas distribuidas de forma equilibrada entre los ODS priorizados.



Ejes Transversales

Enfoque prioritario en género, cambio climático y el principio de "no dejar a nadie atrás".

SISTEMATIZACIÓN



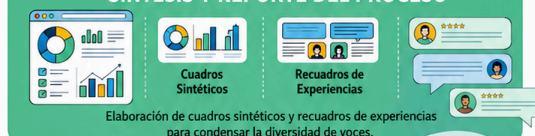
Transformación de diálogos en transcripciones, fichas técnicas y relatorías validadas por los participantes.



ODS Priorizados

5 objetivos (6, 7, 9, 11 y 17)

SÍNTESIS Y REPORTE DEL PROCESO



Elaboración de cuadros sintéticos y recuadros de experiencias para condensar la diversidad de voces.

INSUMOS PARA EL INV 2026

Sistematización de Aportes de la Sociedad Civil Integrado como base del Informe Final.



NotebookLM

2.3 Limitaciones del proceso

El proceso presenta algunas limitaciones que deben ser consideradas en la interpretación de los resultados.

En primer lugar, se trató de un proceso temporalmente acotado, desarrollado en un período aproximado de un mes, lo que condiciona el alcance de la convocatoria y la profundidad de la participación.

En segundo lugar, la participación se estructuró sobre la base de una convocatoria abierta y voluntaria, por lo que no responde —ni pretende responder— a criterios de representatividad estadística de la sociedad civil. En este sentido, los aportes recogidos no deben interpretarse como la voz de “la sociedad civil” en su conjunto,

sino como la expresión —heterogénea y diversa— de los actores que efectivamente participaron en las instancias de consulta.

Finalmente, desde el equipo de elaboración del informe se enfatizó que este proceso constituye un punto de partida y no un punto de cierre. En esta línea, el Informe Nacional Voluntario se concibe como una instancia que habilita la profundización del trabajo con la sociedad civil, promoviendo la continuidad de los espacios de diálogo y la construcción de agendas compartidas en torno a la implementación de los ODS.

El diseño metodológico adoptado buscó ampliar la base de actores participantes, articular instancias presenciales, virtuales y digitales, recoger insumos cualitativos diversos e integrar múltiples perspectivas en el análisis del informe. Más allá de sus limitaciones, el proceso permitió recoger insumos para el informe y generar una experiencia concreta de articulación entre actores e identificar capacidades, vacíos y desafíos para futuros mecanismos de participación vinculados a la Agenda 2030 en Uruguay.

3. Mesas de intercambio por ODS

En esta sección se incluyen las relatorías de las mesas de intercambio presencial organizadas por ODS, incorporando las dimensiones de análisis de conocimiento e información; valoraciones; acciones y desafíos. Las propuestas fueron sistematizadas en conjunto en la quinta sección de este documento, aunque las propuestas específicas de cada ODS se incluyen en el Anexo 1. Al final de cada apartado se incluye la lista de participantes.

3.1. ODS 6

Agua y saneamiento

3.1.1 Introducción

El miércoles 4 de marzo de 2026, representantes de sociedad civil y estado se reunieron en dos mesas presenciales de consulta pública convocadas en el marco de la elaboración del sexto Informe Nacional Voluntario de Uruguay 2026 (INV), para intercambiar en torno al Objetivo de Desarrollo Sostenible 6: Agua limpia y saneamiento. Las instancias, moderadas por Ana Paula García de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad de la República (UDELAR) y con el apoyo técnico de Andrea Gamarra, Directora de la División Agua Potable y Saneamiento de la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua) del Ministerio de

Ambiente (MA) e integrante del equipo interinstitucional encargado de elaborar el INV 2026, buscaron recoger las percepciones, experiencias y propuestas de actores no gubernamentales sobre el avance del país en la Agenda 2030.

En total, participaron ocho representantes de instituciones y organizaciones de distinto perfil, distribuidos entre ambas mesas. En la mesa de la mañana participaron la Alianza Uruguay por el Agua (AUA), la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSUY), MEVIR, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA) y un representante parlamentario del Movimiento de Participación Popular (MPP). En la mesa de la tarde participaron PNUD y la Asociación de Escribanos del Uruguay (AEU).

Aunque las inserciones, competencias e intereses de los actores convocados fueron diversas, la conversación presentó varios núcleos comunes. En ambas mesas apareció una valoración general que reconoce fortalezas del país, especialmente en materia de acceso al agua potable, pero también coincidencias claras respecto de los principales rezagos y desafíos. Entre ellos, se jerarquizaron particularmente el saneamiento como principal deuda pendiente, la necesidad de fortalecer la gobernanza del agua, la articulación entre actores e instituciones, la confianza pública en la información sobre calidad del agua, la participación ciudadana y la búsqueda de mecanismos de financiamiento acordes a la magnitud de las metas. De forma transversal, también surgió la idea de que Uruguay cuenta con diagnósticos, normas y experiencias suficientes para identificar buena parte de los problemas, por lo que el desafío principal radica menos en producir nueva información que en traducir lo ya conocido en decisiones, prioridades y capacidades de implementación.

Al mismo tiempo, el intercambio mostró un abordaje del ODS 6 con énfasis específicos. La discusión se concentró sobre todo en el vínculo entre agua potable, saneamiento, seguridad hídrica, gobernanza y usos del recurso, así como en las tensiones entre cobertura formal, percepción ciudadana y sostenibilidad de las soluciones. En cambio, otros componentes del objetivo tuvieron una presencia menor o más indirecta, como los aspectos vinculados a higiene, contaminación del agua, gestión de aguas residuales, gestión integrada de recursos hídricos o cooperación internacional en sentido más amplio. De este modo, las mesas tendieron a priorizar aquellos temas percibidos como más críticos en la coyuntura nacional y más estrechamente ligados a los desafíos de implementación, articulación institucional y jerarquización política del ODS 6.

3.1.2 Conocimiento e información

En ambas mesas se observó un nivel de conocimiento heterogéneo pero relevante sobre el ODS 6. En términos generales, el objetivo es reconocido como un marco válido para pensar los desafíos del país en materia de agua y saneamiento, aunque su apropiación concreta varía según la cercanía institucional de cada actor con la temática. En los espacios más

vinculados a regulación, gestión hídrica o provisión de servicios, el conocimiento apareció más consolidado y conectado con debates técnicos, normativos y de implementación. En otros casos, el ODS 6 surge más bien como una referencia general que dialoga con problemas prácticos de infraestructura, ambiente, territorio o actividad productiva.

La conversación también mostró que el nivel de conocimiento sobre esta agenda no permea de manera homogénea hacia todos los ámbitos sociales y productivos. En particular, se señaló que en el sector empresarial persisten diferencias importantes en el grado de información disponible, en la incorporación de prácticas vinculadas al uso eficiente del agua y en la capacidad de traducir la agenda ODS en herramientas concretas de gestión. A la vez, surgió la idea de que Uruguay carga todavía con una cierta cultura de “abundancia” del recurso, que tiende a debilitar la construcción del problema y la conciencia sobre sus límites, especialmente en ausencia de episodios críticos.

En ese marco, la crisis hídrica de 2023 apareció como un punto de inflexión importante. Más allá de sus impactos concretos, fue mencionada como un acontecimiento que contribuyó a instalar con más fuerza el tema del agua en la conversación pública, a ampliar la percepción de vulnerabilidad y a generar nuevas condiciones para la sensibilización de actores que antes se encontraban más alejados del problema. En suma, lo que se desprende del intercambio no es una falta de conocimiento, sino una apropiación desigual y todavía parcial, atravesada por diferencias sectoriales, territoriales e institucionales.

Experiencias desde Sociedad Civil

La discusión sobre el ODS 6 mostró una conversación plural, atravesada por inserciones institucionales, competencias e intereses diversos, pero también por varios núcleos comunes. En términos generales, se reconocen fortalezas del país, especialmente en materia de acceso al agua potable, junto con coincidencias claras sobre los principales rezagos y desafíos. Entre ellos, se jerarquizaron el saneamiento como principal deuda pendiente; la necesidad de fortalecer la gobernanza del agua; la articulación interinstitucional y con otros actores; la confianza pública en la información sobre calidad del agua; la participación ciudadana en estos asuntos y la búsqueda de mecanismos de financiamiento acordes a la magnitud de las metas. De forma transversal, surgió además la idea de que Uruguay cuenta con diagnósticos, normas y experiencias suficientes para identificar buena parte de los problemas, por lo que el desafío principal radica menos en producir nueva información que en traducir lo ya conocido en decisiones, prioridades y capacidades de implementación. En ese marco, la discusión se concentró sobre todo en el vínculo entre agua potable, saneamiento, seguridad hídrica, gobernanza y usos del recurso, mientras que otros componentes del ODS tuvieron una presencia menor o más indirecta.

Entre las experiencias destacables de la sociedad civil, sobresalieron especialmente aquellas que combinan innovación, trabajo territorial y articulación entre actores diversos. En ese sentido, la Alianza Uruguaya por el Agua presentó un conjunto de iniciativas con fuerte anclaje práctico, entre ellas la instalación de plantas potabilizadoras en escuelas rurales sin acceso al agua, proyectos de infraestructura verde como jardines de lluvia y pavimentos permeables, dispositivos de contención de residuos en cursos de agua y acciones de conservación en nacientes de la cuenca del Santa Lucía. Se trata de experiencias destacables por su impacto concreto y también por su capacidad de articular organismos públicos, academia, gobiernos locales, comunidades y productores. También resultó significativa la experiencia de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay en el monitoreo del conocimiento de los ODS en el sector empresarial, que permitió identificar oportunidades para promover herramientas como la medición de huella hídrica y mejorar el acceso a información sobre prácticas de uso eficiente del agua. En otro plano, la Asociación de Escribanos del Uruguay mostró cómo esta agenda empieza a permear ámbitos técnico-profesionales, a través de procesos de capacitación en derecho ambiental y de consultas vinculadas a saneamiento, propiedad y regulación. En conjunto, estas experiencias y otras que por razones de espacio no se incluyen en este recuadro, reflejan que la sociedad civil no solo participa en la identificación de problemas, sino también en la generación de respuestas concretas, capacidades y aprendizajes valiosos para el avance del ODS 6.

3.1.3 Valoraciones

La valoración general sobre la situación de Uruguay respecto al ODS 6 fue ambivalente. Por un lado, se reconoció que el país presenta fortalezas importantes, sobre todo en el acceso al agua potable y en la existencia de una base normativa e institucional relativamente robusta en comparación con otros países de la región. Por otro lado, las intervenciones coincidieron en que esos avances conviven con déficits persistentes y con desafíos estructurales que impiden hablar de un cumplimiento satisfactorio del objetivo en su conjunto.

El punto más crítico de la conversación estuvo claramente en el saneamiento, que apareció como el principal “debe” del país. Allí se concentraron varias de las valoraciones más enfáticas: la persistencia de brechas de cobertura, las dificultades para garantizar saneamiento gestionado de forma segura, los problemas de mantenimiento de redes y de

tratamiento de aguas residuales, y la insuficiente prioridad política del tema. La idea de que se trata de un asunto largamente diagnosticado, pero no resuelto por falta de decisión, financiamiento y priorización, atravesó buena parte del intercambio. En este sentido, el saneamiento no fue presentado tanto como un problema técnico desconocido, sino más bien como una deuda persistente de implementación.

En relación con el agua potable, la valoración fue comparativamente más positiva, aunque igualmente atravesada por alertas relevantes. Si bien se reconoció el buen posicionamiento del país en términos comparados, también surgió con fuerza la preocupación por la distancia entre los datos disponibles y la percepción ciudadana sobre la calidad del agua. La conversación dejó ver que la confianza pública constituye hoy una dimensión central del problema: no alcanza con que existan controles, monitoreo e indicadores si una parte importante de la población mantiene percepciones negativas sobre la calidad del agua o desconfía de la información que recibe. En este punto, la crisis hídrica dejó una huella duradera en la manera en que la ciudadanía percibe la seguridad del acceso. Como ejemplo de ello, Mauro de la Vega (AUA) señaló resultados de una encuesta de percepción ciudadana realizada por la Alianza Uruguaya por el Agua en 2024, según la cual una proporción significativa de la población no evalúa positivamente la calidad del agua de OSE y una mayoría opta por consumir agua embotellada. En esa misma línea, Paula Suárez (URSEA) y Magdalena Preve (PNUD) coincidieron en señalar que existe un problema de confianza pública y de comunicación, ya que aun cuando los datos oficiales muestran una situación relativamente sólida en términos de cobertura y control, esa fortaleza no se traduce necesariamente en una percepción equivalente por parte de la ciudadanía. Así, esta distancia entre medición técnica y percepción social fue leída como un problema en sí mismo, en la medida en que debilita la legitimidad social del monitoreo y de la política pública.

Otro eje central de valoración fue la gobernanza del agua. Las intervenciones tendieron a coincidir en que el principal desafío del país no pasa únicamente por ampliar servicios o mejorar infraestructura, sino por fortalecer la articulación entre actores, competencias y escalas. El agua apareció pensada como un recurso atravesado por múltiples usos —consumo humano, producción agropecuaria, energía, industria, tecnología—, lo que vuelve imprescindible contar con mecanismos de coordinación más sólidos y con mayores capacidades para gestionar tensiones y prioridades. En esa línea, se insistió en que los avances en el ODS 6 dependen de una gobernanza más integrada, capaz de vincular organismos estatales, actores productivos, sociedad civil, territorios y espacios de participación.

La conversación también amplió la mirada sobre el ODS 6 al vincularlo con seguridad hídrica, conservación del recurso, cambio climático y desarrollo humano. Esto supuso desplazar el foco desde una visión restringida al acceso a servicios hacia una comprensión más amplia del agua como problema ambiental, social y político. Desde esta perspectiva, los desafíos del país no se reducen a cobertura y obras, sino que incluyen la conservación de cuencas, la

protección de nacientes, el manejo de eventos climáticos extremos, la regulación de usos productivos y la necesidad de construir una cultura sobre el uso del agua más consciente de sus límites, tanto en la producción y la industria, como en la población en general.

Varias intervenciones pusieron en cuestión la capacidad de los indicadores actuales para reflejar de manera plena la situación del país. Sin desconocer su utilidad, se señaló que ciertos aspectos quedan parcialmente invisibilizados: las diferencias territoriales, la calidad percibida por la población, las realidades de la ruralidad dispersa, las limitaciones de los sistemas individuales de saneamiento y la complejidad de algunas formas de abastecimiento o tratamiento que no siempre se captan adecuadamente en las mediciones agregadas. En este sentido, la valoración predominante fue que el monitoreo disponible constituye una base necesaria, pero no suficiente, y que necesita dialogar con otras fuentes de información, con las experiencias territoriales y con la percepción social para ofrecer una imagen más completa del avance del país.

Finalmente, también apareció una valoración crítica sobre la jerarquización pública y política de esta agenda. Si bien se reconoció que el tema ganó visibilidad, especialmente después de la crisis hídrica, también se sostuvo que todavía no ocupa el lugar que debería en la agenda pública y presupuestal. La insuficiente comunicación política, la débil apropiación legislativa de la Agenda 2030 y la falta de seguimiento sistemático de las metas fueron señaladas como parte de ese problema. Leandro Valdomir (MPP) enfatizó que el tema no ocupa todavía un lugar suficientemente central en la agenda parlamentaria y sugirió que existe un desfase entre la magnitud del problema y la atención política que recibe. En conjunto, en ambas mesas se manifestó que Uruguay tiene capacidades, marcos normativos y diagnósticos acumulados, pero enfrenta dificultades para traducirlos en prioridad política sostenida.

3.1.4 Acciones y Desafíos

Las acciones y experiencias compartidas en las mesas mostraron un panorama rico pero disperso, en el que conviven iniciativas de monitoreo, regulación, infraestructura, educación, conservación, participación y trabajo territorial. Más que una ausencia de acciones, lo que emergió fue la existencia de múltiples experiencias valiosas desarrolladas desde ámbitos diversos, aunque no siempre articuladas entre sí ni necesariamente convertidas en aprendizajes acumulativos para la política pública.

Un primer bloque de experiencias se vinculó con el monitoreo, la regulación y la producción de información. En este plano, Paula Suárez (URSEA) destacó los monitoreos de calidad del agua realizados junto con la Facultad de Química, independientes de los controles de OSE, así como la implementación de planes de seguridad del agua y el desarrollo de nuevos indicadores en agua y saneamiento en el marco del reglamento de calidad y servicio. Desde otro ángulo, Anabela Aldaz (CCSUY) mencionó el trabajo de monitoreo del conocimiento de

los ODS en el sector empresarial, a partir del cual se han identificado oportunidades para incorporar herramientas como la medición de huella hídrica y fortalecer el acceso a información sobre prácticas de uso eficiente del agua.

Un segundo conjunto de experiencias se ubicó en el plano territorial y comunitario, donde aparecieron iniciativas que combinan infraestructura, educación ambiental y articulación entre actores. Mauro de la Vega (AUA) presentó ejemplos como las plantas potabilizadoras en escuelas rurales sin acceso al agua, los jardines de lluvia y pavimentos permeables para promover ciudades más sostenibles, la red de contención de residuos en el Arroyo Carrasco y acciones de conservación en nacientes de la cuenca del Santa Lucía, en articulación con organismos públicos, academia, gobiernos locales y productores. En una línea convergente, Magdalena Preve (PNUD) destacó experiencias de trabajo con Dinagua y con actores territoriales, como el diagnóstico sobre comisiones de cuenca y el proyecto de biobardas en Salto, subrayando el potencial del trabajo conjunto entre comunidad, academia e instituciones para fortalecer la gobernanza del agua.

También aparecieron experiencias vinculadas al desarrollo de agua y saneamiento en contextos rurales y en pequeñas localidades, que pusieron el foco en la sostenibilidad de las soluciones. Leonardo Martínez (MEVIR) aportó desde la experiencia cotidiana de la institución en la instalación de redes de agua y saneamiento en conjuntos habitacionales, remarcando las dificultades que enfrenta especialmente el saneamiento y el tratamiento de aguas residuales cuando existen restricciones de espacio, gestión o mantenimiento. En esa misma línea, Soledad Ávila (PNUD) recuperó aprendizajes de proyectos orientados a explorar alternativas de saneamiento para pequeñas comunidades, insistiendo en que no siempre la solución “clásica” es la más adecuada y en que muchas experiencias locales valiosas no son luego retomadas ni sistematizadas por el Estado.

Otra línea de experiencias remitió al fortalecimiento de capacidades, sensibilización y formación. Además del trabajo con empresas mencionado por la Cámara de Comercio y Servicios, las intervenciones señalaron la importancia de los espacios participativos y de formación en torno al agua y al ambiente. En ese marco, Leandro Valdomir (MPP) hizo referencia a instancias de debate y articulación política impulsadas junto con el PNUD y la Escuela de Gobierno en la Cámara de Representantes, orientadas a instalar estas discusiones en el ámbito institucional. Por su parte, Mariana Ulery (AEU) mostró cómo la temática también empieza a permear ámbitos técnico-profesionales, a partir de la capacitación en derecho ambiental y de las consultas vinculadas a saneamiento, propiedad y regulación que surgen en la práctica profesional.

En conjunto, este eje muestra que las acciones y experiencias relevadas no se concentran únicamente en la expansión de infraestructura, sino que abarcan también regulación, monitoreo, educación, participación, conservación, fortalecimiento de capacidades y exploración de soluciones adaptadas a distintos territorios. Al mismo tiempo, una de las

ideas más sugerentes del intercambio fue que Uruguay ya cuenta con muchas experiencias locales y pequeñas soluciones, pero no siempre logra retomarlas, escalarlas, sistematizarlas ni aprender de ellas. Desde esa perspectiva, uno de los principales desafíos no sería la falta de iniciativas, sino fortalecer las capacidades estatales para integrarlas y convertirlas en insumos duraderos para el avance del ODS 6.

Algunas Propuestas desde Sociedad Civil

En el corto plazo, las propuestas priorizaron medidas orientadas a destrabar capacidades de acción ya existentes. En primer lugar, se reiteró la necesidad de fortalecer la articulación interinstitucional y multisectorial, entendida como una condición inmediata para avanzar en la gestión del agua y el saneamiento. En la misma línea, se subrayó la importancia de potenciar la participación ciudadana y fortalecer ámbitos ya existentes, como las comisiones y consejos de cuenca, dotándolos de mayores capacidades que redunden en la incidencia efectiva de estos espacios en la gestión integrada de los recursos hídricos. También se identificó como urgente sostener estándares de saneamiento seguro, evitar retrocesos hacia soluciones más precarias y mejorar la coordinación entre organismos prestadores. En ese marco, surgió la necesidad de avanzar en planes de seguridad del sistema de saneamiento a escala nacional, así como de fortalecer el acceso a información pública y las capacidades de seguimiento y monitoreo.

En una perspectiva de mediano plazo, las propuestas apuntaron a construir condiciones estructurales para un cumplimiento más sólido del ODS 6. Entre ellas, se destacó la necesidad de explorar mecanismos innovadores de financiamiento para infraestructura, saneamiento y conservación, incluyendo bonos temáticos, alianzas público-privadas y otras formas de movilizar recursos alineados con metas públicas. También se insistió en jerarquizar el tema en la agenda pública, política y parlamentaria, fortaleciendo su seguimiento más allá del Poder Ejecutivo. A esto se sumó la necesidad de profundizar la educación, la concientización y la formación profesional en torno al agua y al saneamiento, así como de promover mejores prácticas en los sectores productivos. Entre las propuestas complementarias presentadas por organizaciones en la plataforma digital, se destacan: la iniciativa de protección y restauración del humedal del Arroyo Maldonado y San Carlos (Ecoparque Metropolitano) con participación comunitaria; la creación de un programa nacional de reservas estratégicas de agua fuera de cauce para fortalecer la resiliencia hídrica; y una propuesta más integral referida al fortalecimiento de OSE como empresa pública con aumento de recursos y de personal, apuntando a la reducción de pérdida de agua en el sistema y a garantizar el control estatal sobre el agua embotellada.

* Para este recuadro también se tomó en cuenta la participación en la plataforma ciudadana

Lista de Asistentes (ODS 6)

Participante	Organización / Institución
Ana Paula García	Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de la República (Moderadora)
Andrea Gamarra	Ministerio de Ambiente (Punto focal ODS 6)
<i>Mesa de la mañana</i>	
Anabela Aldaz	Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSUY)
Magdalena Preve	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Mauro de la Vega	Alianza Uruguaya por el Agua (AUA)
Leandro Valdomir	MPP - Parlamento
Leonardo Martinez	Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (MEVIR)

Paula Suarez	Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA)
<i>Mesa de la tarde</i>	
Mariana Ulery	Asociación de Escribanos del Uruguay (AEU)
Soledad Avila	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

3.2 ODS 7

Energía asequible y no contaminante

3.2.1 Introducción

El día miércoles 4 de marzo de 2026, en el marco de un proceso de consulta pública para la elaboración del Informe Nacional Voluntario de Uruguay 2026 (INV), se llevaron a cabo dos mesas de intercambio centradas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7: *Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna*. Estas instancias reunieron a un conjunto de actores del sector público, la academia y la sociedad civil, y tuvieron como propósito fundamental diagnosticar el estado de situación del país respecto a las metas de energía, identificar desafíos y compartir propuestas o líneas de acción estratégicas de cara al futuro.

Esta actividad contó con la participación de catorce integrantes bajo la moderación de Sofía Lenzi y Nahuel Roel, en representación del equipo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. La instancia matutina reunió a delegados de la empresa pública de energía eléctrica (UTE), de MEVIR en calidad de organismo público de vivienda, y de la Intendencia de Montevideo (IM), que intervino mediante su Comisión de ODS y que previamente había atravesado un proceso de adaptación de la agenda de los ODS al nivel departamental. Asimismo, la discusión incorporó la participación de la presidencia del Colegio de Contadores. La presencia de la Dirección Nacional de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) como punto focal tuvo el objetivo de apoyar con discusiones sobre marcos normativos o datos técnicos.

En esta primera mesa, el diálogo se centró en ventajas y desventajas de los diferentes métodos de generación de energía, la trayectoria de la matriz energética nacional, los avances tecnológicos recientes y la eficiencia energética a nivel residencial, sobre todo en base al aporte de MEVIR. Se registró un consenso sobre la necesidad de fortalecer la articulación interinstitucional y de priorizar el componente educativo, integrando instancias

de capacitación que acompañen de manera efectiva la implementación de las políticas públicas en la materia.

En el caso de la segunda mesa, se resolvió unificar la instancia de discusión con los participantes del ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), por lo que estos articularon los contenidos de ambos ODS en sus intervenciones. En esta mesa, se sumó la Universidad Tecnológica (UTEC) integrando una voz de los organismos de educación terciaria, ANCAP presentó su visión desde las áreas de Sostenibilidad Corporativa y Planificación y Control Estratégico (Gerencia Estrategia), y participó la organización CEMPRE, asociación civil vinculada con la economía circular y el reciclaje, como parte de la sociedad civil organizada,

La segunda mesa adoptó un perfil orientado hacia las políticas educativas y la gestión de residuos. Asimismo, la participación de ANCAP desplazó el eje de la discusión hacia el uso de combustibles en el transporte y la industria, priorizándolos frente a la provisión de energía eléctrica. Hubo consenso entre los participantes sobre la urgencia de establecer una gobernanza de datos centralizada y de transparentar los esquemas de subsidios, a la vez que se destacó la importancia de consolidar la innovación tecnológica como un motor nacional, tanto para el sector productivo como para optimizar el gasto energético y la movilidad.

A lo largo de ambas mesas, emergió un consenso fundamental vinculado a que Uruguay ha transitado exitosamente una *"primera transición energética"* que lo posiciona como un referente global en la adopción de energías renovables. Los participantes coincidieron en que este logro fue posible gracias a una política de Estado que trascendió ciclos electorales y que, por necesidad, alineó a todo el sistema político-partidario detrás de objetivos comunes. Sin embargo, este reconocimiento externo convive con la percepción de una inminente y compleja *"segunda transición"* para la cual es imperativo alcanzar un grado de preparación adecuado.

Esto implica dar una discusión a nivel país en torno a asuntos como la gestión de riesgos ante el cambio climático y las sequías, la movilidad eléctrica y la gestión de las baterías que usan esos vehículos, y el desarrollo de nuevas alternativas en producción de energía sostenible como el hidrógeno verde. También se subrayó la importancia de discutir la dependencia de GLP para cocción, profundizando la búsqueda de mayor eficiencia energética en hábitos de consumo o sectores que aún dependen fuertemente de los combustibles fósiles. Al respecto, se aclaró que existe un límite para la descarbonización, dado que ciertas industrias no disponen hoy de alternativas viables frente al uso de combustibles fósiles.

En este contexto, las mesas funcionaron principalmente como un espacio de articulación de preocupaciones, donde surgieron diversas señales de alerta respecto al rol de la comunidad en la construcción de las políticas energéticas. Se identificó, por ejemplo, una brecha significativa entre el éxito técnico de la transición energética y la percepción ciudadana de que este no se ha reflejado en los costos, particularmente en los sectores de menores ingresos.

En consecuencia, el debate no solo se centró en la disponibilidad de infraestructura, sino en cómo asegurar que la provisión de energía en Uruguay conserve una visión centrada en la equidad en el acceso y en la asequibilidad, integrando una perspectiva de derechos humanos. En suma, las intervenciones reflejaron la visión de un país con una infraestructura sólida en materia de producción de energía, pero con desafíos pendientes para integrar plenamente la sostenibilidad energética en el tejido social y productivo.

3.2.2 Conocimiento e información

Durante el intercambio generado en ambas mesas quedó claro que el conocimiento sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y, específicamente, sobre el ODS 7, varía según el grado de vinculación de los actores con los procesos de implementación y seguimiento de las políticas públicas en materia de energía.

Por parte de los puntos focales como el MIEM queda claro que, al integrar los núcleos técnicos responsables de las estadísticas energéticas y la coordinación de políticas sectoriales, existe un manejo exhaustivo del lenguaje de la Agenda 2030, y las metas e indicadores relevantes en la materia. El rol del punto focal fue cooperar con el diálogo sobre las metodologías de construcción de indicadores y la elaboración de balances energéticos, y permitió aclarar criterios técnicos y metodológicos predefinidos para garantizar la comparabilidad de los datos de Uruguay con otros países.

La Intendencia de Montevideo (IM) destaca como un referente en la adaptación de la Agenda 2030 a las capacidades de un gobierno departamental, ya que cuenta con una trayectoria de trabajo sistemático que se remonta a 2020. Ana Bravo, integrante de la Comisión ODS de la Intendencia, detalló la existencia de un sistema transversal de comunicación interna que permite aglomerar la información de todas las divisiones para transformarla en informes sobre los ODS. Esta acumulación de conocimiento ha permitido que la agenda vinculada al ODS 7 forme parte de la planificación estratégica departamental, facilitando el seguimiento de metas específicas vinculadas a la movilidad sostenible y la eficiencia eléctrica en la infraestructura urbana.

En UTE, el conocimiento se centra en la gestión técnica y a nivel macro del sistema eléctrico y la integración de fuentes renovables, con una perspectiva histórica de largo plazo. María Carrau, desde la gerencia de gestión ambiental, compartió desafíos técnicos y oportunidades identificadas en la matriz eólica, tales como la estabilidad de la red y la complementariedad entre fuentes hidráulicas, solares y térmicas. Su análisis sitúa el desarrollo energético nacional en un marco de aprendizaje continuo y de “prueba y error” ante tecnologías novedosas, subrayando que la política energética publicada en 2008 y consolidada mediante el acuerdo multipartidario de 2010 ha sido el motor de la capacitación técnica alcanzada por el ente.

MEVIR presenta un nivel de conocimiento orientado a la aplicación operativa de la eficiencia energética en el hábitat residencial y, especialmente, en el rural. Verónica Helbling destacó que la institución ha mantenido una línea de trabajo constante desde 2018, centrada en mejorar la envolvente térmica de las viviendas y optimizar el equipamiento para reducir el consumo. Aunque reconoció que el vínculo formal con los ODS no siempre está plenamente explicitado en el lenguaje cotidiano de la organización, subrayó la importancia del conocimiento que surge del intercambio de primera mano con la población y de las instancias de capacitación directa a los usuarios para asegurar que las soluciones tecnológicas se traduzcan en ahorros reales y mejoras en la calidad de vida.

En ANCAP, la discusión sobre los principales elementos del ODS 7 se ha integrado recientemente como un eje central de la agenda estratégica corporativa. Sofía Ruiz y Sebastián Torrado explicaron que la empresa ha realizado una revisión exhaustiva de su capacidad de aporte a los objetivos de sostenibilidad, llegando a incorporar indicadores de cumplimiento de los ODS dentro de su sistema de gestión. Este proceso ha implicado la creación de una Gerencia de Transición Energética y el seguimiento de competencias específicas para preparar a la organización ante el declive proyectado de los combustibles fósiles y el surgimiento de nuevas alternativas renovables.

Desde la Universidad Tecnológica (UTEC), el conocimiento y la relación con los objetivos del ODS 7 se vincula con la formación de talento humano en energía y la investigación aplicada en el territorio. Álvaro Pena jerarquizó el rol de la Ingeniería en Energías Renovables como herramienta para acompañar las transiciones energéticas del país mediante la generación de conocimiento técnico descentralizado. Su perspectiva académica enfatiza la necesidad de sistematizar los nuevos roles laborales y las competencias necesarias para sectores emergentes como el hidrógeno verde, advirtiendo sobre la disparidad educativa que persiste en el interior del país como una limitante para la apropiación plena de estos avances

La relación de CEMPRE con el ODS 7 presentó un carácter menos lineal, ya que su presencia se vinculaba principalmente al ODS 9. No obstante, los delegados lograron vincular la agenda energética con la economía circular y la gestión sostenible de materiales. Marisa Cirillo y Emiliano Sánchez resaltaron la importancia de extender el ciclo de vida de los productos para reducir la dependencia de materias primas vírgenes y petróleo, señalando que existen brechas significativas en los datos sobre el valor energético de diversos materiales. Su labor se enfoca en la capacitación industrial y el desarrollo de sistemas de trazabilidad que permitan unificar criterios técnicos entre el sector privado y las cooperativas de clasificadores, facilitando una transición hacia modelos de producción más eficientes.

La contribución del Colegio de Contadores destacó la importancia de la transparencia informativa, señalando que el desafío principal para el avance de estas metas radica en la capacidad de articular y unir los esfuerzos de los distintos organismos estatales, evitando la duplicación de tareas o contradicciones operativas generadas por la falta de comunicación.

Finalmente, el diagnóstico sobre el nivel de conocimiento de los ODS y en particular del ODS 7 se transforma en un asunto más crítico cuando se analiza la apropiación social de la agenda por fuera de las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil. Se señaló por parte de los participantes que, a pesar de los avances técnicos, la ciudadanía sigue sin conocer los ODS en un sentido sustantivo, lo que genera una percepción de que se trata de una agenda externa a los problemas cotidianos.

Experiencias desde Sociedad Civil

La mesa matutina concentró el diálogo en los métodos de generación, la trayectoria de la matriz energética nacional y la eficiencia a nivel residencial, mientras que la vespertina se realizó en conjunto con el ODS 9, lo que implicó la incorporación a la discusión de asuntos con eje en industria, innovación y economía circular, además de centrarse más en el uso de combustibles en el transporte y los procesos productivos.

Hubo consenso sobre la exitosa “primera transición energética” que posicionó a Uruguay como referente global en renovables, producto de una política de Estado iniciada en 2008 y consolidada en un acuerdo multipartidario de 2010, que trascendió ciclos electorales y alineó al sistema político detrás de objetivos comunes. Sin embargo, ese logro convive con la preocupación por una “segunda transición” pendiente, que incluye la gestión de riesgos ante el cambio climático y las sequías, la movilidad eléctrica y el destino final de las baterías, el desarrollo del hidrógeno verde, la dependencia del GLP para cocción y los límites técnicos de la descarbonización en ciertas industrias que hoy no disponen de alternativas viables al uso de combustibles fósiles.

De forma transversal emergió un análisis que identifica una brecha entre el éxito a nivel macro y la percepción ciudadana respecto a los costos energéticos, particularmente en sectores de menores ingresos, lo que desplazó el debate hacia la equidad en el acceso, la asequibilidad y la integración de una perspectiva de derechos humanos. Como déficit de fondo, apareció la baja apropiación social de la Agenda 2030, que sigue siendo percibida como una agenda externa a los problemas cotidianos, y la fragmentación institucional, que limita la capacidad de articular esfuerzos entre actores estatales, académicos, privados y de la sociedad civil, y que hace que organismos diversos “tiren de una misma cuerda” en direcciones opuestas en lugar de sumar capacidades en torno a metas comunes.

En referencia al ODS 7, una experiencia positiva mencionada fue la de CEMPRE. El organismo articula la agenda energética con la economía circular bajo la premisa de que la innovación en infraestructura de reciclaje es, en última instancia, una forma sustantiva de ahorro energético. Impulsa el programa “Dónde Reciclo” como herramienta de comunicación ciudadana y avanzó en la implementación de un sistema de trazabilidad en cooperativas de clasificadores que unifica datos y criterios técnicos entre el sector privado y los trabajadores del reciclaje. Identificó como asuntos a resolver la brecha de datos sobre el valor energético de los materiales y la ausencia de incentivos fiscales claros para la reutilización, que impiden escalar experiencias piloto a nivel industrial.

Otra buena experiencia identificada es la del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, que aporta desde la dimensión de transparencia informativa y gobernanza, señalando que la falta de comunicación entre organismos estatales provoca duplicación de tareas y contradicciones operativas que debilitan el avance hacia las metas del ODS 7. Participó desde una postura de apertura y aprendizaje, buscando comprender cómo los desafíos energéticos impactan en la realidad empresarial y cómo mejorar la articulación institucional.

3.2.3 Valoraciones

Las mesas de trabajo evidenciaron un consenso respecto a la exitosa trayectoria de Uruguay en la transformación de su matriz eléctrica. No obstante, dicha valoración coexiste con una preocupación colectiva en torno a la adaptabilidad del país ante las tecnologías emergentes, la naturaleza recaudatoria de la entidad estatal de energía y el costo de las tarifas, especialmente para la población mas vulnerable. Asimismo, se destacó la urgencia de fortalecer la gobernanza institucional para abordar con efectividad y cohesión los desafíos que presenta la segunda transición energética.

Por parte de los puntos focales del MIEM, la valoración principal destaca la solidez de la política de Estado iniciada en 2008, la cual ha permitido alinear a diversos actores políticos y técnicos bajo un objetivo común de soberanía energética. No obstante, se reconoció una tensión entre los logros macro-estadísticos y la percepción ciudadana. Alejandra Reyes subrayó además que, aunque Uruguay debe reportar datos bajo criterios predefinidos para garantizar la comparabilidad, a veces estas cifras generan dudas sobre si reflejan la particularidad del avance nacional. El ministerio valora la importancia de aclarar estas disparidades para que se comprenda correctamente por qué Uruguay se sitúa en determinados niveles de cumplimiento.

La Intendencia de Montevideo (IM) valoró de forma crítica la brecha existente entre las metas nacionales que fija el ODS 7 y las capacidades de ejecución del gobierno departamental. Ana Bravo enfatizó que, si bien la "localización" de los ODS ha avanzado en términos de reporte, todavía persiste una fragmentación importante entre los proyectos de sostenibilidad que llevan adelante. La IM valora positivamente la incorporación de la agenda climática en la planificación departamental, pero advierte que la transición hacia una movilidad eléctrica masiva requiere de una articulación más profunda con el gobierno central para evitar una distribución desigual de los costos.

En UTE, la valoración técnica subraya que Uruguay ha alcanzado un techo en su primera transición, lo que obliga a repensar el modelo de negocio del ente. María Carrau valoró como un hito la estabilidad lograda con la matriz eólica y solar, pero fue enfática en señalar que la infraestructura actual se encuentra bajo presión ante el aumento proyectado de la demanda, sobre todo en época estival y ante el impacto de nuevos fenómenos como la movilidad eléctrica.

Existe una valoración de cautela respecto a la integración de nuevas tecnologías como el hidrógeno verde. Se entiende que la innovación es necesaria, pero se debe tener en cuenta la magnitud de las inversiones y es importante no comprometer en ninguna medida la confiabilidad del sistema.

La representación de UTE cuestionó además el decreto de 2024 que permite a los grandes consumidores contratar energía con privados utilizando la red estatal, señalando que la migración de este segmento afecta la rentabilidad del ente. Se advirtió que la pérdida de estos ingresos compromete el financiamiento de los costos fijos y de las políticas de inclusión, como las tarifas diferenciales para sectores vulnerables. Esta normativa fue identificada como no alineada con el ODS 7 y como un desafío para el cumplimiento de los mismos, al debilitar el rol de la empresa pública.

MEVIR aportó una valoración centrada en la dimensión humana de la energía, señalando que el éxito de la política energética debe medirse también en el interior de los hogares. Verónica Helbling valoró como una debilidad estratégica la falta de continuidad de ciertos programas transversales que unían vivienda y energía, advirtiendo que los cambios en la gestión política suelen erosionar aprendizajes institucionales previos. Para MEVIR, la eficiencia energética es valorada como una herramienta de justicia social; sin embargo, se detectó una preocupación clara: de nada sirve instalar equipamiento de alta eficiencia en el medio rural si no se brinda capacitación en cómo usar, y mantener estos equipos.

En ANCAP, la valoración se centró en la velocidad de la transición y el riesgo de obsolescencia de los activos industriales tradicionales. Sofía Ruiz y Sebastián Torrado valoraron que la empresa se encuentra en un punto de inflexión donde debe gestionar la declinación de los combustibles fósiles mientras se avanza en alternativas renovables. Se valoró positivamente la creación de una Gerencia de Transición Energética, aunque se advirtió que muchos sectores industriales y la movilidad ciudadana dependen todavía fuertemente del petróleo, con pocas expectativas de cambio a corto plazo. ANCAP, por otro lado, valora que avanzar en soberanía energética es imprescindible, y en ese marco cobra sentido continuar la búsqueda de combustibles fósiles en territorio nacional.

Desde la Universidad Tecnológica (UTEC), la valoración académica apunta a una desconexión entre el ritmo de la innovación tecnológica y la velocidad de adaptación del sistema educativo. Álvaro Pena valoró como un riesgo estratégico que el país desarrolle grandes infraestructuras energéticas sin haber formado previamente el talento humano local para operarlas, lo que podría derivar en una dependencia tecnológica externa. Existe una valoración especialmente crítica sobre la ansiedad que generan los nuevos proyectos extractivos en el interior del país. La falta de información técnica clara y accesible para la población local es vista como una barrera que puede generar resistencias sociales legítimas.

En CEMPRE, la valoración vincula la eficiencia energética con la gestión de los materiales desechados. Marisa Cirillo y Emiliano Sánchez valoraron que el sector industrial uruguayo todavía tiene una visión lineal de la producción, donde se descartan materiales que podrían ser reinsertados. Se valoró como una oportunidad perdida la falta de incentivos fiscales claros para la reutilización, señalando que la innovación en infraestructura de reciclaje es, en última instancia, una forma significativa de ahorro energético. La valoración compartida es que el país cuenta con el marco normativo, pero le falta la infraestructura de escala para que la economía circular deje de ser una serie de experiencias piloto y pase a ser la norma a nivel industrial.

Finalmente, el Colegio de Contadores ofreció una valoración centrada en la eficiencia administrativa. Silvia Leal enfatizó que el éxito de los ODS depende de una gobernanza capaz de articular esfuerzos institucionales, advirtiendo que la falta de comunicación actual provoca que diversos organismos trabajen de forma aislada o duplicada.

Esta síntesis de valoraciones refleja que, si bien Uruguay es un modelo de éxito en generación renovable, los actores clave identifican que la sostenibilidad futura depende de resolver la fragmentación institucional, transparentar los costos de la transición y generar un ecosistema propicio para la innovación tecnológica y la reducción, en consecuencia, de brechas educativas o territoriales existentes.

3.2.4 Acciones y desafíos

Las intervenciones de los actores durante las mesas de trabajo permitieron identificar una serie de experiencias concretas fuertemente vinculadas con el ODS 7, evidenciando el tránsito desde la planificación teórica hacia la ejecución en el territorio y la industria.

Por parte de los puntos focales del MIEM, las acciones se centran en el fortalecimiento del sistema de monitoreo y la creación de incentivos para la reconversión tecnológica. La Dirección Nacional de Energía destacó la gestión de fondos como el Fideicomiso Uruguayo de Ahorro y Eficiencia Energética (FUDAEE) y el Fondo Industrial, que han permitido financiar proyectos de eficiencia energética en el sector privado y residencial. Asimismo, lideran actualmente la actualización de la política energética nacional a nivel integral, originalmente trazada para el periodo 2008-2030, para incorporar los avances de la segunda transición.

La Intendencia de Montevideo (IM) ha enfocado sus acciones en materia de energía en la modernización de la infraestructura y la movilidad. Ana Bravo detalló el impacto del programa de recambio de luminarias LED, que ha permitido a la comuna optimizar el gasto público mientras mejora la calidad del servicio lumínico. En el ámbito de la movilidad, la IM ha facilitado la incorporación de ómnibus eléctricos y la expansión de la red de carga pública. Esta experiencia de trabajo con los ODS en clave departamental se traduce en datos concretos que alimentan reportes voluntarios, que a su vez permiten ajustar las políticas de transporte y gestión de residuos, como la valorización de aceites usados, a las necesidades específicas de la población capitalina.

En UTE, las experiencias compartidas por María Carrau se centran en la exitosa integración de energías renovables no convencionales, destacando el hito de la implementación de la energía eólica en tiempo récord desde 2012 y la actual expansión de la solar fotovoltaica con

parques en Punta del Tigre y Melo . A nivel territorial, la acción de inclusión más destacada fue el proyecto para viviendas alejadas de las redes eléctricas, donde se instalaron kits con paneles solares, una heladera eficiente de clase A y tres tomas de corriente, logrando un cambio radical en la calidad de vida de las familias rurales. Asimismo, la empresa ha liderado la promoción de la movilidad eléctrica mediante la instalación de puntos de carga en todo el territorio nacional. No obstante, Carrau advirtió que la sostenibilidad de estas acciones sociales depende de la rentabilidad del ente, la cual se ve amenazada por el decreto de 2024 que permite a los grandes consumidores contratar energía con privados, afectando los ingresos que financian las tarifas diferenciales y los planes de inclusión para los sectores más vulnerables.

MEVIR ha consolidado un modelo que integra el acceso al hábitat digno con la eficiencia energética, enfocándose en la población de menores ingresos en el medio rural y pequeñas localidades. Verónica Helbling explicó que desde 2018 la institución mantiene una línea de trabajo sostenida que incluye mejoras en la envolvente de la vivienda, como aislaciones térmicas en muros y techos, y la instalación de cortinas de enrollar en dormitorios y estares para optimizar el comportamiento climático del hogar. Entre las acciones concretas, destacó la sustitución de la estufa a leña tradicional por equipos de alto rendimiento y la implementación de colectores solares térmicos para el agua caliente sanitaria, alcanzando ya los 165 equipos instalados. Esta experiencia se apoya en convenios estratégicos con el MIEM para financiar tecnologías como extractores y calefones eficientes, y se refuerza mediante un proceso de medición en sitio y talleres educativos obligatorios para que las familias aprendan a consolidar su ahorro energético.

En ANCAP, las acciones y experiencias se enmarcan en una agenda estratégica que busca gestionar la reconversión del negocio refinero tradicional hacia modelos compatibles con la sostenibilidad. Sofía Ruiz y Sebastián Torrado destacaron como un hito interno la inclusión de indicadores vinculados al cumplimiento de los ODS dentro del sistema de remuneración variable y el cuadro de mando integral corporativo. Esta integración estratégica permite que el desempeño ambiental sea un factor medible de competitividad, complementado con un indicador que monitorea la capacitación del personal en competencias verdes y de transición. Asimismo, la organización trabaja en algunos proyectos piloto de hidrógeno verde para el medio local (como el transporte de carga pesada) y sigue de cerca la eficiencia del subsidio focalizado al supergás (GLP), ya que se ha identificado la necesidad de transparentar y mejorar el sistema asegurando el acceso a la energía a la población más vulnerable.

Desde la Universidad Tecnológica (UTEC), las experiencias se centran en la descentralización de la innovación y la formación técnica. Álvaro Pena resaltó la creación de laboratorios de investigación aplicados en el interior del país, donde se desarrollan proyectos de almacenamiento energético y sistemas que combinan la producción agropecuaria con la generación de energía. Estas acciones buscan generar evidencia científica local y preparar a los técnicos necesarios para operar la infraestructura energética en sus propias comunidades.

En CEMPRE, las acciones se orientan a acelerar el cumplimiento de la normativa ambiental, particularmente la Ley de Envases. Marisa Cirillo expuso la experiencia del programa "Donde Reciclo" como herramienta de comunicación ciudadana y el reciente avance en la implementación de un sistema de trazabilidad en las cooperativas de clasificadores, lo que permite unificar datos y criterios técnicos entre el sector privado y los trabajadores del reciclaje. Estos proyectos permiten que las empresas reduzcan su consumo energético al reincorporar materiales al ciclo productivo, vinculando directamente la innovación en infraestructura de reciclaje con las metas de consumo responsable y eficiencia.

El Colegio de Contadores participó desde una postura de apertura y aprendizaje. Silvia Leal señaló que, si bien su ámbito profesional son los estados financieros, la institución busca acercarse a estas discusiones estratégicas para comprender cómo los desafíos energéticos impactan en la realidad de las empresas y cómo mejorar la articulación entre los diversos actores institucionales.

Algunas Propuestas desde Sociedad Civil

En el corto plazo, las propuestas se orientaron a mejorar la equidad en el acceso a la energía, fortalecer la capacidad de acción del Estado y optimizar la coordinación institucional. En primer lugar, se planteó la necesidad de reincorporar la Tarifa de Consumo Básico para hogares de menor consumo eléctrico, como mecanismo para garantizar un acceso más equitativo, particularmente para poblaciones vulnerables. En la misma línea, se subrayó la importancia de transparentar y mejorar la focalización del subsidio al supergás, asegurando que alcance efectivamente a los sectores que lo necesitan. Asimismo, se propuso impulsar un proceso de recambio de la flota estatal hacia vehículos eléctricos o híbridos, acompañado de una asignación efectiva de los recursos provenientes del impuesto al carbono a proyectos de transición energética. También se identificó como urgente la adopción de estándares de iluminación responsable en el alumbrado público, incorporando criterios que reduzcan el impacto ambiental y sanitario. A nivel institucional, se destacó la necesidad de fortalecer espacios permanentes de articulación entre organismos públicos —como MIEM, UTE, ANCAP e intendencias— y la sociedad civil, evitando superposiciones y mejorando la coherencia de las políticas. Finalmente, se señaló la importancia de revisar el marco normativo reciente sobre contratación de energía entre privados, ante el riesgo de que la migración de grandes consumidores debilite la sostenibilidad financiera de UTE y, con ello, de las políticas sociales asociadas al acceso a la energía.

En una perspectiva de mediano plazo, las propuestas apuntaron a consolidar un enfoque estratégico e integrado de la transición energética. En este sentido, se planteó la adopción del enfoque del Trilema Energético —que articula seguridad, equidad y sostenibilidad ambiental— como marco conceptual para el diseño y evaluación de políticas, acompañado por el desarrollo de indicadores nacionales comparables a nivel internacional. También se propuso avanzar en la valorización energética de residuos, mediante programas piloto a nivel departamental que permitan escalar hacia una estrategia nacional de biometano, con impactos positivos en múltiples ODS. En el plano productivo y laboral, se destacó la necesidad de anticipar la formación técnica vinculada a los empleos verdes, fortaleciendo el rol de instituciones educativas y de capacitación para reducir la dependencia tecnológica y las brechas territoriales. A su vez, se planteó la importancia de consolidar sistemas de información sobre reciclaje y economía circular, junto con incentivos que promuevan el uso de materiales reciclados en la industria. En relación con la movilidad eléctrica, se propuso avanzar hacia una gestión integral que contemple tanto el origen renovable de la energía como el tratamiento final de las baterías. Finalmente, se subrayó la necesidad de ampliar la cobertura de programas de eficiencia energética en ámbitos rurales y en asentamientos dispersos, asegurando no solo el acceso a tecnologías, sino también la capacitación necesaria para su uso y mantenimiento.

* Para este recuadro también se tomó en cuenta la participación en la plataforma ciudadana

Lista de Asistentes (ODS 7)

Participante	Organización / Institución
Sofía Lenzi	Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de la República (Moderadora)
Nahuel Roel	Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de la República (Moderador)
Alejandra Reyes	Dirección Nacional de Energía - MIEM
Ana Bravo	Intendencia de Montevideo (Comisión ODS)

Verónica Helbling	MEVIR
María Carrau	UTE
Silvia Leal	Colegio de Contadores
Álvaro Pena	Universidad Tecnológica (UTEC)
Sofía Ruiz	ANCAP
Sebastián Torrado	ANCAP
Marisa Cirilo	CEMPRE
Emiliano Sánchez	CEMPRE
Jenniffer Velazco	Ministerio de Industria, Energía y Minería
Mauro Padula	Ministerio de Industria, Energía y Minería

3.3 ODS 9

Industria, Innovación e Infraestructura

3.3.1 Introducción

El pasado 4 de marzo de 2026 se desarrollaron mesas de diálogo en el marco del proceso de elaboración del Informe Nacional Voluntario (INV) 2026 de Uruguay, impulsado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y coordinado en su componente de consulta pública por la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad de la República. El objetivo de las instancias fue recoger, de manera sistemática, las perspectivas, valoraciones y propuestas de actores multisectoriales en relación con los ODS seleccionados para el reporte de este año (6,7,9,11 y 17), a efectos de enriquecer el capítulo correspondiente del informe.

Este informe analítico se centra particularmente en las mesas del ODS 9: *Industria, Innovación e Infraestructura*. Estas instancias fueron grabadas con consentimiento de los participantes. Los registros fueron sometidos a transcripción y sistematización por el equipo moderador. La presente relatoría constituye el instrumento técnico de síntesis de ambas sesiones, con la intención de servir como insumo directo para el INV 2026.

A lo largo de la jornada, se realizaron dos mesas: la Mesa 1 en horario matutino y la Mesa 2 en horario vespertino. La moderación de la Mesa 1 estuvo a cargo de Sofía Lenzi (FCS-UdelaR). La Mesa 2 fue co-moderada por Sofía Lenzi y Nahuel Roel (FCS-UdelaR). En esta última se abordó —además del ODS 9— el ODS 7: *Energía asequible y no contaminante*.

En total, ambas mesas convocaron a dieciséis personas en roles sustantivos, representando a doce instituciones de distinta naturaleza sectorial: organismos del Estado central, organismos paraestatales, organismos internacionales, instituciones académicas, gobiernos subnacionales, sector privado y organizaciones de la sociedad civil. El listado completo de participantes figura en el Anexo.

En términos de cobertura temática, las metas del ODS 9 no recibieron un tratamiento homogéneo en el conjunto de ambas mesas. La coexistencia del ODS 9 con el ODS 7 en la Mesa 2 tuvo un efecto de desplazamiento significativo: la transición energética absorbió la mayor parte del intercambio, relegando las dimensiones de infraestructura física, industrialización inclusiva y conectividad digital propias del ODS 9. La meta 9.3 —pymes, pequeñas industrias y acceso a financiamiento—, tratada con profundidad en la Mesa 1 a través de los aportes de Pía Alonso (ONUDI) y Juan Oportti (CZFUY), estuvo completamente ausente en la Mesa 2. Lo mismo ocurrió con la meta 9.c –Acceso universal a las TIC – cuyo abordaje en la Mesa 1 fue uno de los más ricos del proceso, articulado por Ceibal y la Intendencia de Montevideo.

También merece señalarse que la meta 9.1 —infraestructura física confiable, resiliente y de acceso asequible— fue prácticamente ignorada en el conjunto de las dos mesas. Solo fue mencionada tangencialmente por Juan Oportti (CZFUY) en el contexto de la multimodalidad logística. Esta omisión resulta particularmente significativa considerando que Uruguay enfrenta desafíos pendientes en materia de conectividad vial en el interior del país y que los indicadores globales del ODS 9 incluyen explícitamente la proporción de población rural con acceso a rutas transitables. Su ausencia puede reflejar un sesgo de convocatoria hacia actores vinculados a la innovación y la tecnología, y podría ser compensada en instancias complementarias.

3.3.2 Conocimiento e información

La apropiación de la Agenda 2030 entre los participantes de ambas mesas es heterogénea pero, en términos generales, superior a lo esperable en una consulta pública ampliada. Ello se explica, en parte, por el perfil de las instituciones convocadas; organismos con mandatos específicos vinculados a la sostenibilidad, la innovación o la cooperación internacional, cuyo vínculo con el marco ODS forma parte de sus funciones declaradas o de sus estrategias institucionales.

En la Mesa 1, el nivel de apropiación fue alto y con frecuencia operativo, es decir, vinculado a prácticas concretas de planificación y reporte. Jimena Souteras (Ceibal) señaló que los marcos de reporte externos, como los estándares GRI, no siempre son interpretados ni implementados en adecuada articulación con la gestión interna de la organización —cuando sí lo son, pueden alinearse plenamente con ella— y planteando la fusión de la memoria institucional con el reporte de sostenibilidad como práctica de eficiencia organizacional. Su planteo —sintetizado en la afirmación de que 'en Ceibal la sostenibilidad es educación'—

ilustra un nivel de apropiación estratégica que va más allá del cumplimiento formal. Alejandro Martínez (Ceibal) complementó ese enfoque con una perspectiva más operativa, vinculada a la infraestructura tecnológica y a la medición de impacto.

Pía Alonso (ONUDI) aportó una perspectiva normativa y global, en su calidad de representante de la agencia custodio del ODS 9 dentro del sistema de Naciones Unidas, trayendo referencias al informe global de ONUDI sobre megatendencias y al estado de avance del objetivo por regiones. Matilde Cánepa (Intendencia de Montevideo) vinculó el ODS 9 con los procesos de elaboración de Informes Locales Voluntarios, demostrando apropiación institucionalizada en el nivel subnacional. Juan Opertti (CZFUY) articuló los tres ejes del objetivo —industria, innovación e infraestructura— con claridad y desde una perspectiva multisectorial que incluyó la dimensión académica y la del sector privado. Daniel Carranza (OPP/DATA Uruguay) mostró un manejo reflexivo y crítico del marco ODS, reconoció su valor instrumental pero señaló que su adopción real requiere ser encadenada a marcos conceptuales que la gente ya maneja, evitando la percepción de tarea adicional.

Jennifer Velazco (MIEM) y Carolina Mena (MIEM) participaron en calidad de puntos focales institucionales, rol que denota un nivel de apropiación formal del proceso aunque sus intervenciones se limitaron a la ronda inicial. Manuela Romero (ONUDI) asistió en calidad de pasante con un rol de observación.

En la Mesa 2, el nivel de apropiación presentó mayor variabilidad y se vio condicionado, tal como se mencionó anteriormente, por la dinámica compartida con el ODS 7. Álvaro Pena (UTEC) demostró conocimiento profundo del ODS 9 y sus implicancias para la política de ciencia, tecnología e innovación, situando el análisis en el contexto del PENTI (Plan Estratégico Nacional de Tecnología e Innovación) y de la distribución territorial de capacidades. Sofía Ruiz (ANCAP) mostró un nivel de apropiación avanzado, vinculando el ODS directamente a los instrumentos de gestión corporativa.

Marisa Cirillo (CEMPRE) mencionó explícitamente haberse apoyado en una síntesis escrita para recordar las metas específicas del ODS 9, dato que ilustra el uso pragmático del marco sin necesariamente reflejar una apropiación orgánica. Su abordaje sustantivo, sin embargo, fue sólido y específico, centrado en las metas 9.4 y 9.5. Sebastián Torrado (ANCAP) y Alejandra Reyes (DNE/MIEM) mostraron manejo sólido de los indicadores sectoriales energéticos, aunque su vínculo con el ODS 9 fue más periférico. Jenniffer Velazco (MIEM), Mauro Padula (MIEM) y Emiliano Sánchez (CEMPRE) participaron como puntos focales o acompañantes sin intervenciones sustantivas registradas.

Experiencias desde Sociedad Civil

Las mesas de diálogo sobre el ODS 9 evidenciaron un nivel de apropiación de la Agenda 2030 generalmente alto, explicado en parte por el perfil técnico de las instituciones convocadas. El tratamiento de las metas fue heterogéneo. La coexistencia con el ODS 7 en la sesión vespertina desplazó la agenda hacia la transición energética, relegando los ejes de industrialización y conectividad. La meta 9.1 (infraestructura física resiliente y de acceso asequible) fue escasamente tratada en ambas mesas, lo que puede reflejar un posible sesgo de convocatoria hacia actores vinculados a la innovación y la tecnología.

La valoración predominante situó al país en un nivel intermedio. Se identificaron avances reales pero insuficientes para alcanzar las metas al 2030. Algunas de las principales fortalezas reconocidas incluyeron la matriz energética renovable, la infraestructura tecnológica educativa, el marco normativo avanzado en economía circular, y una gobernanza que facilita la articulación entre actores públicos y privados. Los desafíos estructurales recurrentes incluyeron la fragmentación de la política de innovación, la brecha territorial en acceso a educación terciaria, la desconexión entre la agenda ODS y la gestión estratégica institucional y la invisibilidad de la innovación generada fuera del circuito formal —cooperativas, sindicatos, sociedad civil—. La consulta evidenció, como déficit de fondo transversal, la ausencia de un plan de desarrollo país integrado que otorgue coherencia al conjunto de iniciativas en curso.

Entre las experiencias destacadas de iniciativas de la sociedad civil se mencionó la de CEMPRE, que construyó una taxonomía común con cooperativas de clasificadores como base para un sistema de trazabilidad de materiales reciclados, resolviendo años de nomenclatura fragmentada. Sostiene un programa de capacitación descentralizado (Rivera, Tacuarembó, Treinta y Tres) que conecta industria y cooperativas del interior. Identificó la innovación frugal emergente en el sector informal —soluciones de alto valor generadas con pocos recursos y alta necesidad— como un potencial de I+D aplicada, algo no abordado ni por la academia ni por la industria.

3.3.3 Valoraciones

En la Mesa 1, la moderadora propuso un ejercicio de semáforo para que los participantes evaluaran el estado de avance del ODS 9 en Uruguay. Hubo un consenso entre todos los participantes que tomaron la palabra al ubicar al país en amarillo, marcando un avance real pero insuficiente para completar las metas al 2030.

Matilde Cánepa (IM) fundamentó esa valoración en la percepción de que, si bien existe mucho trabajo en curso, falta potenciar la articulación entre actores y comunicar con más claridad que todos trabajan hacia los mismos objetivos. Juan Operti (CZFUY) organizó su respuesta en torno a tres conceptos —resiliencia, sostenibilidad e innovación— señalando que Uruguay ha demostrado su capacidad de resiliencia (especialmente durante la pandemia) y que la sostenibilidad industrial ya no es una opción sino un mandato de mercado, pero que la innovación requiere ser impulsada desde edades tempranas y comunicada con mayor sistematicidad. Daniel Carranza (OPP/DATA Uruguay) identificó dos barreras específicas; la percepción de los ODS como trabajo extra y la confusión entre innovación y tecnología de software. Jimena Souteras (Ceibal) estructuró su valoración en torno a tres desafíos: coordinación, comunicación y alineación de indicadores de gestión con los ODS. Alejandro Martínez (Ceibal) subrayó que en contextos de restricción de recursos la innovación cobra mayor centralidad, pero requiere más coordinación y visibilización.

En la Mesa 2, si bien no se aplicó el mismo ejercicio, las valoraciones implícitas resultaron consistentes con ese diagnóstico. Álvaro Pena (UTEC) señaló que Uruguay cuenta con un contexto favorable en términos de reconocimiento internacional por su matriz energética, pero que la percepción del valor agregado en industria e innovación es desigual según sector y territorio. Sofía Ruiz (ANCAP) destacó avances en eficiencia energética y penetración de renovables, pero reconoció que la inversión de ANCAP en I+D sigue muy por debajo de los estándares internacionales. Marisa Cirillo (CEMPRE) aportó un dato estructural de contexto global, advirtiendo que el indicador de circularidad de la Fundación MacArthur cayó de 9 a 7 en 2025, lo que denota que el retroceso en cadenas industriales sostenibles no es solo un problema uruguayo sino una tendencia global que agrava el punto de partida nacional.

Fortalezas reconocidas por los participantes

A lo largo de ambas mesas emergió un conjunto de fortalezas que los participantes identificaron como bases sólidas sobre las que Uruguay puede proyectar su avance en el ODS 9. En materia energética, Álvaro Pena (UTEC) y Sofía Ruiz (ANCAP) coincidieron en señalar el reconocimiento internacional de la transición energética y la matriz renovable como un activo diferencial del país. Juan Opertti (CZFUY) destacó la existencia de un ecosistema de innovación con proyección regional, sustentado en la logística multimodal, las zonas francas con estándares internacionales y una creciente capacidad de atracción de inversión extranjera, al que Matilde Cánepa (IM) complementó con experiencias de innovación institucional en el nivel subnacional: la Gerencia de Innovación, el Polo Tecnológico Industrial del Cerro y el reconocimiento internacional obtenido por la estrategia de datos de la Intendencia.

Desde Ceibal, Alejandro Martínez destacó la infraestructura tecnológica educativa desplegada en todo el territorio y la reducción prácticamente completa de las brechas digitales entre quintiles, mientras que Jimena Souteras subrayó el posicionamiento de Uruguay como referente latinoamericano en inteligencia artificial educativa, con el EduIA Lab como primer laboratorio regional del sur. Marisa Cirillo (CEMPRE) identificó como fortaleza el marco normativo avanzado en economía circular respecto a la región, con la ley de responsabilidad extendida del productor y la ley de envases como instrumentos concretos¹. Daniel Carranza (OPP/DATA Uruguay) y Juan Opertti (CZFUY) coincidieron en valorar el activo intangible de gobernanza que representa la facilidad de articulación entre actores públicos y privados, con una accesibilidad institucional que facilita el acceso directo a los niveles de decisión. En esa dirección, Alejandro Martínez (Ceibal) y Carranza destacaron la base de transparencia e integridad institucional como fundamento diferencial que habilita diálogos honestos entre actores de distinto origen sectorial.

Finalmente, Álvaro Pena (UTEC) y Jimena Souteras (Ceibal) identificaron señales positivas en la coordinación de la política de innovación: el PENTI en proceso de elaboración, la Agencia

¹ En su revisión del borrador, Marisa Cirillo (CEMPRE) precisó que la economía circular debería ser entendida como componente de la infraestructura productiva del país, más allá de su asociación habitual a la gestión de residuos.

de Innovación con coordinación desde Presidencia y los nuevos arreglos institucionales en ciencia y tecnología fueron mencionados como indicios de una mayor integración estratégica hacia adelante. Pía Alonso (ONUDI) cerró ese panorama destacando el proyecto REIF como hito de financiamiento innovador: diez millones de dólares para un país graduado de la cooperación tradicional, con un instrumento de co-financiamiento bancario que movilizó treinta millones de inversión privada, constituyendo un modelo replicable para otros rubros y contextos.

Desafíos estructurales identificados

En primer lugar, Juan Opertti (CZFUY) identificó el talento como el principal dolor del sector productivo vinculado a zonas francas y logística, en todos sus niveles. Apuntó que en cadena de suministro y logística existe una sola universidad con carreras cortas en el país, pese a que el sector exporta más que el turismo y el software. Mencionó que está inaugurando un centro logístico farmacéutico con automatización de primer nivel, para el cual deberá desarrollar cursos in company para más de 200 personas por ausencia de oferta formativa disponible. Alejandro Martínez (Ceibal) introdujo un matiz estructural: advirtió que el problema no es solo de desarticulación entre oferta y demanda formativa, sino que Uruguay puede carecer de masa crítica suficiente de empresas con determinadas tecnologías para justificar la formación especializada que se reclama. En la misma línea, durante la sesión vespertina, Álvaro Pena (UTEC) cuantificó la brecha en términos de acceso a educación terciaria: 30% en Montevideo, 3-4% en localidades del interior, señalando que Uruguay no tiene formación pública específica en innovación y que el único posgrado disponible en la materia está en Ingeniería, representando un nicho muy reducido.

En materia de coordinación de políticas de innovación y la visibilidad de la misma, Álvaro Pena (UTEC) identificó la ausencia de un plan de desarrollo país integrado como el déficit de fondo, señalando como debilidad que el perfil histórico del emprendimiento financiado por la ANII —varón, ingeniero, residente en barrio de altos ingresos de Montevideo— contradice cualquier pretensión de una estrategia de innovación con alcance territorial. Daniel Carranza (OPP/DATA Uruguay) advirtió sobre el riesgo de seguir generando pilotos de innovación sin cambios estructurales en los incentivos, y señaló además que la innovación producida por la sociedad civil está explícitamente excluida de los instrumentos de la ANII, la CND y la ANDE, lo que invisibiliza un volumen significativo de innovación real. Siguiendo esa lógica, Alejandro Martínez (Ceibal) identificó una zona de innovación no medida ni comunicada, ejemplificada en la logística inversa de Ceibal — que cuenta con 180.000 equipos y 300.000 repuestos mensuales— cuyo volumen e impacto no figura en ningún indicador ODS.

Por otra parte, Pía Alonso (ONUDI) articuló con precisión el dilema de las pymes respecto al ODS 9, cuyas urgencias operativas cotidianas —pagos de salarios, BPS, impuestos— les impiden incorporar la dimensión de sostenibilidad y reconversión tecnológica. Las grandes empresas, en cambio, cuentan con equipos dedicados o reproducen exigencias de sus casas matrices, lo que genera una apropiación profundamente desigual del marco según tamaño

empresarial. Para ilustrar los límites de los instrumentos de incentivo existentes, citó la experiencia del voucher de innovación de CORFO en Chile: las empresas accedían al beneficio pero luego destinaban la devolución fiscal a otros fines, frustrando el objetivo original del instrumento. El desafío, en su lectura, consiste en diseñar mecanismos que acompañen al sector productivo para entender que una mayor eficiencia en el uso de los recursos o una adecuación tecnológica también puede tener un retorno económico concreto.

Por su parte, Marisa Cirillo (CEMPRE) identificó el mismo patrón desde la economía circular: cuando se intenta escalar soluciones de circularidad, la escala alcanzada sigue siendo menor a la industrial. Señaló además que la innovación frugal emergente en las cooperativas de clasificadores —soluciones de alto valor surgidas de pocos recursos y alta necesidad— no logra captar el interés de la industria ni de la academia para incorporarla al ciclo formal de investigación y desarrollo, desaprovechando un potencial de innovación aplicada significativo. En ese marco, subrayó que el debate pendiente es el de los incentivos: cómo lograr que la industria migre desde el recurso no renovable hacia el material reciclado, aumentando el valor en la cadena a partir de instrumentos económicos y regulatorios que hagan viable esa transición.

Daniel Carranza (OPP/DATA Uruguay) señaló como desafío que el empresariado uruguayo es bastante conservador en materia de inversión: muchos actores privados demandan innovación pero luego recurren al Estado para financiarla. La reversión del trabajo remoto post-pandemia —sostenido exitosamente durante años y luego descartado sin justificación productiva— fue citada como evidencia de resistencias estructurales al cambio. Señaló que existe una infraestructura pública muy potente pero que el sector privado no se puso a la velocidad de esa innovación pública.

Respecto al manejo de información institucional vinculada a los ODS, Jimena Souteras (Ceibal) señaló que la función de sostenibilidad aparece frecuentemente descolgada del organigrama estratégico de las instituciones públicas y privadas. Matilde Cánepa (IM) identificó la lógica de trabajo por 'chacras'² como un obstáculo persistente incluso dentro de organismos que ya han avanzado en el proceso de articulación transversal. Alejandra Reyes (DNE/MIEM) señaló la necesidad de una gobernanza nacional de la información industrial, actualmente fragmentada entre distintos organismos. Marisa Cirillo (CEMPRE) describió la situación de los datos de flujos de materiales como 'muy desagregada', dado que existe información, pero vista desde ángulos distintos y sin taxonomía común.

Por otro lado, se realizaron algunas valoraciones relativas a las capacidades y conocimientos de los roles tomadores de decisión. Alejandro Martínez (Ceibal) planteó que las personas que toman decisiones —legisladores, jerarcas, directorios— no necesariamente tienen formación en innovación, sostenibilidad o gestión estratégica orientada a ODS, y que eso no puede depender del voluntarismo individual. Señaló el caso del propio directorio de Ceibal,

² Formas de organización en las que cada área, unidad o dependencia gestiona su información, sus prioridades y sus procesos de manera relativamente aislada

integrado por representantes del Ministerio de Economía y del MEC: "Si no se los forma, ¿por qué habrían de saber de esto?". A modo de complemento, Juan Opertti (CZFUY) alertó sobre la pérdida de capital institucional provocada por la rotación de cuadros técnicos entre gobiernos.

Finalmente –y de forma convergente–, Álvaro Pena (UTEC) profundizó ese argumento desde la perspectiva presupuestal: señaló que la mayoría de los organismos públicos no cuenta con planes estratégicos reales y que la gestión presupuestal sigue desvinculada de los grandes lineamientos país, lo que refleja una toma de decisiones que opera sin el marco estratégico necesario para acompañar transiciones de largo plazo.

3.3.4 Acciones y desafíos

A pesar de haber identificado una serie de desafíos estructurales, los participantes identificaron fortalezas y acciones concretas que se desarrollan tanto dentro como fuera de sus organizaciones. En esta sección serán sistematizados los aportes autorreferenciales de los participantes en relación a acciones y experiencias identificadas relativas al desarrollo de los objetivos de Desarrollo sostenible, haciendo especial foco en las metas relativas al ODS 9.

Las experiencias más consolidadas en materia de infraestructura provienen de organizaciones con despliegue territorial sostenido. Alejandro Martínez (Ceibal) reportó que la brecha tecnológica entre quintiles pasó de diferencias de hasta 60-70 puntos porcentuales a niveles superiores al 80% en todos los grupos, incluyendo escuelas rurales unipersonales a más de 200 kilómetros de la capital departamental.³ La gestión de esa infraestructura supone reparación gratuita de equipos y un sistema de logística y gestión de residuos electrónicos de volumen considerable. En la sesión vespertina, Álvaro Pena (UTEC) complementó ese panorama desde otra escala: describió una institución presente en 11 departamentos con mandato legal de contribución al desarrollo sostenible, con laboratorio de hidrógeno verde en Durazno en conjunto con la Udelar, investigación en agrofotovoltaica (APV) y seguimiento de la vida útil de parques eólicos como líneas activas con potencial de impacto en circularidad industrial. Matilde Cánepa (IM) aportó la dimensión subnacional: describió el Polo Tecnológico Industrial del Cerro como espacio de convergencia entre UTU, industrias y pequeñas empresas. A eso, sumó la experiencia del Laboratorio de Innovación Ciudadana en el ex Mercado Modelo como infraestructura de participación e innovación abierta a la ciudadanía.

³ En su revisión del borrador, Alejandro Martínez (Ceibal) precisó que el punto de partida de la brecha tecnológica corresponde al año 2007, y que la situación actual refleja diferencias de un dígito entre quintiles.

Varias organizaciones reportaron avances concretos en la integración de la sostenibilidad y la innovación en sus propias prácticas de gestión. Jimena Souteras (Ceibal) precisó que la innovación de Ceibal es educativa, no tecnológica en sí misma, citando la introducción de la educación por competencias hace doce años como innovación pedagógica que no suele nombrarse como tal. Describió el lanzamiento del EduIA Lab —primer laboratorio regional de IA educativa en América Latina, orientado a generar soluciones del sur para el sur— y el desarrollo del primer centro TUMO en Uruguay en alianza con Corporación América. En materia de género, describió intervenciones mediante rúbricas en olimpiadas para evitar que las niñas queden relegadas a roles secundarios. Sofía Ruiz (ANCAP) reportó la incorporación de indicadores ODS al cuadro de mando integral y al sistema de remuneración variable, así como un programa de capacitación en competencias verdes medido en horas/persona, reconociendo que la inversión en I+D sigue muy por debajo del estándar internacional —1-2 por mil versus mínimo de 1%—. Pena (UTEC) añadió que la UTEC emprendió por decisión propia un proceso de certificación en sostenibilidad, instaló puntos de carga eléctrica en todas sus sedes y adoptó una política de flota híbrida o eléctrica como señal de coherencia entre discurso y práctica institucional. Matilde Cánepa (IM) describió la Gerencia de Innovación —creada con el nuevo gobierno— que convocó a 150 funcionarios para desarrollar 13 proyectos concretos de mejora de servicios ciudadanos, formalizando la innovación como función institucional.

En el plano de instrumentos financieros e innovación productiva, Juan Opettti (CZFUY) articuló las contribuciones del sector de zonas francas en sus tres dimensiones: en industria, el sector explica el 33% de las exportaciones del país con un efecto multiplicador de siete veces sobre la economía local, con derrame hacia pymes en sectores como packaging e imprentas —mencionó el caso de una imprenta uruguaya convertida en principal proveedor de cajas a nivel mundial de una empresa global radicada en zona franca—; en innovación, las zonas francas se posicionan como uno de los principales impulsores de proyectos ante la ANII; en infraestructura, destacó construcciones bajo normas LEED, Living Labs y estándares internacionales de compliance. Pía Alonso (ONUDI) reportó como experiencia central el proyecto REIF: un fondo de 10 millones de dólares para un país ya graduado de la cooperación tradicional, con un instrumento financiero de casi 7 millones que cofinancia con la banca privada, movilizando 30 millones de inversión privada con menos de 6 millones concesionales y 17 proyectos aprobados. Sebastián Torrado (ANCAP) advirtió que la transición productiva requiere no solo disponibilizar nuevos energéticos sino acompañar la reconversión de la infraestructura instalada que los va a utilizar, dimensión frecuentemente ignorada en el diseño de políticas.

Sobre experiencias y acciones orientadas a la generación de datos e información, Marisa Cirillo (CEMPRE) describió el trabajo con 15 empresas multinacionales del sector alimentario en el marco de la ley de responsabilidad extendida del productor y la ley de envases. Como hito reciente, reportó la construcción de una taxonomía común con cooperativas de clasificadores incorporada a un sistema de trazabilidad —luego de años sin nomenclatura

compartida— como avance clave para la medición del sector. Describió además un programa de capacitación descentralizado que articula industria y cooperativas del interior —Rivera, Tacuarembó, Treinta y Tres— como mecanismo concreto de transferencia de conocimiento entre actores de la cadena. Mencionó que la exportación de materiales reciclados enfrenta barreras arancelarias y normativas en Brasil y Argentina, lo que limita la escala alcanzable regionalmente.

En lo que refiere a reconversión productiva, Alejandra Reyes (DNE/MIEM) aportó el límite técnico estableciendo que en procesos como la producción de cemento o la fabricación de cal para plantas de celulosa —mayor consumidor de fuel oil del país— no existe hoy tecnología alternativa a los combustibles fósiles, señalando ese sector como prácticamente ausente del debate público sobre transición. Evocó la lógica del boleto de transporte —captura múltiple de información a partir de un pago existente— como modelo replicable para construir sistemas de información integrados sobre flujos de materiales industriales.

Desde la perspectiva del gobierno abierto y la sociedad civil, Daniel Carranza (OPP/DATA Uruguay) identificó la participación ciudadana significativa como mecanismo de innovación sistemáticamente subestimado, señalando que la innovación social y legislativa —como el crecimiento de la participación femenina en el mercado de trabajo, que contribuyó a reducir el desempleo en tres puntos en quince años— produce transformaciones estructurales que no figuran en ningún indicador de innovación.

Algunas Propuestas desde Sociedad Civil

En el corto plazo, las propuestas se orientaron a fortalecer las capacidades institucionales y de gestión necesarias para impulsar la innovación y su articulación con los objetivos de desarrollo sostenible. En primer lugar, se destacó la necesidad de consolidar institucionalmente a AGESIC como actor clave en la transformación digital y la innovación pública, señalando que su debilitamiento afecta transversalmente múltiples dimensiones del desarrollo productivo y tecnológico. Asimismo, se subrayó la importancia de mapear y medir formas de innovación actualmente invisibilizadas, particularmente aquellas generadas por cooperativas, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas, que no son captadas por los instrumentos tradicionales de promoción. En esa línea, se propuso integrar los ODS en los procesos de planificación estratégica y en las instancias de toma de decisión tanto en el sector público como privado, evitando la creación de estructuras paralelas que refuercen su percepción como una carga adicional. También se identificó como prioritario implementar programas de capacitación en innovación, sostenibilidad y ODS dirigidos a tomadores de decisión, incluyendo jerarcas, directivos y legisladores. Finalmente, se planteó la necesidad de avanzar en la regulación de nuevas infraestructuras tecnológicas —como las mega constelaciones satelitales— incorporando exigencias de evaluación de impacto ambiental para proteger el patrimonio natural y científico.

En una perspectiva de mediano plazo, las propuestas apuntaron a consolidar un ecosistema de innovación más robusto, integrado y orientado al desarrollo sostenible. En este sentido, se propuso ampliar y diversificar instrumentos de financiamiento como el REIF, replicando esquemas de cofinanciamiento que permitan movilizar inversión privada en sectores tecnológicos estratégicos. Asimismo, se planteó la creación de un sistema nacional de inteligencia de datos sobre flujos de materiales reciclados, acompañado de incentivos regulatorios y económicos que faciliten la escalabilidad de la economía circular a nivel industrial. En el plano productivo, se destacó la posibilidad de implementar la figura de “empresa madrina”, promoviendo vínculos entre grandes corporaciones y pymes proveedoras para la incorporación de los ODS en las cadenas de valor, con incentivos fiscales asociados. También se subrayó la importancia de descentralizar el conocimiento, incorporando a instituciones del interior —como UTEC y universidades regionales— en áreas estratégicas de investigación, particularmente en tecnologías vinculadas a baterías de litio y economía circular. A su vez, se propuso revisar el destino del impuesto al carbono para alinearlos con su objetivo original de financiar procesos de reconversión productiva. Entre las iniciativas de mayor escala, se mencionó el impulso al desarrollo del Polo Atlántico de Hidrógeno Verde y de infraestructura portuaria de nueva generación como un programa país de largo plazo. Complementariamente, se planteó la adopción de sistemas digitales de trazabilidad de residuos, como el STRIN, para fortalecer la gestión basada en datos, así como la elaboración de un plan de desarrollo nacional de largo plazo —articulado regionalmente en el marco del MERCOSUR— que integre de forma coherente las dimensiones energética, productiva, educativa y territorial.

* Para este recuadro también se tomó en cuenta la participación en la plataforma ciudadana

Lista de Asistentes (ODS 9)

Participante	Organización	Sector	Mesa
Matilde Cánepa	Intendencia de Montevideo (IM)	Gobierno subnacional	Mesa 1
Juan Opertti	Cámara de Zonas Francas del Uruguay (CZFUY/AZFA)	Sector privado / Cámara	Mesa 1

[Volver al índice](#)

Participante	Organización	Sector	Mesa
Jennifer Velazco	MIEM – Relaciones Internacionales	Estado central	Mesa 1 y Mesa 2
Carolina Mena	MIEM – Unidad Ambiental	Estado central	Mesa 1
Manuela Romero	ONUDI (pasante)	Organismo internacional	Mesa 1
Pía Alonso	ONUDI – Oficina Regional	Organismo internacional	Mesa 1
Jimena Souteras	Ceibal – Planificación Estratégica	Paraestatal	Mesa 1
Alejandro Martínez	Ceibal – Sostenibilidad	Paraestatal	Mesa 1
Daniel Carranza	OPP / DATA Uruguay	Estado central / Soc. civil	Mesa 1
Álvaro Pena	UTEC – Consejo Directivo Central	Academia pública	Mesa 2
Marisa Cirillo	CEMPRE – Directora	Sociedad civil	Mesa 2
Emiliano Sánchez	CEMPRE – Comunicación	Sociedad civil	Mesa 2
Alejandra Reyes	Dirección Nacional de Energía / MIEM	Estado central	Mesa 2
Sebastián Torrado	ANCAP – Sostenibilidad Corporativa	Paraestatal	Mesa 2
Sofía Ruiz	ANCAP – Planificación Estratégica	Paraestatal	Mesa 2
Mauro Padula	MIEM – Dirección de Industria	Estado central	Mesa 2

Nota: Jennifer Velazco (MIEM) participó como punto focal en ambas mesas. Carolina Mena (MIEM), Manuela Romero (ONUDI), Emiliano Sánchez (CEMPRE), Mauro Padula (MIEM) y Jennifer Velazco (Mesa 2) registran intervenciones únicamente en la ronda de presentaciones y no realizaron aportes sustantivos durante el desarrollo de las mesas. Esto se señala como observación metodológica, sin implicar juicio sobre la participación institucional.

3.4 ODS 11

Ciudades y comunidades sostenibles

3.4.1 Introducción

El miércoles 4 de marzo de 2026, representantes de sociedad civil y Estado se reunieron en dos mesas presenciales de consulta pública convocadas en el marco de la elaboración del

sexto Informe Nacional Voluntario de Uruguay 2026 (INV), para intercambiar en torno al Objetivo de Desarrollo Sostenible 11: Ciudades y comunidades sostenibles. Las dos mesas reunieron en total a quince participantes, además de la moderación realizada por Rodrigo Seroubian como parte del equipo de trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.

En conjunto, las mesas convocaron un abanico institucional amplio, aunque con predominio de perfiles técnico-estatales y de organismos con responsabilidades directas en planificación, información y gestión pública. En la mesa de la mañana predominaron organismos públicos nacionales y departamentales vinculados al ordenamiento territorial, la producción de información, la gestión del riesgo, la vivienda, la resiliencia urbana y la gestión ambiental; en la de la tarde se incorporaron colectivos profesionales y representantes de instituciones de cooperación internacional, ampliando el intercambio hacia otras perspectivas. En ambas instancias, por ende, apareció como señal de contexto una limitación relevante: la participación fue más institucional que propiamente social, cuestión que algunas intervenciones identificaron como un déficit del propio proceso y, al mismo tiempo, como síntoma de la baja apropiación pública de la Agenda 2030.

Más allá de las diferencias de composición, ambas mesas mostraron un núcleo común de preocupaciones. En primer lugar, hubo una coincidencia fuerte en torno a la centralidad de los datos: no solo como insumo de reporte, sino como condición fundamental para diagnosticar, priorizar y decidir en materia de política pública. En segundo lugar, se insistió en que los ODS no deberían quedar reducidos a un ejercicio periódico de medición, sino convertirse en una guía efectiva para la gestión pública. En tercer lugar, apareció reiteradamente la necesidad de fortalecer la articulación interinstitucional y multinivel, tanto para producir información comparable como para coordinar capacidades, prioridades y recursos a la hora de intervenir en los diversos territorios. Finalmente, las dos mesas coincidieron en señalar que el ODS 11 no puede pensarse únicamente como infraestructura física: el hábitat fue entendido, de forma recurrente, desde la perspectiva del acceso efectivo a servicios, oportunidades, movilidad, participación y derechos.

Dentro de ese marco compartido, la mesa de la mañana tendió a leer el ODS 11 desde una clave más técnico-territorial. Allí se jerarquizaron la planificación urbana y territorial, la discusión conceptual respecto de las definiciones de ciudad, localidad o área urbana y sus implicancias sobre la política pública, la gestión del riesgo y las inundaciones, la construcción y disponibilidad de indicadores, la gestión de residuos, la construcción sostenible, la movilidad y el espacio público. Fue, en ese sentido, una conversación más concentrada en los problemas de definición, medición, coordinación y capacidad estatal para producir información útil y traducirla en decisiones. También fue visible un énfasis en la necesidad de que la Agenda 2030 permee más en las rutinas institucionales y en la ciudadanía, ya que aun entre actores altamente involucrados predominó la percepción de que su apropiación sigue siendo parcial.

La mesa de la tarde, en cambio, desplazó parcialmente el foco desde la ciudad en sentido estricto hacia una idea más amplia de comunidades sostenibles. Allí cobraron centralidad la vivienda adecuada, la llegada del Estado a localidades pequeñas y de baja densidad, los agrupamientos irregulares rurales, la articulación interinstitucional en territorios poco visibles y la distancia entre las categorías de medición del ODS y ciertas vulnerabilidades realmente existentes. Desde MEVIR, SAU e IICA se reforzó además una lectura que puso en primer plano la relación entre vivienda, servicios, movilidad, espacios verdes, infraestructura verde, circuitos cortos de alimentos y calidad de vida. En conjunto, el intercambio mostró que el ODS 11 fue interpretado menos como una agenda exclusivamente urbana y más como un campo de problemas territoriales interdependientes, donde la frontera entre ciudad, pequeña localidad y ruralidad resulta muchas veces insuficiente o incluso contraproducente para captar la realidad de las diferentes comunidades.

En cuanto a los temas abordados, ambas mesas coincidieron en jerarquizar la vivienda, los servicios, la movilidad, la articulación institucional, la participación y la producción de información. En cambio, otros componentes del ODS 11 tuvieron un desarrollo comparativamente menor: el patrimonio cultural y natural, junto con las acciones requeridas para su salvaguarda, ocuparon un lugar marginal en la discusión. Asimismo, la calidad del aire y la seguridad en el acceso a espacios públicos fueron mencionadas, aunque sin ocupar un lugar central, mientras que la discusión sobre asentamientos urbanos en sentido estricto quedó relativamente desplazada por la atención puesta en las pequeñas localidades, la ruralidad ampliada y las formas de irregularidad territorial menos visibles. El resultado fue una lectura del ODS 11 muy anclada en la experiencia uruguaya reciente y la agenda de la administración, resaltando las preocupaciones por cómo llegar mejor, coordinar mejor y medir mejor, aunque sin abordar una revisión exhaustiva de todas las metas del objetivo ni del estado de situación del país respecto de ellas.

3.4.2 Conocimiento e información

El intercambio de ambas mesas sugiere que el conocimiento sobre los ODS y, en particular, sobre el ODS 11, es desigual y se distribuye de manera escalonada según el tipo de actor. En los núcleos más directamente involucrados en el reporte, la planificación y la producción de indicadores existe un manejo relativamente sólido del lenguaje de la Agenda 2030, de sus metas y de sus instrumentos de seguimiento. Tanto en la mesa de la mañana como en la de la tarde, Rosario Casanova, representante de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (DINOT) del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), punto focal del Estado para el reporte de este Objetivo, aportó al debate el contexto del proceso de reporte del ODS 11, la elaboración de un “borrador cero” sobre el estado de situación desde la perspectiva del Estado, el trabajo interinstitucional previo y la lógica de construcción de indicadores, lo que muestra que, por sus responsabilidades en el proceso, el punto focal estatal cuenta con un conocimiento técnico-operativo consolidado.

Sin embargo, ese conocimiento no necesariamente se traduce en una apropiación homogénea dentro de las organizaciones. El caso más avanzado de internalización institucional fue el de la Intendencia de Montevideo. Paola Arjona señaló que desde 2019 la Intendencia viene trabajando en la localización de la Agenda 2030, que cuenta con una comisión ODS integrada por sus departamentos y que la agenda “ya forma parte de nuestro ADN”. Aun así, incluso en esa experiencia aparecieron límites: Fabiana Castillo sostuvo que, aunque la Intendencia aporta “muchísimo” a varias metas, no siempre existe el hábito institucional de identificar explícitamente a qué ODS contribuye cada política. Es decir, hay incorporación real de contenidos, pero no siempre una traducción consciente y sistemática al lenguaje de la Agenda 2030.

En otras organizaciones, la apropiación de la agenda aparece aún más limitada. Desde MEVIR, tanto en la mañana como en la tarde, surgió con fuerza la idea de que la institución contribuye en los hechos a varias metas del ODS 11, especialmente en vivienda, hábitat y acceso a servicios, pero que ese vínculo no está plenamente explicitado en términos de ODS ni organizado como una lógica de reporte permanente. Victoria Morena lo formuló de manera muy clara al señalar que en MEVIR “no está muy presente una mirada en referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en esos términos, como tal”, aunque buena parte de su trabajo cotidiano sí incide sobre esos resultados. En la misma dirección, se insistió en que uno de los desafíos respecto de la implementación de la Agenda 2030 es justamente “visibilizar el vínculo” entre lo que ya hacen las instituciones y las metas de cada objetivo, porque muchas veces “no lo tenemos conectado”.

A la vez, las mesas mostraron que varios participantes disponen de un conocimiento suficiente para discutir críticamente el instrumento, incluso cuando no lo usan como marco cotidiano de autoidentificación institucional. Alberto Leira (SAU) cuestionó el alcance de ciertos indicadores —por ejemplo, la exclusión de la población en situación de calle en el 11.1.1— y Braulio Cantera (IICA) se preguntó de qué manera determinadas líneas de trabajo del IICA podrían alimentar indicadores del objetivo, aspecto retomado en el transcurso del intercambio. Esto sugiere que existe una masa crítica de actores con capacidad de lectura técnica y sustantiva del ODS 11, aunque esa capacidad no siempre se traduce en una institucionalización plena del enfoque.

La percepción más crítica apareció cuando el asunto del nivel de conocimiento se desplazó desde las instituciones hacia la sociedad en su conjunto. En la mesa de la mañana, Paola Arjona relató que, en un ejercicio de diálogo con academia y sociedad civil realizado por la Intendencia, surgió con fuerza la constatación de que estos espacios de intercambio son todavía escasos y que, a cuatro años de 2030, la ciudadanía sigue sin conocer la agenda en un sentido sustantivo. El problema, según planteó, no tiene que ver con desconocer la nomenclatura o la simbología de los ODS, sino que es de corte sustantivo: no se identifica que se trata de una agenda de derechos con efectos concretos sobre la vida cotidiana. En ese punto, el diagnóstico de ambas mesas converge: el conocimiento sobre los ODS está hoy relativamente concentrado en ciertos ámbitos técnico-estatales y profesionales que son,

asimismo, los que mayor grado de vinculación tienen con la institucionalidad asociada a la Agenda, mientras que su apropiación social y su incorporación transversal en las organizaciones siguen siendo débiles.

Experiencias desde Sociedad Civil

Desde la perspectiva de la sociedad civil, la discusión sobre el ODS 11 puso el foco en una concepción amplia de las ciudades y comunidades sostenibles, que no se limita a la infraestructura física ni al crecimiento urbano en sentido estricto. Las intervenciones resaltaron que el hábitat debe pensarse en términos de acceso efectivo a derechos, servicios, movilidad, espacios públicos, participación y calidad de vida.

Otro eje destacado por la sociedad civil fue la necesidad de fortalecer la participación sustantiva. En la discusión apareció con claridad que muchas veces la participación opera más como una exigencia formal que como un proceso real de incidencia en la definición de prioridades y en la toma de decisiones. Esta mirada también se vinculó con una preocupación más general por la baja apropiación social de la Agenda 2030, todavía poco instalada en la ciudadanía como una agenda concreta de derechos y de transformación de la vida cotidiana.

En cuanto a las experiencias destacables de la sociedad civil, la principal referencia surgida en las mesas desde estas organizaciones fue la de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay (SAU). A través de su comisión asesora de urbanismo y de la organización de conversatorios sobre movilidad y otros temas urbanos, la SAU aparece como un espacio relevante de reflexión profesional, producción de insumos y articulación pública en torno a los desafíos de ciudad y territorio. Se trata de una experiencia valiosa por su capacidad de incidir en la forma en que se piensa la agenda urbana, de instalar temas estratégicos y de contribuir a tender puentes entre conocimiento técnico, debate público y formulación de alternativas.

Asimismo, desde la SAU surgieron aportes críticos relevantes para revisar el modo en que se monitorea el ODS 11. En particular, se cuestionó el alcance de algunos indicadores que dejan fuera problemáticas significativas, como ocurre con ciertas formas de exclusión habitacional. Ese señalamiento resulta importante porque muestra un tipo de contribución propia de la sociedad civil, anclada en la capacidad de interpelar los marcos de medición y advertir sobre los riesgos de que determinadas realidades queden invisibilizadas.

3.4.3 Valoraciones

La valoración general que surge de ambas mesas es matizada: no predomina una lectura de estancamiento absoluto ni de fracaso del país frente al ODS 11, pero tampoco una visión complaciente sobre los avances alcanzados. En términos generales, los participantes reconocieron la pertinencia del objetivo como marco para ordenar discusiones sobre vivienda, hábitat, movilidad, participación, sostenibilidad y acceso a derechos, a la vez que también valoraron la propia instancia de intercambio como un espacio útil para poner en diálogo actores que suelen trabajar de manera fragmentada y sin conocimiento de las acciones conexas que se desarrollan en otros ámbitos. En ese sentido, Alberto Leira (SAU) destacó la importancia de que instituciones diversas “se vean las caras”, mientras que en la mesa de la mañana también se subrayó que existen capacidades, experiencias e iniciativas valiosas sobre las que sería posible construir una agenda más robusta.

Ahora bien, esa valoración relativamente positiva del marco convive con un diagnóstico bastante extendido de insuficiencia. En ambas mesas apareció la idea de que Uruguay llega a esta etapa con avances parciales, capacidades dispersas y dificultades para traducir esos esfuerzos en una estrategia país más consistente y sostenida. En la mesa de la mañana, Paola Arjona (IM) planteó con claridad que la discontinuidad en los reportes le quitó “ímpetu y fuerza” a la agenda y contribuyó a que muchas veces sea percibida más como una agenda de Naciones Unidas que como una agenda efectivamente apropiada por el país, las ciudades y la ciudadanía. La crítica, por tanto, no apuntó tanto a la inexistencia de acciones como a la pérdida de visibilidad, centralidad política y capacidad de orientar decisiones de manera continua, aspecto cuya relevancia se refuerza en el presente contexto de crisis del multilateralismo y su legitimidad pública.

Uno de los diagnósticos más reiterados fue que los principales obstáculos no pasan solamente por la falta de políticas, sino por la fragmentación institucional, la débil articulación entre niveles de gobierno y la distancia entre los instrumentos disponibles y las realidades concretas de la población. En la mesa de la mañana esto apareció sobre todo asociado a la producción, continuidad y desagregación de datos e indicadores, así como a la necesidad de que los ODS dejen de ser solo un ejercicio de reporte para convertirse en herramientas efectivas de toma de decisiones. En la mesa de la tarde, esa misma preocupación adoptó una forma más territorial: varias intervenciones insistieron en que muchas políticas siguen pensándose desde una lógica demasiado urbana, centralizada o estandarizada, que no logra captar adecuadamente las condiciones de vida en pequeñas localidades, zonas rurales o territorios de baja densidad.

En esa línea, una de las valoraciones más consistentes fue que el país todavía tiende a mirar el ODS 11 desde categorías que dejan poco visibles ciertos problemas territoriales. Desde MEVIR, tanto en la mañana como en la tarde, se remarcó que buena parte de las necesidades relevantes no se reducen a la vivienda en sentido estricto, sino que involucran acceso a transporte, agua, energía, servicios, planificación y presencia estatal efectiva. El problema no sería entonces solo cuánto se hace, sino también desde qué categorías se mide, se planifica y se prioriza, junto con la necesidad de poner en el centro el acceso efectivo de la ciudadanía a servicios y derechos. Esta observación amplió la lectura del ODS 11 desde la ciudad hacia una noción más amplia de comunidades sostenibles y mostró que algunos déficits del país no son únicamente de cobertura, sino también de enfoque.

Otro punto de coincidencia fue la mirada crítica sobre la participación. En ambas mesas se valoró positivamente que existan espacios, instancias y herramientas para involucrar a distintos actores, pero también se advirtió que muchas veces la participación funciona más como requisito formal que como proceso sustantivo de incidencia en la definición de prioridades y toma de decisiones. En la mesa de la tarde, Alberto Leira (SAU) y Braulio Cantera (IICA) señalaron que con frecuencia los proyectos se diseñan y financian sin una consulta suficientemente robusta, lo que genera cierta distancia o desconexión con las necesidades de la población, así como un sesgo excesivo hacia soluciones tradicionales (por

ejemplo, en materia de infraestructura) que inhiben el desarrollo de propuestas más innovadoras. En la mañana, a su vez, la propia experiencia relatada desde Montevideo reforzó la idea de que sigue habiendo una débil apropiación ciudadana de la Agenda 2030 y escasa conexión entre sus metas y los problemas cotidianos de la población.

Finalmente, ambas mesas identificaron desafíos más estructurales que condicionan el avance del ODS 11 en Uruguay. Entre ellos sobresalen la dificultad para sostener aprendizajes institucionales, la debilidad en investigación y desarrollo, especialmente aquella aplicada al hábitat y al territorio, la falta de continuidad para construir sobre diagnósticos o herramientas ya existentes y la persistencia de restricciones de capacidad, prioridad y recursos en áreas clave. Andrés Passadore (MEVIR) formuló esto con especial claridad al señalar que muchas veces se aprende “en el hacer”, pero con poca sistematización y escasa capacidad de transformar esa experiencia en innovación y aprendizaje institucional. En conjunto, la valoración que emerge del intercambio es la de un país que cuenta con avances y acumulados relevantes, pero que todavía enfrenta obstáculos importantes para mejorar la coordinación y articulación de las políticas, así como el abordaje de las desigualdades territoriales al momento de diseñar e implementar políticas públicas, haciendo más difícil materializar ciudades y comunidades realmente sostenibles. Del mismo modo, se destacó que es necesario mejorar la producción de información, dado que es fundamental contar con datos e indicadores relevantes que puedan incorporarse al quehacer cotidiano y contribuir de mejor manera a la toma de decisiones por parte de las instituciones.

3.4.4 Acciones y desafíos

En ambas mesas quedó claro que las organizaciones presentes no parten de cero: varias ya desarrollan acciones que contribuyen de hecho al ODS 11, aunque muchas veces no las nombren ni las ordenen explícitamente bajo ese marco. Más que un panorama homogéneo, lo que surgió del intercambio fue una constelación de experiencias diversas: algunas más consolidadas en planificación, reporte e indicadores; otras más asociadas a la intervención territorial concreta; y otras, finalmente, más vinculadas a la producción de conocimiento, la incidencia profesional o la articulación de agendas sectoriales con el hábitat y la vida urbana. Un rasgo común, sin embargo, atravesó casi todas las intervenciones: la distancia entre la densidad de las prácticas existentes y su sistematización, medición o traducción institucional al lenguaje de la Agenda 2030.

Desde la DINOT/MVOT, Rosario Casanova y Virginia Pedemonte presentaron como principal experiencia el proceso reciente de construcción del reporte nacional del ODS 11. Allí se destacó el trabajo interinstitucional para identificar organismos responsables por indicador, elaborar referencias para su cálculo y construir un estado de situación nacional, cuyo alcance excede el presente reporte. A eso se suma el desarrollo de una línea de trabajo orientada a usar la infraestructura de información geográfica y geoespacial no solo para reportar, sino también como herramienta de gestión territorial, con la aspiración de trasladar progresivamente esta lógica al nivel departamental. En ese sentido, la experiencia relatada

no fue solo la de contribuir a la producción de este informe, sino la de intentar dejar capacidades instaladas para que los indicadores dialoguen mejor con la toma de decisiones.

La Intendencia de Montevideo fue, probablemente, la organización que presentó el repertorio más amplio y sistemático de experiencias. Paola Arjona señaló que la Intendencia trabaja desde 2019 en la localización de la Agenda 2030, que ya va por su sexto informe local voluntario y que cuenta con una comisión ODS integrada por los 12 departamentos de su estructura. También remarcó que la Intendencia identificó aportes al 59 % de la agenda y que, en el caso específico del ODS 11, reconoce competencias e incumbencias en nueve metas. Entre las experiencias destacadas aparecieron la articulación entre planificación estratégica y desarrollo sostenible, el programa Hábitat de Montevideo —seleccionado internacionalmente como experiencia de aceleración de los ODS—, el trabajo en movilidad activa y sostenible, la coordinación con municipios y la construcción de información propia a través de observatorios y de Montevidata. En conjunto, se trata de una experiencia institucional donde el ODS 11 aparece más explícitamente internalizado que en el resto de las organizaciones presentes.

Fabiana Castillo complementó esa presentación desde la Unidad Ejecutiva de Resiliencia de la Intendencia. Describió tres líneas de acción principales: el Plan Integral de Gestión de Riesgo 2020–2024 y su revisión en curso; el trabajo en eficiencia energética y sostenibilidad a escala predial y urbana, mediante instrumentos como el modelo de Sustentabilidad Ambiental en la Vivienda (SUAMVI) y el proyecto conexo de Sustentabilidad Ambiental en edificios de sector servicios (SUAMSE); y el seguimiento transversal de los ODS junto con otros departamentos de la Intendencia. A ello sumó ejemplos concretos de intervención sobre la ciudad, como mejoras en espacios públicos, obras de movilidad, urbanismo táctico, ensanches de calles y jardines de lluvia incorporados a la planificación urbana en clave de adaptación climática. Su intervención fue importante porque mostró una experiencia robusta, pero también una autocrítica: la Intendencia aporta mucho al ODS 11, aunque no siempre registra ni comunica esas contribuciones de forma explícita.

MEVIR fue, entre ambas mesas, la institución que aportó el conjunto más rico de experiencias territoriales y, al mismo tiempo, la reflexión más insistente sobre los límites de las categorías tradicionales con que se piensa el ODS 11, lo que resulta comprensible considerando su especificidad institucional en el marco del sistema nacional de vivienda. En la mesa de la mañana, Cristina Sienra subrayó que MEVIR no solo construye vivienda, sino también hábitat: desarrolla entornos con agua, saneamiento, espacios públicos, salones comunales, trabajo con las familias, plantación de árboles, huertas, mantenimiento y criterios de localización pensados para asegurar acceso a servicios en comunidades dispersas y geográficamente aisladas. En la tarde, Victoria Morena profundizó esa idea al explicar el trabajo institucional en torno a la noción de “vivienda adecuada”, el cambio en la localización de las intervenciones —buscando evitar núcleos aislados y acercar las soluciones a núcleos urbanos con servicios— y la evidencia cotidiana de que vivienda, alumbrado, calles, saneamiento, agua y transporte no pueden separarse ni pensarse de

forma compartimentada. También se mencionaron articulaciones específicas, como el trabajo con el Ministerio de Industria en eficiencia energética para soluciones habitacionales.

A su vez, desde MEVIR surgieron experiencias particularmente relevantes para ampliar la lectura del ODS 11 desde la ciudad hacia las comunidades sostenibles en sentido más amplio. Vidimara Nalotto presentó el programa Pueblos en Red, pensado para que MEVIR funcione como ancla territorial y convoque a otras instituciones en localidades pequeñas, donde las necesidades suelen exceder largamente la vivienda. Andrés Passadore destacó, por su parte, el nuevo programa de Agrupamientos Rurales, orientado a visibilizar y atender población dispersa e históricamente invisibilizada. En continuidad con ello, también apareció el trabajo en asentamientos o enclaves rurales irregulares, desarrollado junto con INE y otros organismos, como intento de construir una línea de intervención más estable sobre realidades que no encajan bien en la distinción clásica entre urbano y rural. Todo esto mostró a MEVIR como una institución con fuerte conocimiento situado y capacidad de presencia territorial, aunque también con dificultades para medir impactos y para lograr una articulación suficientemente fluida con otros organismos.

En la mesa de la mañana, el INE, DINAGUA y el Ministerio de Ambiente aportaron un tipo de experiencia distinto, menos visible en el territorio, pero decisivo para el cumplimiento del objetivo. Ana Inés López señaló el trabajo del INE en infraestructura geoestadística y en el ajuste conceptual de categorías como localidad, área rural y unidades geoestadísticas, con el fin de representar mejor la realidad territorial. Gonzalo Pastorino presentó la experiencia acumulada por DINAGUA en mapas de riesgo e indicadores complementarios sobre población afectada o ubicada en áreas inundables por localidad. Virginia Chiesa, desde la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea), mencionó la relevancia del trabajo de dicha Dirección para el cálculo del indicador 11.6.1 sobre residuos tratados en condiciones adecuadas, así como el impulso de un proyecto de construcción sostenible con financiamiento no reembolsable, orientado a articular residuos, materiales, agua, circularidad, resiliencia y mitigación en una plataforma nacional. En estos casos, las acciones relatadas muestran que parte del ODS 11 está también fuertemente asociado a la capacidad de medir, clasificar, producir información comparable y diseñar instrumentos de política integrales.

La mesa de la tarde añadió, además, experiencias provenientes de organizaciones no estatales y de cooperación que ampliaron el repertorio del debate. Alberto Leira señaló el trabajo de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay a través de su comisión asesora de urbanismo y de conversatorios recientes sobre transporte y otros temas urbanos, como espacio de reflexión profesional e incidencia sobre la forma de pensar la ciudad. Braulio Cantera, desde el IICA, describió líneas de trabajo en sistemas agroalimentarios, circuitos cortos de acceso a alimentos, fortalecimiento de cordones hortifrutícolas urbanos, infraestructura verde, corredores verdes, movilidad peatonal y reducción de huellas de carbono y otros contaminantes. Si bien estas experiencias no se presentaron como políticas públicas de ejecución directa sobre el territorio, sí aparecieron como aportes concretos para

ampliar la agenda del ODS 11 hacia dimensiones como alimentación, salud, naturaleza urbana y calidad cotidiana de vida, mostrando también el espacio que pueden ocupar las organizaciones de la sociedad civil y cooperación internacional en la consolidación y avance de la Agenda.

En conjunto, este bloque deja una conclusión bastante clara: las experiencias existen, son variadas y en varios casos son sustantivas, pero están desigualmente institucionalizadas, medidas y sistematizadas. El principal contraste no es entre organizaciones que hacen y organizaciones que no hacen, sino entre distintos modos de traducir esas prácticas, ancladas en su especificidad institucional, en información, coordinación, aprendizaje e identificación explícita con la Agenda 2030. Por ese motivo, parece razonable sostener que uno de los problemas centrales del ODS 11 en Uruguay es la fragmentación de experiencias valiosas que todavía no terminan de integrarse ni dialogar entre sí para una mejor acumulación e integralidad de las acciones.

Algunas Propuestas desde Sociedad Civil

Considerando los aportes provenientes de la sociedad civil y de la plataforma ciudadana, las propuestas sobre el ODS 11 convergen en una idea central: la sostenibilidad de ciudades y comunidades no puede reducirse al reporte de indicadores ni a respuestas sectoriales aisladas, sino que requiere intervenciones concretas y articuladas sobre el hábitat, la gestión ambiental, la participación y la escala territorial desde la cual se definen las prioridades.

Entre las medidas urgentes, sobresale en primer lugar la necesidad de reducir la vivienda precaria y ampliar el acceso a la vivienda adecuada, planteada explícitamente por la Sociedad de Arquitectos del Uruguay. Desde el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) se agregó que la respuesta habitacional debería incorporar materiales sostenibles, apropiables por la población local y articulados con una noción más amplia de vida digna, de modo que la mejora del hábitat no se limite a una solución constructiva mínima. En la plataforma ciudadana, las propuestas más inmediatas se vinculan con la gestión de residuos y la dimensión ambiental local: la Red Ambiental de Colonia reclamó la implementación urgente del Plan Vale en el departamento, junto con la creación de redes de recolección domiciliar de reciclables coordinadas entre municipios y organizaciones locales, más espacio público para acopio y acciones de información y capacitación. En la misma línea, propuso intervenir sobre fiestas y festividades para reducir residuos de un solo uso y avanzar hacia prácticas de turismo más sostenible. También aparece como urgente la propuesta de adopción de criterios de iluminación responsable en territorios sensibles como Rocha, incorporando luminarias con apantallamiento total y luz cálida para proteger la biodiversidad y la salud humana frente a la contaminación lumínica.

En el plano de las medidas de mediano plazo, el énfasis se desplaza hacia la necesidad de territorializar más la Agenda 2030 y fortalecer la capacidad de las comunidades para incidir de forma sostenida en las decisiones. Una de las propuestas más claras en esa dirección plantea aprovechar el marco de la Ley 19.272 para hacer de los municipios un verdadero motor de localización de los ODS, mediante presupuestos participativos reales, concejos vecinales permanentes, mapeo de actores diversos y asambleas por micro-zonas que permitan captar mejor las diferencias al interior de cada territorio. En paralelo, desde el IICA se propuso ampliar la planificación urbana hacia una lógica de proximidad, incorporando circuitos cortos de alimentos, mercados locales, infraestructura y corredores verdes, y movilidad peatonal, en una concepción de ciudad más cercana, saludable y ambientalmente integrada. Desde la plataforma, además, se suman propuestas de cambio cultural e institucional más gradual, como la promoción de una Ley del Consumo Responsable, acompañada por campañas nacionales de sensibilización e incorporación de formación y prácticas de consumo responsable en todo el sistema educativo.

** Para este recuadro también se tomó en cuenta la participación en la plataforma ciudadana*

Lista de Asistentes (ODS 11)

Participante	Organización / Institución
Rodrigo Seroubian	FCS (Moderador)
Rosario Casanova	DINOT (Punto focal)
Ana Inés López	INE
Cristina Sienra	MEVIR
Fabiana Castillo	IM
Paola Arjona	IM
Gonzalo Pastorino	DINAGUA
Virginia Pedemonte	DINOT
Virginia Chiesa	MA
Mauricio López	MA
Vidimara Nalotto	MEVIR
Braulio Cantera	IICA
Alberto Leira	SAU / OPP
Andrés Passadore	MEVIR
Soledad Ávila	PNUD
Victoria Morena	MEVIR

3.5 ODS 17

Alianzas para lograr los objetivos

3.5.1 Introducción

La elaboración del presente documento reúne y pone en diálogo los intercambios desarrollados en dos mesas participativas sobre el ODS 17, llevadas adelante el día 4 de marzo de 2026, en el marco del proceso de elaboración del Informe Nacional Voluntario 2026 sobre la implementación de la Agenda 2030 en Uruguay. La moderación estuvo a cargo de Florencia Sciaraffia (FCS-Udelar), quien contextualizó el objetivo como un componente transversal de la Agenda, centrado en los medios de implementación, la cooperación, el financiamiento, la generación de capacidades, la producción de datos y alianzas en múltiples escalas, desde el plano internacional hasta la coordinación nacional, territorial y multiactoral.

En la primera mesa participaron nueve personas, además de la moderación, con intervenciones provenientes del Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), el Parlamento, la Oficina del Coordinador Residente de Naciones Unidas, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE), la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (MEVIR) y el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (CCEAU). La segunda mesa reunió diez participantes, además de la moderación, con intervenciones provenientes del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE), la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), MEVIR, la Universidad Tecnológica (UTEC) y la Universidad ORT.

Aunque ambas mesas abordaron un conjunto amplio de temas en común, las diferencias aparecieron sobre todo en los énfasis, los ejemplos priorizados y las experiencias desde las cuales se pensó el ODS 17. De forma transversal, la conversación mostró que este objetivo fue comprendido, no como un objetivo sectorial, sino como una condición de posibilidad para el resto de la Agenda 2030. En ambas instancias apareció asociado a la capacidad de movilizar recursos, coordinar actores y sostener formas de cooperación que permitan traducir compromisos generales en respuestas concretas. Desde esta perspectiva, las alianzas fueron pensadas como construcciones que requieren capacidades institucionales, dispositivos de coordinación, sistemas de información, recursos, llegada territorial y acuerdos concretos entre actores que no siempre trabajan con los mismos lenguajes ni desde las mismas escalas.

El análisis que sigue muestra, en primer lugar, formas desiguales de conocimiento y apropiación del ODS 17; en segundo término, una valoración generalmente favorable del posicionamiento de Uruguay, aunque atravesada por desafíos persistentes de coordinación, territorialidad, financiamiento y coherencia de políticas; luego, un conjunto de experiencias ya en marcha que expresan de forma concreta distintas modalidades de alianza; y, finalmente, una serie de propuestas orientadas a volver esas articulaciones más estables, visibles y eficaces. En ese recorrido, el documento busca no solo identificar problemas y capacidades, sino también reconstruir cómo distintos actores interpretan hoy las condiciones de posibilidad del ODS 17 en el contexto uruguayo.

En términos temáticos, ambas mesas se concentraron sobre todo en la cooperación, el financiamiento para el desarrollo en un sentido amplio, la creación de capacidades, la coordinación entre actores y la construcción de alianzas multiactorales. La primera profundizó más en la relación entre cooperación, instrumentos, información y prioridades nacionales, mientras que la segunda puso mayor énfasis en la articulación territorial, la coordinación interinstitucional, la transferencia de conocimiento y la innovación aplicada. Algunas dimensiones del ODS 17 tuvieron un desarrollo más acotado: por ejemplo, la

discusión técnica sobre seguimiento estadístico e indicadores fue menos profunda que las reflexiones sobre acceso, uso y sistematización de la información. También tuvieron escaso desarrollo la movilización de recursos internos en sentido fiscal más estricto y los aspectos más técnicos del comercio internacional, como el acceso a mercados y la inserción exportadora, mientras que otros componentes del objetivo, menos directamente vinculados al contexto uruguayo, apenas aparecieron de forma marginal.

3.5.2 Conocimiento e información

El intercambio entre los actores convocados mostró que el conocimiento sobre la Agenda 2030 y el ODS 17 no es homogéneo. Más que un desconocimiento absoluto del objetivo, lo que apareció fue una distribución desigual de sus formas de apropiación: por un lado, niveles relativamente altos de familiaridad con el lenguaje de las metas, los indicadores y los instrumentos entre participantes vinculados a la cooperación internacional, la gestión pública, el seguimiento institucional y empresarial; por otro, una circulación más acotada y una apropiación pública más débil entre organizaciones y ciudadanía en general. En ese marco, las dos mesas mostraron formas distintas de apropiación: en la primera predominó una reflexión más crítica sobre la baja visibilidad pública de la Agenda y sobre las dificultades para que sus metas e indicadores trasciendan los ámbitos institucionales especializados, mientras que en la segunda se expresó una apropiación más aplicada y operativa del ODS 17, anclada en experiencias concretas de cooperación, articulación interinstitucional, innovación y trabajo territorial.

Viviana Rumbo (PIT-CNT) señaló que no existe un conocimiento claro sobre qué son los ODS, cuál es su alcance ni qué ocurre cuando no se cumplen, y sostuvo que ese desconocimiento se extiende a la sociedad en general. En una línea convergente, Flavia Fernández (CCEAU) planteó que se trata de una herramienta útil para ordenar compromisos e información, en particular para las empresas, aunque todavía poco presente en el común de la sociedad. A su vez, remarcó que muchas veces la discusión se concentra en los indicadores antes que en la definición compartida de qué se quiere medir.

Otras intervenciones reforzaron esta lectura. Martina Lejtregger (Oficina del Coordinador Residente de Naciones Unidas) señaló que la dificultad no radica sólo en conocer los indicadores, sino en utilizarlos efectivamente para favorecer la coherencia de políticas públicas, mientras que Diego Pérez Gomar (MRREE) planteó que, aun cuando existe información disponible, no siempre resulta claro dónde buscarla ni cómo usarla. Desde AUCI, Lara Robledo aportó una mirada complementaria al indicar que el presupuesto nacional ya incorpora una asociación transversal con los ODS, lo que muestra que existen herramientas

instaladas dentro del aparato estatal, aunque ese conocimiento no siempre resulte visible hacia afuera ni se traduzca en una apropiación más amplia.

En la segunda mesa, en cambio, el conocimiento sobre el ODS 17 se expresó menos en una discusión técnico-formal sobre indicadores y más en la identificación de algunas de sus dimensiones estratégicas y en su traducción a prácticas institucionales concretas. En este sentido, Paloma Morazo (PNUD) definió al ODS 17 como uno de los “hilos conductores” de la Agenda 2030 y puso el foco en metas vinculadas al financiamiento para el desarrollo, la cooperación Sur-Sur y triangular, la tecnología, la innovación, la transferencia de conocimiento y la generación de capacidades. En una línea convergente, Ana Laura Barrios (UTEC) vinculó esos ejes con el trabajo de la universidad en alianzas entre universidad, empresa y Estado, así como con la resolución de desafíos territoriales y el fortalecimiento de redes universitarias. Por su parte, Inés Tiscornia (ORT) retomó especialmente la dimensión de transferencia de conocimiento, asociándose a alianzas entre universidad, organizaciones y empresas para responder a problemas concretos mediante nuevas tecnologías. En esa misma clave, los aportes de Martín Batalla y Yanina Aniotz (MEVIR) mostraron una comprensión del ODS 17 anclada en la práctica territorial de los convenios, la articulación multiactoral y la coordinación de políticas públicas para abordar de manera conjunta problemáticas complejas del interior del país. En conjunto, estas intervenciones muestran una apropiación del ODS 17 asentada más en su traducción operativa que en el manejo exhaustivo de su nomenclatura formal.

En conjunto, el intercambio mostró que el conocimiento sobre el ODS 17 existe, pero de forma desigual. Está más consolidado en ámbitos especializados vinculados a la cooperación, la gestión pública, la academia y algunas organizaciones, mientras que su circulación pública y su apropiación más amplia siguen siendo débiles.

Experiencias desde Sociedad Civil

La discusión del ODS 17 desde la perspectiva de la sociedad civil estuvo atravesada por una preocupación central: cómo construir alianzas con más capacidad de articulación, reconocimiento social y continuidad en el tiempo. En las intervenciones aparecieron temas como la apropiación pública de la Agenda 2030, la calidad de las alianzas, la circulación de la información, la generación de capacidades y las condiciones de participación en los procesos de decisión. En ambas mesas, el ODS se comprendió como un objetivo transversal, asociado a la cooperación, el financiamiento y la articulación entre actores diversos en múltiples escalas. A la vez, surgió que uno de los principales desafíos no radica en la ausencia de instrumentos o iniciativas, sino en la dificultad para volver esas articulaciones más visibles, sostenidas, coherentes y eficaces.

En ese marco, el Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) colocó en la discusión una preocupación central: la escasa apropiación social de los ODS y la distancia entre los lenguajes técnicos de la Agenda y la ciudadanía. En esa línea, se señaló que no existe un conocimiento claro y extendido sobre los ODS, su alcance y las implicancias de su incumplimiento. Esto refuerza la necesidad de construir alianzas con mayor visibilidad pública y mejores condiciones de participación, e incorporó una mirada sobre el reconocimiento social de las alianzas y su discusión pública.

Entre las experiencias destacables de la sociedad civil, adquirió particular relevancia el aporte del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (CCEAU). En las mesas se destacó su trabajo de acompañamiento a empresas en innovación y sostenibilidad y, desde la doble inserción profesional-académica de su referente, su vínculo con procesos de formación en reportes y observatorios de los ODS en la Facultad de Ciencias Económicas. También suman experiencias interinstitucionales en cadenas productivas, especialmente en el sector lácteo. Este aporte resulta valioso porque traduce información, estándares e instrumentos en capacidades de articulación, e introduce una reflexión crítica sobre el modo de construcción y uso de los indicadores.

En un registro distinto, también se destacó la experiencia del programa REIF, presentada en las mesas como una articulación entre cooperación internacional, financiamiento privado y objetivos de energías renovables. Su valor radica en que muestra la posibilidad de construir instrumentos capaces de vincular financiamiento, innovación y prioridades de desarrollo.

También resultó relevante la referencia al tratamiento parlamentario del Acuerdo de Asociación Mercosur-Unión Europea, donde se recibieron delegaciones del mundo del trabajo y de sectores productivos. Este antecedente resulta importante para pensar el ODS 17 porque muestra apertura institucional a la participación de la sociedad civil en una decisión con fuertes implicancias económicas y sociales. A la vez, deja planteado un desafío persistente: avanzar hacia mecanismos más claros, estables y eficaces para canalizar la participación social en este tipo de procesos.

3.5.3 Valoraciones

En ambas mesas predominó una valoración favorable de Uruguay en relación con el ODS 17. En los intercambios se reconoció que el país cuenta con activos importantes para avanzar en esta agenda: una institucionalidad relativamente sólida, capacidades acumuladas de cooperación, cierta tradición de diálogo y una imagen internacional de seriedad y confiabilidad. También se destacó que Uruguay sigue siendo un país atractivo para la cooperación y el intercambio de aprendizajes, tanto por su capacidad de pilotear iniciativas como por el interés que despiertan algunas de sus experiencias. En esta línea, Paloma Morazo (PNUD) señaló que el país podría reforzar su papel como “laboratorio” de políticas públicas y como espacio de cooperación Sur-Sur y triangular, mientras que Diego Pérez

Gomar (MRREE) remarcó que desde el exterior persiste la idea de que con Uruguay “se trabaja bien” y que los proyectos suelen alcanzar resultados. Esa valoración positiva fue reforzada también por intervenciones que subrayaron el reconocimiento del país en campos como la matriz energética y ciertos desarrollos universitarios e institucionales.

Sin embargo, esa evaluación favorable estuvo permanentemente tensionada por obstáculos concretos. Uno de los desafíos más reiterados fue la dificultad de coordinación entre actores e instituciones. En distintos registros, las intervenciones coincidieron en destacar la relevancia de las alianzas, pero también en advertir que su puesta en práctica encuentra obstáculos cuando involucra organismos con tiempos, prioridades, lenguajes y reglas de funcionamiento diferentes. A ello se sumó una observación especialmente clara formulada por Diego Pérez Gomar y Martín Alvez en torno a una idiosincrasia uruguaya de ‘cuidar la chacrita’: una lógica social y organizacional bastante extendida, presente tanto en instituciones como en otros ámbitos de la vida económica y colectiva, que lleva a priorizar el propio espacio, los recursos y los intereses inmediatos por encima de construcciones más compartidas. Esa tendencia, señalaron otras intervenciones, no solo dificulta la coordinación, sino que muchas veces deriva en superposición de esfuerzos, con actores distintos trabajando sobre problemas similares sin suficiente articulación ni complementariedad. En esa línea, Flavia Fernández (CCEAU) y Elizabeth Begosian (MRREE) advirtieron que con frecuencia se hacen cosas parecidas desde distintos lados, mientras que Paloma Morazo (PNUD) agregó que los presupuestos y los sistemas de rendición de cuentas suelen reforzar esa lógica, al empujar a cada organismo a priorizar sus propios recursos y resultados.

Otro núcleo central de desafíos fue el territorial. En ambas mesas apareció la preocupación por la distancia entre instrumentos disponibles y llegada efectiva al territorio, especialmente al interior profundo. Desde MEVIR se insistió en que la vivienda por sí sola no resuelve problemas estructurales si no se articula con otras políticas, y que persisten fuertes barreras de accesibilidad a derechos, prestaciones y servicios básicos en localidades pequeñas o alejadas. Martín Batalla (MEVIR) y Yanina Aniotz (MEVIR) desarrollaron esta idea con ejemplos concretos de dificultades de acceso a formación, transporte, documentación y prestaciones sociales, mientras que Cecilia Baillo (MEVIR), reforzó la necesidad de profundizar la llegada territorial de las alianzas y de equilibrar capacidades operativas entre instituciones para sostener la interinstitucionalidad en el interior. En este punto, las alianzas fueron valoradas por su potencial para dejar respuestas instaladas allí donde el Estado no llega, o lo hace de forma débil o fragmentaria.

Un tercer conjunto de desafíos se vinculó con el financiamiento y con la posición internacional del país. Aquí apareció una tensión particularmente relevante: Uruguay es visto como un socio serio, confiable y capaz de generar aprendizajes, pero su nivel de renta

restringe cada vez más el acceso a ciertos fondos tradicionales. Paloma Morazo (PNUD) subrayó que, aun cuando el país “no es elegible” para muchos apoyos en términos tradicionales, sigue atrayendo interés internacional y logra movilizar acotados. El problema entonces, no es la ausencia total de oportunidades, sino la dificultad de sostener y ampliar esas posibilidades en un contexto de restricciones crecientes.

Por último, ambas mesas insistieron en la necesidad de fortalecer la coherencia entre inserción internacional, transformación productiva y sostenibilidad. Viviana Rumbo (PIT-CNT) advirtió que la relación entre políticas públicas y objetivos país puede volverse incoherente cuando ciertos acuerdos o decisiones de inserción externa generan efectos negativos sobre sectores concretos si no existen estrategias de acompañamiento. El ejemplo más claro fue el acuerdo Mercosur–Unión Europea, mencionado como posible oportunidad de apertura y actualización, pero también como fuente de tensiones para actividades como la cadena láctea si no se prevén mecanismos de protección, reconversión o apoyo.

Martina Lejtregger (Oficina del Coordinador Residente de Naciones Unidas) reforzó esta preocupación al señalar que las alianzas para el desarrollo no pueden pensarse al margen del contexto geopolítico actual, marcado por el debilitamiento del multilateralismo y por cambios en las reglas del comercio global. En paralelo, Flavia Fernández (CCEAU) e Inés Tiscornia (ORT) agregaron otros dos retos complementarios: la dificultad de traducir instrumentos, estándares e información a las necesidades concretas de empresas y sectores, y el desfase entre innovación y regulación, que muchas veces impide implementar o escalar soluciones ya desarrolladas.

En conjunto, el intercambio dejó una imagen bastante nítida: Uruguay cuenta con fortalezas reales para avanzar en el ODS 17, pero el principal desafío sigue siendo convertir ese capital institucional, territorial y relacional en alianzas sostenidas, coherentes y operativas. Más que la ausencia de actores o de instrumentos, lo que apareció como nudo persistente fue la dificultad de articularlos de manera estable, con prioridades, recursos y responsabilidades compartidas.

3.5.4 Acciones y desafíos

Se identificaron un conjunto de acciones y experiencias que muestran que las alianzas vinculadas al ODS 17 no parten de cero en Uruguay. Más allá de los desafíos señalados, el intercambio recogió prácticas ya existentes de articulación interinstitucional, cooperación, transferencia de conocimiento, movilización de recursos y trabajo territorial, que permiten

ver cómo distintos actores vienen ensayando formas concretas de coordinación para abordar problemas de desarrollo sostenible.

Uno de los núcleos más robustos fue el de la articulación territorial. Desde MEVIR, Cecilia Baillo (MEVIR), Martín Batalla (MEVIR) y Yanina Aniotz (MEVIR) presentaron experiencias orientadas a aprovechar la presencia sostenida de la institución en localidades pequeñas para acercar otras políticas públicas junto con la intervención habitacional. En ese marco, la estrategia *Pueblos en Red* apareció como experiencia concebida para coordinar acciones de salud, educación, cultura, formación, protección social y justicia, de modo que la llegada al territorio sea conjunta y deje capacidades y servicios instalados. En esa misma línea, se mencionaron convenios de MEVIR con distintos organismos públicos para acompañar sus intervenciones con mejoras en infraestructura y servicios, así como antecedentes de trabajo con la Unión Europea e intercambios puntuales con Brasil. En conjunto, estas experiencias mostraron a MEVIR no sólo como ejecutor de políticas habitacionales, sino también como plataforma de articulación para ampliar la presencia del Estado y de otras alianzas en territorios descentralizados.

Un segundo conjunto de experiencias se vinculó con la movilización de recursos y la articulación entre cooperación e instrumentos financieros. En este punto, el ejemplo más reiterado fue el programa REIF⁴, referido por Martina Lejtregger (Oficina del Coordinador Residente de Naciones Unidas), Elizabeth Begosian (MRREE) y Flavia Fernández (CCEAU), presentado como una experiencia exitosa de articulación entre cooperación internacional, banca privada y objetivos de energías renovables. Su relevancia no radica solo en los recursos movilizados, sino en mostrar que es posible construir instrumentos que conecten financiamiento, innovación y prioridades de desarrollo. En esta misma línea, Ana Robledo (AUCI) destacó el vínculo entre presupuesto nacional, áreas programáticas y objetivos asociados a ODS como una herramienta concreta de transversalización estatal.

Otro núcleo importante estuvo dado por las experiencias universitarias y de transferencia de conocimiento. Desde UTEC, Ana Laura Barrios (UTEC) presentó una institución pensada para descentralizar el acceso a la educación y responder a demandas de cada localidad, mediante carreras, proyectos y alianzas construidas en diálogo con actores del territorio. La universidad fue descrita como nexo entre sector público, privado y comunidad, con experiencias en áreas como agua, saneamiento, logística, inteligencia artificial, energías renovables, producción lechera y compras públicas. En ese marco, se destacó el trabajo con la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE), centros comerciales y otras organizaciones para capacitar a pequeños proveedores del interior, facilitar su inserción en procedimientos formales de compra e incorporar criterios de sostenibilidad en esas cadenas. También se mencionaron los convenios internacionales de UTEC y la cooperación con el IHE

⁴ Para mayor información sobre el REIF, véase su [sitio web](#) donde están disponibles información, informes de resultados y antecedentes relevantes.

Delft Institute for Water Education, que dio lugar a un posgrado en agua y desarrollo sostenible. Desde ORT, Inés Tiscornia destacó experiencias de trabajo con empresas y organizaciones para resolver problemas concretos mediante nuevas tecnologías. En la misma línea, Martina Lejtregger (Oficina del Coordinador Residente de Naciones Unidas) mencionó el centro de Tecnologías Verdes financiado por ANII y la Universidad de la República como una señal positiva de articulación entre ciencia, innovación y sostenibilidad.

Finalmente, también se mencionaron experiencias vinculadas a la producción de información, la adopción de estándares y la generación de capacidades. En este plano, Flavia Fernández describió el trabajo del Colegio de Contadores en acompañamiento a empresas en lo que tiene que ver con innovación y sostenibilidad, y de la Facultad de Ciencias Económicas en formación en reportes y observatorios de los ODS. Desde su trayectoria laboral particular, señaló también acciones de acompañamiento a empresas, así como experiencias interinstitucionales en cadenas productivas —particularmente en el sector lácteo— donde se ensayan hojas de ruta, reportes sectoriales y proyectos piloto de innovación.

En otro registro, Verónica Fazio destacó la recepción en el Parlamento de delegaciones sociales y sectoriales durante el tratamiento del acuerdo Mercosur–Unión Europea, como ejemplo de apertura institucional a la participación de actores diversos en un asunto con implicancias productivas y sociales relevantes.

En conjunto, las experiencias relevadas muestran que en Uruguay ya existen prácticas de articulación entre actores, sectores y territorios. Su principal límite no parece ser la inexistencia de acciones, sino su baja visibilidad como parte de una agenda común, su escasa sistematización y las dificultades para conectarlas, sostenerlas y escalarlas.

Algunas Propuestas desde Sociedad Civil

Considerando los aportes surgidos en las mesas y en la plataforma ciudadana, las propuestas vinculadas al ODS 17 convergen en una idea central: fortalecer las condiciones que hacen posibles alianzas más visibles, estables y eficaces entre actores diversos. Desde esta perspectiva, el énfasis estuvo puesto en mejorar la participación, la circulación de la información y la capacidad de sostener articulaciones con mayor continuidad y claridad.

Entre las medidas urgentes, sobresale la necesidad de ampliar la difusión pública de los ODS y fortalecer su apropiación por parte de actores no especializados, de modo que la Agenda 2030 no quede restringida a circuitos técnicos o institucionales. En la misma línea, se planteó mejorar las condiciones de participación en los procesos de articulación y decisión, dotándolos de mayor transparencia y de mecanismos más claros para canalizar la intervención de la sociedad civil. También se mencionó como prioridad inmediata revisar trabas normativas y administrativas que hoy dificultan traducir innovaciones, acuerdos o instrumentos ya existentes en resultados efectivos. En esa misma dirección, la experiencia de MEVIR, particularmente a través de Pueblos en Red, reforzó la necesidad de profundizar la territorialización de las alianzas, atender la llegada desigual de recursos y servicios y sostener articulaciones más estables entre instituciones para evitar respuestas fragmentadas en el territorio. Desde la plataforma ciudadana, estas orientaciones se complementan con propuestas de fortalecer la transparencia y la participación ciudadana real en proyectos de interés público, y con la iniciativa de DarkSky Uruguay de incorporar la gestión de la luz artificial nocturna a una agenda de cooperación multiactor, mediante una mesa interinstitucional, capacidades de monitoreo e indicadores específicos sobre contaminación lumínica.

En el plano de las medidas de mediano plazo, el énfasis se desplaza hacia la consolidación de ámbitos más estables de articulación entre actores sociales, productivos y técnicos. En esa dirección, se planteó fortalecer mesas sectoriales y hojas de ruta por cadenas o sectores, así como consolidar la Red de Universidades por la Sostenibilidad del Uruguay (UNIS) como espacio estable de articulación. Desde la plataforma, esta orientación encuentra continuidad en la propuesta de cooperación entre universidad y organizaciones empresariales para desarrollar proyectos sostenibles, que combina formación, transferencia de conocimiento y vinculación con el sector productivo. Como agenda emergente, también se propuso abordar la contaminación lumínica de origen espacial mediante cooperación internacional, monitoreo y participación en foros multilaterales.

* Para este recuadro también se tomó en cuenta la participación en la plataforma ciudadana

Lista de Asistentes (ODS 17)

Mañana

Participante	Organización / Institución
Moderación: Florencia Sciaraffia	(FCS- Udelar) (Moderadora)
Elizabeth Bogosian	(MRREE) (Punto Focal)
Lara Robledo	(AUCI) (Punto Focal)
Mateo Samuelle	(MRREE)
Diego Perez Gomar	(DGCI- MRREE)
Viviana Rumbo	(PIT- CNT)
Verónica Fazio	(Parlamento)
Martina Lejtregger	(Naciones Unidas)
Flavia Fernandez	(CCEAU- FCEA)

Cecilia Baillo	(MEVIR)
----------------	---------

Tarde

Participante	Organización / Institución
Moderación: Florencia Sciaraffia	(FCS- Udelar) (Moderadora)
Elizabeth Bogosian	(MRREE) (Punto Focal)
Lara Robledo	(AUCI) (Punto Focal)
Mateo Samuelle	(MRREE)
Diego Perez Gomar	(DGCI- MRREE)
Martin Alvez	(MRREE)
Inés Tiscornia	(ORT)
Martín Batalla	(MEVIR)
Yanina Aniotz	(MEVIR)
Paloma Morazo	(PNUD)
Ana Laura Barrios	(UTEC)

4. Mesas de intercambio transversales

En esta sección se incluyen las relatorías de las mesas de intercambio virtual transversales, incorporando las dimensiones de análisis de conocimiento e información; valoraciones; acciones y desafíos. Las propuestas fueron sistematizadas en conjunto en la quinta sección de este documento, aunque las específicas de cada mesa se incluyen en el Anexo 1. Al final de cada apartado se incluye la lista de participantes.

4.1 Mesa transversal virtual I (4 marzo mañana)

4.1.1 Introducción

En la mañana del 4 de marzo de 2026, representantes de sociedad civil y estado se reunieron en una mesa virtual de consulta pública convocada en el marco de la elaboración del sexto Informe Nacional Voluntario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Uruguay 2026 (INV). La instancia, moderada por Gustavo Méndez Barbato de la Unidad de Métodos y Acceso a Datos (UMAD) de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad de la

República (UDELAR) y con el apoyo técnico de Enrico Benedetti del Instituto Nacional de Estadística (INE) e integrante del equipo interinstitucional encargado de elaborar el INV 2026, buscó recoger las percepciones, experiencias y propuestas de actores no gubernamentales sobre el avance del país en la Agenda 2030.

El diálogo se estructuró en torno a los cinco Objetivos de Desarrollo Sostenible priorizados para este ciclo —ODS 6 (agua limpia y saneamiento), ODS 7 (energía asequible y no contaminante), ODS 9 (industria, innovación e infraestructura), ODS 11 (ciudades y comunidades sostenibles) y ODS 17 (alianzas)— con una invitación constante del moderador a ampliar la mirada hacia los diecisiete objetivos y a incorporar los ejes transversales de no dejar a nadie atrás, perspectiva de género y cambio climático.

La conversación tuvo como hilo conductor la tensión entre los logros alcanzados y los desafíos pendientes para que la agenda permee efectivamente en la ciudadanía y en la toma de decisiones. Emergieron como temas centrales la necesidad de visibilizar los avances fortaleciendo la comunicación, la importancia de articular políticas entre niveles de gobierno y sectores, y la urgencia de traducir los objetivos en acciones concretas con impacto territorial.

4.1.2 Conocimiento e información

Las exposiciones iniciales revelaron un alto grado de conocimiento e integración de los ODS en las instituciones participantes. La mayoría ha incorporado los objetivos en sus marcos de planificación, ya sea a nivel estratégico, presupuestal u operativo.

Los integrantes de gobiernos departamentales, mostraron los diferentes avances que existen en sus respectivas organizaciones. Daiana Ferraro, directora de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Intendencia de Montevideo, describió un proceso de institucionalización avanzada, con una comisión transversal a nivel de Secretaría General y un observatorio de seguimiento que permite evaluar la evolución de los objetivos a nivel departamental. La Intendencia se encuentra actualmente trabajando en alinear su planificación estratégica y sus compromisos de gestión con los ODS. Mariana Fabre, de la Intendencia de San José, explicó que su institución ha optado por un enfoque presupuestal, vinculando desde 2021 la asignación de recursos a los ODS en sus rendiciones de cuentas anuales, con especial énfasis en los objetivos 9 y 11. Por su parte, Valeria Sanjurjo y Federico Plada, de la Dirección de Planeamiento de la Intendencia de Maldonado, ejemplificaron un proceso de integración paulatina que comenzó en 2018 con proyectos específicos y culminó en 2023 con la inclusión de los ODS en la planificación presupuestal, enfrentando ahora el desafío de avanzar del seguimiento financiero al monitoreo por indicadores de impacto.

En tanto, otra integrante de un organismo estatal, Rosario Martino, jefa de Medio Ambiente de ANCAP, explicó que la empresa ha vinculado los objetivos a su sistema de retribución variable, estableciendo un indicador corporativo de contribución a los ODS que guía proyectos en energía, agua y acción climática, con iniciativas concretas como la mejora de efluentes de la Refinería La Teja y el desarrollo de certificaciones de huella de carbono.

Martín Rodríguez, del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), un organismo de derecho público no estatal, señaló que el LATU ha incorporado los ODS en su propia misión institucional de impulsar el desarrollo sostenible del país, permeando desde las inducciones a nuevos colaboradores hasta los servicios de certificación y asesoramiento que ofrece a terceros. En tanto, Guzmán Banizi, del Instituto Nacional de Logística (INALOG), detalló los proyectos específicos vinculados a los ODS 9 y 17 que han desarrollado, incluyendo consultorías sobre el impacto del cambio climático en la logística y un plan para descarbonizar la cadena cárnica con fondos de la Unión Europea.

Desde la sociedad civil, se señalaron diferentes niveles de penetración de la agenda ODS en las organizaciones. Santiago Arturo, de la Unión de Exportadores, relató cómo desarrollaron junto al LATU un sello de gestión sostenible que hoy sella aproximadamente al veinte por ciento de las exportaciones, respondiendo a la exigencia de los clientes internacionales sobre el desempeño ambiental y social de las empresas. Tayna Larzábal, del Centro de Navegación, explicó que incorporaron una matriz interna de alineación a los ODS en su sistema de gestión de calidad e impulsan una comisión Puerto-Ciudad para mejorar el diálogo entre la actividad portuaria y el entorno urbano. En el ámbito de la sociedad civil, Sabrina Ademar, de OMIS, explicó que su organización utiliza los ODS como una hoja de ruta que orienta su trabajo técnico y de incidencia en salud y alimentación, construyendo alianzas con la academia y los gobiernos departamentales para avanzar en la creación de entornos saludables y la prevención de enfermedades no transmisibles.

4.1.3 Acciones y Desafíos

Las organizaciones dieron cuenta del despliegue de un amplio abanico de acciones concretas orientadas a los ODS, así como los desafíos internos que enfrentan para profundizar su contribución.

La Intendencia de Montevideo, en palabras de Daiana Ferraro, participa como aceleradora de ODS a nivel internacional en la iniciativa Cities Countdown 2030, que busca implementar políticas que aceleren la concreción de los objetivos. Su principal desafío interno es alinear la planificación estratégica y los compromisos de gestión —que impactan en los salarios de los trabajadores— para que reporten directamente a los ODS, un proceso complejo y sensible que recién inician. Mariana Fabre, de la Intendencia de San José, explicó que su institución enfrenta el desafío de generar un mayor aporte al resto de los ODS dentro de las competencias específicas que tiene asignadas, que actualmente concentran la mayor parte

de los recursos en los objetivos 9 y 11. Valeria Sanjurjo y Federico Plada, de la Intendencia de Maldonado, explicaron que su institución busca avanzar del seguimiento presupuestal —donde hoy se encuentra— a un sistema de monitoreo con indicadores claros que permita medir la evolución y el impacto de las intervenciones en el tiempo, un desafío que comparten con muchas otras instituciones del país.

Rosario Martino enumeró los múltiples proyectos estratégicos de ANCAP: la mejora de los efluentes sanitarios de la Refinería La Teja, el manejo de pluviales ante eventos extremos, el cálculo y certificación de la huella de carbono de sus procesos industriales, un piloto de hidrógeno vehicular para camiones, el proyecto de hidrógeno verde en Paysandú y el desarrollo de una biorrefinería. Su desafío interno es lograr el compromiso de todas las áreas y la priorización de estos proyectos, para lo cual se requiere un liderazgo fuerte desde la dirección.

Martín Rodríguez detalló las múltiples líneas de acción del LATU, que van desde ensayos ambientales en todo el país hasta la certificación de empresas en el Sello Gestión Sostenible (UEU-LATU) y el apoyo al Modelo de Calidad con Equidad de Género. Su desafío es seguir alineando sus estrategias con los ODS para demostrar contribuciones puntuales a cada objetivo, más allá de la enunciación general.

Guzmán Banizi detalló los proyectos innovadores de INALOG, como el estudio de los impactos del cambio climático en el sector logístico y el plan para descarbonizar la cadena cárnica. Su desafío es concientizar y alinear a todos los actores del sector —públicos y privados— en materia de sostenibilidad ambiental y social.

OMIS, representada por Sabrina Ademar, ha trabajado intensamente en la creación de entornos alimentarios saludables y accesibles para toda la población, con especial énfasis en la infancia, construyendo alianzas con la Universidad de la República y la Escuela de Nutrición. Su desafío es que las políticas públicas en salud aborden de forma estructural los determinantes comerciales y que la participación de la sociedad civil en estos espacios sea genuina y no meramente testimonial.

Santiago Arturo, de la Unión de Exportadores, destacó el trabajo con el programa *SheTrades* Uruguay en el empoderamiento de mujeres emprendedoras y ejecutivas, y el desarrollo del sello de gestión sostenible. Su organización enfrenta el desafío de adaptarse a la flexibilidad que requieren las empresas, que enfrentan múltiples demandas de certificación, y de articular beneficios financieros y fiscales que incentiven la sostenibilidad en toda la cadena de proveedores.

Tayna Larzábal, del Centro de Navegación, explicó que han creado una comisión Puerto-Ciudad junto a la Administración Nacional de Puertos para mejorar el diálogo entre la actividad portuaria y el entorno urbano. Su desafío es la descarbonización de los puertos, la

incorporación de nuevas tecnologías y la coordinación con las intendencias de Montevideo y Colonia.

Experiencias desde Sociedad Civil

Las instancias de intercambio permitieron identificar un conjunto diverso de experiencias impulsadas por organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y actores del territorio, que dan cuenta de formas concretas de contribución a los objetivos de desarrollo sostenible. Estas iniciativas, heterogéneas en escala y alcance, comparten un fuerte anclaje territorial, una orientación práctica y una capacidad de articulación que las posiciona como espacios relevantes de innovación social y ambiental.

En el plano de las políticas públicas y la incidencia, se destacaron experiencias orientadas a la promoción de entornos saludables, la vigilancia de conflictos de interés y la generación de evidencia para la toma de decisiones. Estas iniciativas combinan trabajo técnico, articulación con el sistema científico y construcción de alianzas, buscando incidir en agendas públicas complejas como la alimentación, la salud y la regulación de mercados.

En el ámbito productivo y empresarial, emergieron prácticas orientadas a la incorporación de criterios de sostenibilidad en cadenas de valor, incluyendo el desarrollo de certificaciones, programas de apoyo a emprendimientos liderados por mujeres y esquemas de acompañamiento para la mejora de estándares ambientales y sociales. Estas experiencias reflejan un esfuerzo por compatibilizar competitividad económica con compromisos de sostenibilidad, aunque enfrentan desafíos asociados a la multiplicidad de requisitos y a la necesidad de incentivos más claros.

Asimismo, se identificaron iniciativas relevantes de articulación entre infraestructura y territorio, orientadas a mejorar la convivencia entre actividades productivas y comunidades locales. Estas experiencias muestran la importancia de generar espacios de diálogo sostenido entre actores diversos, anticipando conflictos y promoviendo soluciones integradas que contemplen tanto el desarrollo económico como el bienestar social.

Un conjunto significativo de prácticas se vincula con la educación ambiental, la divulgación científica y la construcción de capacidades, incluyendo talleres, actividades en centros educativos, producción de materiales didácticos y generación de espacios de aprendizaje comunitario. Estas iniciativas buscan sensibilizar, fortalecer competencias y promover cambios culturales en torno al ambiente y la sostenibilidad.

En el plano territorial, se destacaron acciones orientadas a la protección de ecosistemas, el monitoreo ambiental y la restauración, tales como jornadas de limpieza, instalación de cartelera, protección de hábitats, seguimiento de procesos de erosión costera y participación en planes de manejo de áreas protegidas. Muchas de estas experiencias combinan conocimiento local, trabajo voluntario y articulación con actores públicos y académicos. También se identificaron prácticas vinculadas a la movilización social y la defensa de los territorios, que incluyen la participación en procesos de denuncia ambiental, la elaboración de informes sobre afectaciones y la intervención en debates públicos sobre proyectos de alto impacto. Estas acciones evidencian el rol de la sociedad civil como actor clave en la vigilancia ambiental y en la construcción de agendas críticas.

Por otra parte, las instituciones educativas y de investigación mostraron un conjunto de iniciativas orientadas a la descentralización del conocimiento y la formación en áreas estratégicas, con presencia en el interior del país, trabajo en redes internacionales y desarrollo de capacidades en temas como energías renovables, agua y sostenibilidad. Estas experiencias resaltan el potencial de la academia como actor articulador entre territorio, política pública y sociedad civil.

De manera transversal, las experiencias relevadas ponen de manifiesto tanto la riqueza del ecosistema de iniciativas como los desafíos que enfrentan para sostenerse y escalar. Entre estos se destacan la limitada respuesta estatal a demandas territoriales, la falta de sistemas efectivos de denuncia y seguimiento, las dificultades de articulación interinstitucional y la necesidad de que la participación de la sociedad civil tenga mayor incidencia real en la toma de decisiones.

4.1.4 Valoraciones

Las valoraciones sobre el desempeño de Uruguay en la Agenda 2030 fueron en general positivas, aunque atravesadas por la identificación de desafíos estructurales que operan como frenos para una implementación más profunda y equitativa. Un punto de consenso transversal fue la brecha entre los logros alcanzados y su escasa visibilidad y apropiación por parte de la ciudadanía.

Martín Rodríguez, del LATU, ilustró esta paradoja señalando que mientras Uruguay se ubica entre los veinte mejores países del mundo en energías renovables —con un cien por ciento de generación eléctrica a partir de fuentes limpias en 2024—, muy poca gente conoce esta información y lo que ella implica en términos de contribución al ODS 7. Esta falta de comunicación y difusión constituye, a juicio de la organización, un debe nacional que limita el potencial transformador de la agenda.

Desde las instituciones del Estado, señalaron que este déficit de conocimiento, también se traduce en una falta de interacción interinstitucional que permita dimensionar los aportes que desde distintos niveles y organismos se realizan a la Agenda 2030. Daiana Ferraro, de la Intendencia de Montevideo, sumó a este diagnóstico la necesidad de una vinculación mucho más estrecha entre los distintos niveles de gobierno para reportar y visibilizar los aportes. Señaló que a veces las instituciones tienen la percepción de no estar contribuyendo cuando en realidad no están visibilizando adecuadamente lo que hacen, y que es necesario un esfuerzo coordinado de bajada a territorio para que el vecino comprenda cómo sus acciones cotidianas —como cambiar las luces de su hogar por LED— aportan a los grandes objetivos.

Por su parte, Rosario Martino, de ANCAP, planteó la necesidad de voluntad política y priorización interna para que los proyectos asociados a los ODS, especialmente aquellos de infraestructura, obtengan las partidas presupuestales y la celeridad necesaria. En una empresa grande, explicó, las áreas de soporte no siempre dan la prioridad que estos proyectos requieren, por lo que se necesita un mensaje fuerte desde la dirección.

Guzmán Banizi, de INALOG, añadió la necesidad de alinear a los actores públicos y privados para abordar la descarbonización del transporte, un sector clave en las emisiones de gases de efecto invernadero.

En la misma línea, Tayna Larzábal, del Centro de Navegación, coincidió en que la comunicación es clave para entender los objetivos, que muchas veces se perciben como algo lejano e inalcanzable, y propuso trabajar para que quede claro que cada contribución, por pequeña que sea, suma.

En otro orden, Sabrina Ademar, de OMIS, introdujo una dimensión sanitaria y social en el debate, señalando que si bien el país ha avanzado en dimensiones ambientales, persiste un desafío crucial en la prevención de enfermedades no transmisibles. La organización vinculó

la alimentación no saludable, particularmente el consumo de ultraprocesados, con el cambio climático, señalando la evidencia sobre el impacto ambiental de estas industrias y la necesidad de abordar el tema de forma estructural.

Finalmente, Susana Pecoy (Asesora de UTE y ex Directora Nacional de Industrias), participante a título personal, aportó una reflexión sobre el contexto global, señalando que los grandes actores del planeta no están pensando en esta agenda, lo que obliga a quienes no están involucrados en los conflictos a un esfuerzo constante por mantener el objetivo y seguir trabajando para lograrlo

Lista de Asistentes (Mesa virtual I)

Participante	Organización / Institución
Gustavo Méndez Barbato	Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de la República (Moderador)
Enrico Benedetti	Instituto Nacional de Estadística (INE) / OPP
Daiana Ferraro	Intendencia de Montevideo
Sabrina Ademar	Organización Multidisciplinaria para la Integración Social (OMIS)
Martín Rodríguez	Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU)
Mariana Fabre	Intendencia de San José
Guzmán Banizi	Instituto Nacional de Logística (INALOG)
Santiago Arturo	Unión de Exportadores del Uruguay
Tayna Larzábal	Centro de Navegación
Rosario Martino	Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP)
Valeria Sanjurjo	Dirección de Planeamiento - Intendencia de Maldonado
Federico Plada	Dirección de Planeamiento - Intendencia de Maldonado
Susana Pecoy	Asesora UTE, ex Directora Nacional de Industrias (Participación a título personal)

4.2 Mesa transversal virtual II (4 marzo tarde)

4.2.1 Introducción

En la mañana del 4 de marzo de 2026, representantes de sociedad civil y estado se reunieron en una mesa virtual de consulta pública convocada en el marco de la elaboración del sexto Informe Nacional Voluntario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Uruguay 2026 (INV). La instancia, moderada por Gustavo Méndez Barbato de la Unidad de Métodos y Acceso a Datos (UMAD) de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad de la República (UDELAR) y con el apoyo técnico de Enrico Benedetti del Instituto Nacional de Estadística (INE) e integrante del equipo interinstitucional encargado de elaborar el INV 2026, buscó recoger las percepciones, experiencias y propuestas de actores no gubernamentales sobre el avance del país en la Agenda 2030.

Participaron representantes de trece organizaciones e instituciones, entre las que se encontraban la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC), la Organización Multidisciplinaria para la Integración Social (OMIS), la Asociación Uruguaya de Mujeres en Energía (AUME), la Red Temática de Medio Ambiente de la Universidad de la República (RETEMA-UDELAR), la Coordinadora Nacional de Economía Solidaria, la Mesa de Carne Sostenible, AIDIS Uruguay, UTE, la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana del Ministerio de Vivienda, el Banco República (BROU) y Obras Sanitarias del Estado (OSE). Esta variada convocatoria permitió abordar los ODS desde perspectivas muy diversas, enriqueciendo el diálogo con miradas sectoriales, territoriales y de género.

La discusión se estructuró en torno a los cinco ODS priorizados para este ciclo, con especial énfasis en los ODS 6, 7, 9, 11 y 17, aunque el moderador invitó permanentemente a ampliar la mirada hacia los diecisiete objetivos y a incorporar los ejes transversales de no dejar a nadie atrás, perspectiva de género y cambio climático. La conversación estuvo atravesada por la tensión entre los logros alcanzados y los desafíos estructurales pendientes, así como por la necesidad de articular esfuerzos y de garantizar que la participación de la sociedad civil sea genuina y vinculante.

Los temas que concentraron el debate fueron la importancia de la educación y la formación para el desarrollo sostenible, la necesidad de integrar la perspectiva de género en sectores estratégicos como la energía, los desafíos de la planificación territorial y la coordinación interinstitucional para garantizar el acceso a servicios básicos, y la urgencia de visibilizar y potenciar las múltiples experiencias territoriales que hoy operan de forma fragmentada.

4.2.2 Conocimiento e información

Las exposiciones iniciales revelaron un alto nivel de conocimiento y un variado grado de apropiación de los ODS en las instituciones participantes, que van desde universidades hasta gremiales empresariales y organismos públicos.

Desde la academia, se plantearon las diversas maneras en que la Agenda 2030 permea a las instituciones, más allá de que los vínculos sean más o menos directos. Rossana Santomauro, secretaria general de la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC), explicó que la institución viene trabajando en sostenibilidad desde hace varios años a través de un grupo motor impulsado por los propios colaboradores. UTEC ha obtenido una certificación de plata de la Asociación para la Sostenibilidad en Instituciones de Educación Superior y está implementando un plan de trabajo que busca compatibilizar los objetivos universitarios con los objetivos país. La universidad cuenta con un Departamento de Sostenibilidad Ambiental a cargo de Ernesto Pecoits, quien detalló que UTEC participa activamente en redes internacionales como los Hubs de Naciones Unidas para los ODS 6 y 7, ocupando incluso la vicepresidencia para docencia y educación en la red de agua limpia y saneamiento. Por su parte, Alejandra Martínez, Directora de Innovación y Emprendimiento, complementó la

presentación señalando que su área trabaja en el desarrollo de capacidades territoriales a través de oficinas de innovación abierta y programas académicos específicos en sostenibilidad, género, diversidad e inclusión.

En tanto, Solana González, coordinadora de la Red Temática de Medio Ambiente de la Universidad de la República, explicó que la RETEMA está representada por diecisiete servicios universitarios y trabaja en la promoción de los temas ambientales como eje transversal en la enseñanza, la investigación y la extensión. Delimitando los alcances de sus intervenciones, manifestó que sería deseable que participen del proceso otros actores de la UDELAR. La red realiza jornadas anuales sobre temas como el agua, el ecofeminismo y los límites socioambientales de las ciudades, y actualmente está abocada a la construcción de indicadores de sustentabilidad para campus universitarios. Asimismo, indicó que la RETEMA representa a la universidad en varias comisiones (Comité de Medio Ambiente de la UGM -todas las universidades integrantes del Grupo Montevideo-, la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y Ambiente, el Comité Especializado de UNIT de Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Comité Especializado de UNIT de Economía Circular, la Comisión de Vigilancia y Prevención de Aspectos Adversos sobre Salud Humana en Contaminantes y Químicos Ambientales, entre otras).

Betty Weisz, docente universitaria y participante en la Coordinadora Nacional de Economía Solidaria, vinculó su trabajo a los ODS 12 y 11. Desde la coordinadora, se ha propuesto la creación de un Día del Consumo Responsable como herramienta de sensibilización sobre el acto político del consumo. Desde el Centro Cultural Shangrilá, una organización territorial, en la que también participa, destacó el Proyecto Canelón, que trabaja en la reforestación con árboles nativos en Ciudad de la Costa, contribuyendo a la regeneración de la flora y la fauna local.

Desde la sociedad civil, Diego Rodríguez, presidente de OMIS, explicó que su organización trabaja en temas vinculados al derecho a la salud, la información y los determinantes comerciales de la salud, con especial énfasis en la alimentación saludable y la regulación de la publicidad dirigida a la infancia. La organización ha vinculado su trabajo a múltiples ODS, incluyendo el ODS 3 de salud y bienestar, el ODS 2 de hambre cero, el ODS 12 de producción y consumo responsable, el ODS 16 de gobernanza y el ODS 17 de alianzas, siempre con una mirada crítica hacia los conflictos de interés y la interferencia de las industrias en las políticas públicas.

Josefina Marmisolle, representante de la Asociación Uruguaya de Mujeres en Energía (AUME), aclaró que AUME es una organización muy joven, creada en noviembre de 2023, que promueve la participación, el liderazgo y la visibilidad de las mujeres en el sector energético. La organización trabaja en la igualdad de oportunidades, la reducción de brechas en un sector históricamente masculinizado y la promoción de una transición energética justa que integre la perspectiva de género. A pesar de su juventud, ya han desarrollado acciones

concretas como el sello "Las Mujeres Suman", que certifica eventos del sector energético con más de un treinta por ciento de mujeres expositoras.

En representación de la Mesa Uruguaya de Carne Sostenible y la Asociación Nacional de Alimentación a Corral, Victoria Carballo explicó que el sector agropecuario está trabajando intensamente en sostenibilidad, acompañando normativas cada vez más exigentes en materia de sanidad, cuidado de recursos naturales y biodiversidad. La producción participa en ámbitos de diálogo con el Ministerio de Ambiente en temas como agua y efluentes, y en el desarrollo de energías renovables para el sector.

Alejandro Iriburo, representante de AIDIS Uruguay, explicó que la asociación, capítulo uruguayo de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, tiene un vínculo fuerte con la OPS y los ODS, con especial énfasis en agua, saneamiento, transición energética y ciudades sustentables. La organización trabaja en la promoción de estos temas a través de divisiones técnicas, congresos y actividades de difusión.

Finalmente, en la mesa de la tarde hubo participación de varios organismos del Estado, los cuales detallaron algunas de las experiencias y actividades desarrolladas en relación con la Agenda 2030.. Gonzalo Claramunt, de la Gerencia de Medio Ambiente de UTE, explicó que la actividad principal de la empresa se vincula directamente con el ODS 7, aunque de forma indirecta también incide en otros objetivos. UTE cuenta con una unidad de responsabilidad social y una comisión de género interna que recientemente logró la aprobación de una política de diversidad, equidad e inclusión. En materia de cambio climático, destacó el esfuerzo de transformación de la matriz energética hacia fuentes renovables, con más del noventa por ciento de la generación a partir de energías limpias.

Por su parte, Victoria Fernández y Alejandra Silva, de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), presentaron el trabajo de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (DINISU) en relación con el ODS 11, específicamente en el punto 11.1 sobre viviendas en zonas vulnerables. La unidad trabaja en proyectos de regularización de asentamientos y relocalizaciones, con especial atención a la integración social y la participación de las familias. Su trabajo se enmarca en acuerdos estratégicos con intendencias y organizaciones de la sociedad civil.

En tanto, Lorena Sánchez, responsable de sostenibilidad del Banco República (BROU), detalló el proceso de incorporación de las finanzas sostenibles en la institución, con la creación de un Comité de Sostenibilidad y el lanzamiento de convocatorias para proyectos de inversión sostenible con beneficios en tasas y cobertura de financiamiento. El BROU está además iniciando un proceso de certificación en un sello de igualdad de género para instituciones financieras.

Finalmente, la Gerencia de Saneamiento de OSE, representada por la ingeniera Gabriela de Freitas y el ingeniero Eduardo Salero, presentó los desafíos del saneamiento colectivo en el

interior del país, vinculados al ODS 6. La gerencia trabaja en la universalización de los servicios, la sostenibilidad de las inversiones y la coordinación con los gobiernos departamentales para la planificación territorial.

4.2.3 Acciones y Desafíos

Las organizaciones identificaron una variedad de acciones concretas orientadas a los ODS, así como los desafíos internos que enfrentan para profundizar su contribución.

Las participantes de instituciones universitarias dieron cuenta de diversas acciones vinculadas a los ODS. UTEC, a través de sus tres representantes, mostró un trabajo coordinado en múltiples frentes. Rossana Santomauro destacó el compromiso de la universidad con la llegada a los territorios del interior, como parte del objetivo de no dejar a nadie atrás. La institución ha priorizado en su plan estratégico la presencia en departamentos donde aún no tenía cobertura, y está trabajando en la formalización de indicadores y en la implementación del Modelo de Calidad con Equidad de Género. Ernesto Pecoits aportó el trabajo en redes internacionales y en la formación de profesionales en energías renovables y agua. Alejandra Martínez profundizó en el desafío de lograr que las comunidades efectivamente accedan y aprovechen los recursos que la universidad pone a disposición en los territorios, a través de las Oficinas de Innovación Territorial. La RETEMA de UDELAR, según Solana González, enfrenta el desafío de avanzar en la ambientalización curricular en las carreras universitarias, un proceso que requiere articular con los distintos servicios (facultades) y prorektorados. Como oportunidad, destacó la alta demanda de la sociedad civil en temas ambientales, que muchas veces marca la agenda de investigación.

Los representantes de organizaciones de la sociedad civil también informaron de acciones desplegadas. OMIS, representada por Diego Rodríguez, trabaja en la promoción de políticas públicas basadas en evidencia y en la vigilancia de los conflictos de interés en la toma de decisiones. Su desafío es lograr que la participación de la sociedad civil en los espacios de diálogo sea genuina y que las políticas resultantes no sean capturadas por intereses comerciales.

AUME, en palabras de Josefina Marmisol, ha logrado en poco tiempo acciones de impacto como el sello "Las Mujeres Suman" y la publicación de dos libros infantiles con apoyo del BID y ONU Mujeres. Su desafío es consolidarse como una plataforma de implementación concreta para la equidad de género en el sector energético, conectando el talento femenino con oportunidades.

Desde el Estado, se señaló que UTE continúa trabajando en la mejora de la cobertura eléctrica y en la incorporación de energías renovables en su matriz. Internamente, el desafío es seguir permeando la relación entre las tareas cotidianas de los funcionarios y los ODS,

más allá del objetivo principal de la empresa. DINISU, representada por Victoria Fernández y Alejandra Silva, enfrenta desafíos en múltiples niveles: la participación de las familias, la seguridad en los territorios, la integración a la formalidad, la heterogeneidad de los equipos de trabajo y la necesidad de articular miradas compartidas entre instituciones. Como oportunidades, destacaron los espacios de intercambio interinstitucional y la posibilidad de mejorar diagnósticos con una mirada más profunda de los territorios. En tanto OSE, tiene como metas seguir creciendo en cobertura de saneamiento y tratamiento de aguas residuales, contar con personal propio para la operación de plantas a través de convenios de formación con UTEC, y avanzar en un plan nacional de conexiones intradomiciliarias que subsidie a la población más vulnerable. El desafío de la coordinación con los gobiernos departamentales aparece como una cuestión crítica que requiere solución urgente.

4.2.4 Valoraciones

Las valoraciones sobre el desempeño de Uruguay en la Agenda 2030 fueron variadas y atravesadas por la identificación de desafíos estructurales que operan como frenos para una implementación más profunda y equitativa.

Solana González, de la RETEMA realizó una valoración crítica sobre las contradicciones en las políticas públicas ambientales, señalando que el país transita una etapa donde coexisten políticas que apuntan a la sustentabilidad con otras que fomentan el impacto ambiental, generando confusión sobre hacia dónde se dirige el país. Mencionó como ejemplos las prospecciones sísmicas versus la relevancia de los océanos y áreas protegidas, o el control de cotorras versus la creación de un instituto de bienestar animal. Betty Weisz aportó una mirada sobre la fragmentación de las experiencias territoriales, señalando que existen muchísimas microexperiencias en escuelas, huertas comunitarias y organizaciones de vecinos que trabajan en la dirección de los ODS, pero que permanecen invisibilizadas y desconectadas entre sí, perdiendo la oportunidad de potenciarse mutuamente.

Por su parte, Diego Rodríguez, de OMIS, vinculó su valoración a la participación de la sociedad civil, señalando que si bien se celebran estos espacios, muchas veces la participación termina siendo un mero trámite sin incidencia real en las decisiones. Señaló que la industria con intereses comerciales ha sido más escuchada que la sociedad civil, y que es necesario que las políticas se basen en evidencia científica y no en intereses creados. Planteó además la necesidad de que el Estado ejerza su rol rector y de fiscalización, poniendo como ejemplo la falta de control en casos de contaminación ambiental.

En tanto, Josefina Marmisolle, de AUME, centró su valoración en las brechas de género, señalando que Uruguay continúa con brechas muy importantes en el sector energético, especialmente en el acceso a posiciones de liderazgo. Advirtió sobre el riesgo de que la transición energética profundice desigualdades si no incorpora la perspectiva de género y el enfoque de no dejar a nadie atrás.

Gonzalo Claramunt, de UTE, planteó que el país se encuentra en una situación donde mejorar requiere esfuerzos cada vez mayores, dado el buen punto de partida en acceso y calidad del servicio eléctrico. Señaló como desafío continuar mejorando la cobertura en zonas remotas a través de soluciones como paneles solares, y en la otra punta, garantizar el acceso a través de planes sociales para poblaciones en situación de vulnerabilidad. En materia de cambio climático, destacó que si bien la matriz energética es mayoritariamente renovable, el desafío es seguir reduciendo la generación térmica de respaldo y buscar alternativas de combustibles menos emisores.

Victoria Fernández y Alejandra Silva, de DINISU, identificaron desafíos vinculados a la participación de las familias en los procesos de integración social y urbana, a la seguridad en los territorios, a la temporalidad de los proyectos y a la necesidad de articular miradas más amplias e integradoras entre las distintas instituciones intervinientes.

Gabriela de Freitas y Eduardo Salero, de OSE, plantearon como desafíos centrales la sostenibilidad de los servicios de saneamiento, los altos costos de operación y mantenimiento, la baja adhesión de los usuarios comunes a las conexiones domiciliarias a pesar de las fuertes inversiones realizadas, y la dificultad de coordinación con los gobiernos departamentales para la planificación del crecimiento urbano. Señalaron que OSE suele llegar última a los procesos de urbanización, cuando ya se han tomado decisiones que condicionan la posibilidad de prestar servicios adecuados.

Lista de Asistentes (MEsa virtual II)

Participante	Organización / Institución
Gustavo Méndez Barbato	Facultad de Ciencias Sociales - UDELAR (Moderador)
Enrico Benedetti	Instituto Nacional de Estadística (INE) (Punto Focal)
Rossana Santomauro	Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC)
Ernesto Pecoits	Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC)
Alejandra Martínez	Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC)
Diego Rodríguez	Organización Multidisciplinaria para la Integración Social (OMIS)
Josefina Marmisolle	Asociación Uruguaya de Mujeres en Energía (AUME)
Solana González	Red Temática de Medio Ambiente (RETEMA) - UDELAR
Betty Weisz	Coordinadora Nacional de Economía Solidaria / Centro Cultural Shangrilá
Gonzalo Claramunt	UTE
Victoria Fernández	Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (DINISU) - MVOT
Alejandra Silva	Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (DINISU) - MVOT
Victoria Carballo	Mesa Uruguaya de Carne Sostenible / Asociación Nacional de Alimentación a Corral
Lorena Sánchez	Banco República (BROU)
Alejandro Iriburo	AIDIS Uruguay
Gabriela de Freitas	Gerencia de Saneamiento - OSE
Eduardo Salero	Gerencia de Saneamiento - OSE

4.3 Mesa transversal virtual III (17 marzo)

4.3.1 Introducción

El 17 de marzo de 2026 se llevó a cabo una mesa virtual de diálogo en el marco de la elaboración del sexto Informe Nacional Voluntario (INV) de Uruguay sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De la sociedad civil participaron 14 personas, la mayoría representando a organizaciones de la sociedad civil y tres lo hicieron a título personal, más allá de que indicaron adscripción institucional. La instancia fue moderada por Gustavo Méndez Barbato y Fernando Filgueira, ambos de la Unidad de Métodos y Acceso a Datos (UMAD) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Udelar), con el acompañamiento de Daniel Greif, Coordinador del Área de Planeamiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). También participaron de la instancia los asistentes de investigación de la UMAD-FCS, Rodrigo Seroubian, Florencia Sciaraffia, Sofía Lenzi, Nahuel Roél y Ana Paula García; y Laura González Quinteros por OPP.

Esta mesa constituyó una instancia adicional para captar las voces y posicionamientos de la sociedad civil, sumándose a las mesas de intercambio (presenciales y virtuales) realizadas el 4 de marzo y a la plataforma virtual de participación ciudadana de AGESIC. La convocatoria fue realizada por la UMAD-FCS en la semana previa a la reunión, tomando como referencia contactos de organizaciones sociales de la UMAD y la lista de invitados a las jornadas de OPP para las instancias del 4 de marzo.

El diálogo se estructuró en torno a los cinco ODS priorizados para este ciclo —ODS 6 (agua limpia y saneamiento), ODS 7 (energía asequible y no contaminante), ODS 9 (industria, innovación e infraestructura), ODS 11 (ciudades y comunidades sostenibles) y ODS 17 (alianzas)— con una invitación constante del moderador a ampliar la mirada hacia los diecisiete objetivos y a incorporar los ejes transversales de "no dejar a nadie atrás", perspectiva de género y cambio climático.

A diferencia de las mesas anteriores, que contaron con una participación más diversa de instituciones públicas y privadas, esta convocatoria reunió mayoritariamente a organizaciones de la sociedad civil con un fuerte anclaje territorial, especialmente del departamento de Maldonado. La conversación estuvo atravesada por una profunda crítica al funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana, la falta de incidencia real de la sociedad civil en la toma de decisiones y la percepción de que los espacios de consulta son utilizados por el Estado como un mero trámite.

No obstante, también existieron menciones a acciones alineadas con la Agenda 2030 de ODS por parte de diferentes organizaciones. Otro aspecto destacable, fue la gran cantidad de propuestas de corto y mediano plazo.

4.3.2 Conocimiento e información

Las exposiciones iniciales revelaron un panorama heterogéneo en cuanto al conocimiento y apropiación de los ODS en las organizaciones participantes. Mientras algunas organizaciones los utilizan explícitamente como marco de referencia, otras trabajan alineadas a los objetivos pero sin hacerlos parte de su lenguaje cotidiano.

Desde la Asociación Uruguaya de Mujeres en Energía (AUME), Noelia Maciera explicó que su organización, aunque relativamente nueva, utiliza los ODS —particularmente el ODS 7— como un eje de acción y como herramienta para conseguir fondos y desarrollar planes de liderazgo y monitoreo. AUME no tiene una comisión específica para los ODS, pero los utiliza como impulso para su trabajo de promoción de mujeres en el sector energético.

Ignacio Muñoz, de TECHO Uruguay, señaló que su organización trabaja específicamente sobre los ODS 6 (agua y saneamiento) y 11 (ciudades sostenibles), desarrollando acciones concretas como la construcción de baños en asentamientos y la búsqueda de incorporación de los barrios a la ciudad formal.

Agustina Melotto, de la Unidad de Denuncia Ambiental Ciudadana (UDAC), planteó una visión crítica. Si bien reconoció que los ODS están entrelazados con todo lo que su organización hace, consideró que la segmentación es "ilusoria" y que no se necesita leerlos para aplicarlos, ya que su trabajo responde a la defensa territorial y al derecho ambiental. Asimismo, señaló que desde 2018 no ha visto una respuesta estatal efectiva a las denuncias ambientales que han presentado.

En una mirada crítica similar, María Forte, de Ecofeminismo Río Negro, señaló que su organización participa en movilizaciones convocadas por la sociedad civil contra el hidrógeno verde, la prospección sísmica y la forestación. Su organización recorre los territorios para relevar afectaciones y elabora informes al respecto. Si bien no lo hacen en el marco de los ODS, estas actividades tienen estrecha relación con algunos de los objetivos.

Florencia Cesilia, de Sin Pavimento (Kiyú, San José), realizó un detallado mapeo de su trabajo vinculado a los ODS: ODS 13 (acción por el clima), ODS 15 (vida de ecosistemas terrestres), ODS 11 (ciudades sostenibles), ODS 4 (educación) y ODS 17 (alianzas). Su organización trabaja en la protección de las barrancas costeras, el monitoreo de la erosión y la divulgación

científica del patrimonio paleontológico y arqueológico del territorio, articulando con la academia y las escuelas rurales.

Victoria D'Onofrio, de Humedal Tesoro Natural (Maldonado), explicó que su organización surgió a raíz de las múltiples denuncias de ecocidio en el Arroyo Maldonado y que trabaja en la protección del humedal, con líneas de acción que incluyen la recuperación de la memoria histórica a través de la fotografía y los relatos de habitantes, con un fuerte componente intergeneracional.⁵ Otro eje es la educación ambiental (se trabaja con centros educativos de primaria, secundaria/UTU) y en la elaboración del plan de manejo del ecoparque metropolitano del humedal del Arroyo Maldonado (en coordinación con instituciones como la Intendencia de Maldonado) en el marco de los decretos departamentales 3911/2012 (declara área de protección) y 3931/2015 (declara Eco parque). Además realiza otras acciones como la incorporación de nuevos padrones al Ecoparque y pedido de no realizar gala de luces por parte de IMM. La organización participa de la Red Unión de la Costa y Red Nacional de Humedales, al tiempo que articula con diversas organizaciones socio-comunitarias y con la academia (CURE).

Déborah Díaz, de Naturalmente Piriápolis, señaló que su organización se enfoca en la difusión, sensibilización y educación ambiental, trabajando en red con otros colectivos y participando de instancias como la Reunión de la Costa y la Asamblea Mar Libre de Petroleras.

Enrique Cenoz, de Medioambiente La Capuera, explicó que su grupo actúa como intermediario entre la Comisión de Cuenca y la sociedad civil de la región, participando en redes territoriales y en espacios de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible.

Jimena Del Pino, integrante de Espátulas Rosadas y Amigos del Océano, señaló que las organizaciones en las que participa no utilizan explícitamente los ODS como marco de referencia para su trabajo, y que incluso a nivel personal no contaba previamente con información sistemática sobre la Agenda 2030. No obstante, indicó que las acciones que desarrollan se vinculan de manera indirecta con varios de los objetivos, particularmente en materia de protección de ecosistemas, cambio climático y conservación marina. En este sentido, su intervención reflejó una forma de apropiación “no formal” de los ODS, donde las prácticas están alineadas con sus principios, aunque no se estructuran en torno a ellos como herramienta conceptual o de planificación.

⁵ Es un proyecto ganador de los fondos green grants en ejecución que finalizará con una fotogalería este 2026.

Fernando Niggemeyer, de la Asociación de Fomento y Turismo de Sauce de Portezuelo, fue explícito al señalar que su organización no utiliza los ODS en su agenda diaria. *'No existen en nuestra agenda. No las tomamos en cuenta para nada. Trabajamos a partir de la realidad local y de ir resolviendo los problemas uno a uno'*, afirmó.

Finalmente, Lara Campiglia, de Reserva de Vida, participó a título personal y señaló que su interés está en preservar el bosque nativo y trabajar en proyectos que unan arte, educación y naturaleza.

4.3.3 Acciones y Desafíos

Las organizaciones dieron cuenta de un amplio abanico de acciones concretas orientadas a la protección ambiental y la defensa de los territorios, así como de los desafíos internos y externos que enfrentan para profundizar su trabajo.

AUME (Noelia Maciera) ha desarrollado un sello llamado "Más Mujeres, Más Energía" para promover la participación de mujeres en eventos del sector energético, y trabaja en la difusión de libros infantiles con protagonistas femeninas para fomentar vocaciones en ciencia y energía. Su desafío es la falta de medición de indicadores sobre la situación de las mujeres en el sector y la necesidad de que las políticas de transición energética incorporen la perspectiva de género.

TECHO Uruguay (Ignacio Muñoz) continúa trabajando en la construcción de baños y viviendas de emergencia en asentamientos, así como en la incorporación de los barrios a la ciudad formal. Su principal desafío es lograr que las intervenciones tengan sostenibilidad en el tiempo.

UDAC (Agustina Melotto) realiza capacitaciones sobre el proceso de denuncia ambiental, difunde información de valor y apoya casos concretos de territorialidad que enfrentan problemáticas ambientales. Sus principales desafíos están vinculados a la falta de respuesta estatal y la ausencia de un sistema efectivo de denuncias.

Ecofeminismo Río Negro (María Forte) participa en movilizaciones contra el hidrógeno verde, la prospección sísmica y la forestación, y realiza informes sobre afectaciones territoriales. Su desafío es lograr que los ministerios tomen en cuenta sus aportes, para lo que consideran fundamental que las audiencias públicas sean vinculantes.

Sin Pavimento (Florencia Cesilia) desarrolla un trabajo de monitoreo de erosión costera, protección de barrancas, divulgación científica y educación ambiental en escuelas rurales, articulando con la academia y con el gobierno departamental. Su desafío es cambiar la

narrativa de los balnearios como espacios de sol y playa para posicionarlos como destinos de turismo científico y de naturaleza.

Desde Humedal Tesoro Natural (Victoria D'Onofrio) se realizan jornadas de limpieza, educación ambiental, se participa en la elaboración del plan de manejo del ecoparque Metropolitano del Arroyo Maldonado (área protegida departamental). Además, realizan encuentros comunitarios con diversas actividades como avistamiento de aves, salidas de campo; espacios para infancias; chocondombe (junto a la Marea del Tesoro). Otros ámbitos de acción son la divulgación científica y la realización de denuncias ambientales ante organismos competentes.⁶ La organización tiene diferentes alianzas con organizaciones como reimpulso y radio mangangá, con quienes llevan adelante jornadas de cartelería comunitaria y conversaciones en ronda. Su desafío es lograr que las denuncias ambientales sean atendidas con celeridad y que el Estado cumpla con la normativa vigente.

Naturalmente Piriápolis (Déborah Díaz) organiza talleres de educación ambiental, plantación de nativas y difusión. Su desafío es que los tomadores de decisiones tengan formación en temas ambientales y que las políticas sean coherentes con los objetivos de sostenibilidad.

Desde Espátulas Rosadas se realizan tareas de limpieza y cuidado activo del humedal del arroyo Maldonado, incluyendo la instalación de cartelería informativa, la creación de barreras de protección para cangrejales y actividades de educación ambiental basadas en el avistamiento de fauna y flora. Por su parte, desde Amigos del Océano se impulsan movilizaciones contra la exploración petrolera en el mar uruguayo, así como conversatorios con científicos y acciones en el plano legal. Entre los desafíos implícitos se encuentra la necesidad de fortalecer la articulación con políticas públicas y marcos institucionales, así como ampliar el acceso a información sobre los ODS para potenciar el impacto y la visibilidad de las acciones que ya se vienen desarrollando en territorio.

Medioambiente La Capuera (Enrique Cenoz) participa en la Comisión de Cuenca y en redes territoriales, acompañando procesos de ordenamiento territorial. Su desafío es lograr que la participación ciudadana sea vinculante y que las instituciones del Estado estén presentes en el territorio.

Sauce de Portezuelo (Fernando Niggemeyer) ha logrado que la intendencia incorpore un proyecto de parque lineal costero y participa en estudios sobre adaptación al cambio climático. Su desafío es que los espacios de escucha sean reales y no meros trámites.

⁶ Se presentó una diligencia preparatoria en el Juzgado Letrado de Primera instancia en lo contencioso Administrativo en Montevideo, siendo –según la representante de la organización– la primera vez que un grupo de ciudadanas/os exige que se cumpla la ley a las instituciones estatales.

4.3.4 Valoraciones

Las valoraciones sobre el desempeño de Uruguay en la Agenda 2030 fueron mayoritariamente críticas, con un fuerte énfasis en la falta de incidencia real de la sociedad civil y en la brecha entre los discursos y las prácticas institucionales.

Un punto de consenso transversal fue la falta de participación ciudadana vinculante. Múltiples intervenciones señalaron que los espacios de consulta son utilizados por el Estado como un mero trámite para "tildar" un requisito, sin que los aportes de la sociedad civil sean realmente considerados en la toma de decisiones.

Agustina Melotto (UDAC) fue contundente: *'Siento que digo cosas que ya están dichas, y digo, ¿a dónde va todo esto?. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible están escritos en una web y nadie los internaliza. Participamos de todas las instancias que nos convocan y la devolución es ninguna.'* Varias participantes apoyaron sus intervenciones.

María Forte (Ecofeminismo Río Negro) sumó: *'La sensación desde la sociedad civil organizada es que los ministerios se burlan. Arman eventos para quedar bien con el artículo 47 que da participación ciudadana, pero cuando llega el momento de definir, tiran lo que la sociedad civil dice y hacen lo que se les antoja. Hacen lo que manda el capital.'*

Victoria D'Onofrio (Humedal Tesoro Natural) señaló que *'no hay una política de Estado, digamos, de pensar el desarrollo sostenible real. Depende mucho del gobierno de turno. No hay un cumplimiento de la normativa vigente por parte de los propios gobiernos.'*

Fernando Niggemeyer (Sauce de Portezuelo) ofreció una evaluación más matizada. Por un lado, valoró la creación del Ministerio de Ambiente como un avance institucional. Por otro, criticó la escucha real: *'Los ámbitos de escucha en general son más para las fotos que reales. Cuando se hizo el llamado a la sociedad civil para el decreto de humedales, fue un saludo a la bandera. No se tomó una sola recomendación.'*

Enrique Cenoz (Medioambiente La Capuera) señaló que la creación del Ministerio de Ambiente generó expectativas que luego se vieron defraudadas cuando se priorizó la prospección sísmica: *'Ahí deja un mensaje de que el valor del extractivismo es mayor que los objetivos del Plan Nacional Ambiental.'*

Jimena Del Pino (Espátulas Rosadas y Amigos del Océano) agregó un elemento adicional: la falta de comunicación entre los propios ministerios y la subestimación de la inteligencia ciudadana por parte de las autoridades. *'Siento que subestiman un poco la inteligencia del ser humano y de la población. Uno de los compromisos de Uruguay era tener el 30% de mar protegido para 2030, y creo que llevamos un 1%.'*

Lara Campiglia (Reserva de Vida) aportó una reflexión económica: *'Además de que están mal tomadas, las decisiones son económicamente inviables. Invito a buscar economistas que respalden estos disparates. No los hay o no los he encontrado.'*

Noelia Maciera (AUME), en contraste, señaló avances positivos: la creación de unidades de género en ministerios y empresas del sector energético, y un diálogo más abierto con el gobierno para la elaboración de políticas de energía. *'Vemos buenas señales, aunque no son suficientes y no van lo suficientemente rápido.'*

Déborah Díaz (Naturalmente Piriápolis) concluyó con una crítica a la falta de formación ambiental en los tomadores de decisiones: *'Se habla de Objetivos de Desarrollo Sostenible, no tienen ni idea de lo que es. Hablan de planes y proyectos, no tienen ni idea de lo que hablan, ni lo que firman, ni lo que dicen.'*

Algunas Propuestas desde Sociedad Civil

En el corto plazo, emergió con fuerza la necesidad de fortalecer las condiciones básicas de gobernanza, participación y comunicación. En este sentido, se planteó la importancia de avanzar hacia mecanismos de participación ciudadana vinculante, particularmente en temas ambientales, superando el carácter meramente consultivo de los espacios existentes. Asociado a ello, se propuso revisar formatos institucionales como las audiencias públicas para corregir las asimetrías entre actores y garantizar condiciones más equitativas de incidencia.

Asimismo, se identificó como prioritario consolidar una base de comunicación y visibilidad de los ODS, mediante campañas que acerquen la agenda a la ciudadanía y permitan comprender la conexión entre acciones cotidianas, políticas públicas y metas globales. En paralelo, se subrayó la necesidad de fortalecer el diálogo territorial, promoviendo espacios de articulación entre comunidades, infraestructuras estratégicas y actores institucionales.

Otro conjunto de propuestas urgentes se orientó a reforzar la capacidad regulatoria y sancionatoria del Estado en materia ambiental, incluyendo la declaración efectiva del delito ambiental, la aplicación de sanciones disuasorias y la restitución del daño causado. En la misma línea, se planteó la necesidad de revisar los procesos de evaluación ambiental, garantizando instancias independientes y accesibles, así como la construcción de sistemas efectivos de denuncia y respuesta.

También se destacaron iniciativas vinculadas a la equidad y las capacidades, como la incorporación de metas de género en sectores estratégicos —particularmente en la transición energética— y la implementación de programas de formación ambiental y en sostenibilidad para tomadores de decisión. Finalmente, se enfatizó la importancia de priorizar el trabajo con jóvenes y niños, fortaleciendo su vínculo con la educación y su participación en la agenda de desarrollo.

En una perspectiva de mediano plazo, las propuestas adquieren un carácter más estructural, organizándose en torno a ejes como la articulación institucional, la planificación territorial y el desarrollo de capacidades. En primer lugar, se planteó la necesidad de avanzar hacia esquemas de coordinación interinstitucional más sólidos, promoviendo el diálogo entre niveles de gobierno y la creación de mesas de trabajo permanentes que integren al Estado, la academia y la sociedad civil. En este marco, se destacó la importancia de definir criterios claros de participación y de gestionar de forma transparente los conflictos de interés.

En segundo lugar, se enfatizó la relevancia de la planificación territorial y ambiental como herramienta preventiva, incluyendo la aprobación de planes de ordenamiento territorial, la eventual implementación de medidas transitorias de protección del uso del suelo y la integración de dimensiones como los entornos

alimentarios y la sostenibilidad productiva. Estas propuestas apuntan a anticipar conflictos y orientar el desarrollo de forma coherente con los objetivos ambientales y sociales.

Un tercer eje refiere al fortalecimiento de los sistemas de información y gestión basada en evidencia, destacándose la necesidad de construir plataformas interoperables, accesibles y rigurosas que permitan monitorear avances, identificar problemas y mejorar la toma de decisiones. En este marco, también se propuso visibilizar y articular las contribuciones existentes de las distintas organizaciones a los ODS, evitando duplicaciones y potenciando sinergias.

Asimismo, se plantearon propuestas orientadas a mejorar la articulación con el sector productivo, incluyendo la simplificación de certificaciones, el desarrollo de incentivos financieros sostenibles y la generación de instrumentos que faciliten la adopción de prácticas alineadas con los ODS, especialmente por parte de pequeñas y medianas empresas.

De forma transversal, varias intervenciones subrayaron la necesidad de descentralizar capacidades y fortalecer el rol del territorio, destacando el potencial de instituciones como UTEC para actuar como nodos de articulación entre actores locales y nacionales. En la misma línea, se propuso conformar redes de trabajo entre organizaciones para compartir información, coordinar acciones y construir agendas comunes.

En conjunto, las propuestas convergen en una mirada crítica sobre las limitaciones actuales de la gobernanza del desarrollo sostenible en Uruguay. Se señala la persistencia de fragmentación institucional, debilidades en la coordinación interministerial y una brecha significativa entre el diseño de políticas y su implementación efectiva. Frente a ello, emerge como hilo conductor la demanda por un Estado con mayores capacidades técnicas, regulatorias y de articulación, capaz de garantizar la coherencia entre normativa y decisiones, asegurar la restitución de daños, producir información de calidad y habilitar formas de participación ciudadana con incidencia real.

** Para este recuadro también se tomó en cuenta la participación en la plataforma ciudadana*

Lista de Asistentes (Mesa virtual III)

Participante	Organización / Institución
Gustavo Méndez Barbato	Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de la República (Moderador)
Fernando Filgueira	Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de la República (Moderador)
Ana Paula García	Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de la República (Observador/a)
Sofía Lenzi	Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de la República (Observador/a)
Rodrigo Seroubian	Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de la República (Observador/a)
Nahuel Roel	Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de la República (Observador/a)
Florencia Sciaraffia	Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de la República (Observador/a)
Daniel Greif	Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) (Observador/a)
Laura González Quinteros	Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) (Observador/a)

Participante	Organización / Institución
Noelia Maciera	Asociación Uruguaya de Mujeres en Energía (AUME)
Ignacio Muñoz	TECHO Uruguay
Agustina Melotto Domé	Unidad de Denuncia Ambiental Ciudadana (UDAC)
María Forte	Ecofeminismo Río Negro
Victoria D'Onofrio	Humedal Tesoro Natural (Maldonado)
Carolina Varcasia	Humedal Tesoro Natural (Maldonado)
Florencia Cesilia	Sin Pavimento (Kiyú, San José)
Déborah Díaz	Naturalmente Piriápolis
Enrique Cenoz	Medioambiente La Capuera
Fernando Niggemeyer	Asociación de Fomento y Turismo de Sauce de Portezuelo
Lara Campiglia	Reserva de Vida (Participación a título personal)
Jimena Del Pino	Espátulas Rosadas y Amigos del Océano
Ariel Imken	Ex Consejo Vecinal 7 (Municipio E) (Participación a título personal)
Isabel Bortagaray	Universidad de la República (Pro Rectoría de Investigación) (Participación a título personal)

4.4 Mesa transversal virtual IV (28 abril)

4.4.1 Introducción

El 28 de abril de 2026 se llevó a cabo una nueva mesa virtual de diálogo en el marco de la elaboración del sexto Informe Nacional Voluntario (INV) de Uruguay sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La instancia fue convocada para complementar el proceso de consulta pública con una mirada específica del sector empresarial, cooperativo, académico y de organizaciones vinculadas al ecosistema de sostenibilidad, innovación social e impacto.

La apertura estuvo a cargo de Daniel Greif, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), quien enmarcó la reunión en el proceso nacional de reporte ante Naciones Unidas sobre los avances de la Agenda 2030. Se recordó que, para este ciclo, se priorizan los ODS 6 (agua limpia y saneamiento), 7 (energía asequible y no contaminante), 9 (industria, innovación e infraestructura), 11 (ciudades y comunidades sostenibles) y 17 (alianzas para lograr los objetivos). A la vez, se invitó a las organizaciones a realizar aportes sobre cualquiera de los diecisiete ODS, considerando los ejes transversales de “no dejar a nadie atrás”, género y cambio climático.

La moderación estuvo a cargo de Gustavo Méndez Barbato, de la Unidad de Métodos y Acceso a Datos (UMAD) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. La dinámica de trabajo se organizó en torno a cinco dimensiones: presentación de las organizaciones y vínculo con los ODS; acciones y buenas prácticas; desafíos; valoraciones sobre el avance del país y propuestas.

La conversación tuvo como rasgo distintivo la presencia de organizaciones que trabajan directamente con empresas, cooperativas, emprendimientos, reportes de sostenibilidad, innovación social, certificaciones, cadenas de valor, economía cooperativa y desarrollo productivo. Por ello, el debate se concentró menos en la identificación de los ODS como marco general -ampliamente conocido por las organizaciones participantes- y más en los problemas de implementación: cómo medir, reportar, incentivar, articular y potenciar las contribuciones del sector privado, cooperativo y de impacto a la Agenda 2030.

Emergieron como temas transversales la necesidad de fortalecer las alianzas, mejorar la calidad de la medición y los reportes, evitar que los ODS se reduzcan al uso simbólico, generar incentivos concretos para que más empresas y organizaciones incorporen la sostenibilidad, y avanzar hacia una coordinación más fluida entre Estado, sector privado, academia, cooperativismo y organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, estuvo presente la incertidumbre respecto a la agenda más allá de 2030 considerando el contexto internacional actual.

4.4.2 Conocimiento e información

Las intervenciones iniciales revelaron un alto nivel de apropiación de la Agenda 2030 entre las organizaciones participantes. En la mayoría de los casos, los ODS no aparecen únicamente como referencia discursiva, sino que fueron incorporados de manera concreta en experiencias y acciones dentro de sus organizaciones de referencia.

Felipe Filomeno, de Pacto Global Uruguay, presentó a la organización como una iniciativa de Naciones Unidas orientada al sector empresarial, estructurada en torno a los diez principios del Pacto Global y la Agenda 2030. Su trabajo acompaña a empresas en la integración de los ODS a través de aceleradores temáticos, espacios de reporte y acciones de movilización. Subrayó que avanzar en sostenibilidad no solo es beneficioso para la sociedad, sino que también representa una decisión estratégica con sentido para los negocios.

Desde la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República (FCEA), Aiblis Vidal explicó que su grupo de investigación trabaja especialmente en torno al ODS 4, aunque con conexiones transversales al conjunto de la agenda. Esto se expresa en la incorporación de contenidos de sostenibilidad en carreras de grado, posgrado y educación permanente, incluyendo certificaciones en reporte de sostenibilidad, economía circular y fiscalidad ambiental. También presentó el Observatorio de Reportes de Sostenibilidad, que monitorea cómo las empresas en Uruguay implementan y comunican sus prácticas, con foco particular en el ODS 12.6.

Silvana Avondet, de CUDECOOP, destacó que el movimiento cooperativo uruguayo encuentra en los ODS un marco coherente con sus propios principios y valores. Señaló que la Alianza Cooperativa Internacional trabajó desde el inicio en esta vinculación y que, en Uruguay, los ODS forman parte de los planes estratégicos y acciones permanentes del sector, que por su naturaleza atraviesa dimensiones económicas, sociales, productivas, habitacionales y de consumo.

Jorge Cartagena, de FUCC, adhirió a este planteamiento y destacó el proyecto conjunto con la Unión Europea "Cooperativismo uruguayo por el desarrollo sostenible", que permitió a varias organizaciones incorporar enfoques de economía verde y fortalecer la articulación institucional. Reconoció que los avances de la federación son todavía modestos, pero situó la economía verde como eje transversal del plan estratégico de los últimos cinco años. Enfatizó el principio de intercooperación (entre cooperativas, con el Estado y con otras organizaciones) como condición indispensable para avanzar.

Alejandra Caballero, de Cooperativas Agrarias Federadas (CAF), explicó que la federación nuclea a unas 10.000 productoras y productores agropecuarios asociados, de los cuales cerca del 80% son productores familiares. Señaló que las cooperativas agrarias tienen una contribución central al ODS 12 y que también participaron en el proyecto europeo mencionado por FUCC y CUDECOOP.

Jessica Pauer, de Incubacoop, describió a la organización como una incubadora de emprendimientos cooperativos innovadores, integrada por CUDECOOP, INACOOOP y el Ministerio de Industria. Identificó vínculos especialmente fuertes con el ODS 8, por su aporte al trabajo decente y la generación de empleo, y con el ODS 9, por el foco en innovación y en sectores donde el cooperativismo no tenía presencia tradicional, como el audiovisual, los videojuegos y el ambiente.

Analía Giménez, de Socialab, presentó a la organización como un espacio orientado a promover la innovación social y apoyar emprendimientos de impacto. Señaló que la memoria anual de Socialab incorporó por primera vez un capítulo sobre cadena de valor y contribución a los ODS, con especial énfasis en educación, juventudes, igualdad de género, trabajo decente, innovación y reducción de desigualdades.

Débora Bertani, de la Unión de Exportadores del Uruguay, presentó el Sello Gestión Sostenible (UEU-LATU) —desarrollado junto al LATU— como el principal instrumento de la organización en esta materia. El sello certifica a empresas exportadoras en distintos niveles de gestión sostenible a partir de una matriz de requisitos alineada con los ODS, y actualmente involucra a más de treinta empresas que representan más del veinte por ciento de las exportaciones uruguayas. Santiago Arturo, también de la Unión de Exportadores, complementó esta presentación con información sobre las compras públicas sostenibles, destacando que la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) incluye en su plan estratégico 2025–2030 la incorporación de atributos de sostenibilidad en el catálogo único de bienes, servicios y obras.

Felipe Lasida, de Sistema B Uruguay, presentó a las empresas B como parte de un movimiento global que integra el impacto social, ambiental y económico en el núcleo del modelo de negocios. Explicó que la herramienta central es la Evaluación de Impacto B —gratuita y de acceso abierto—, que aborda dimensiones como gobernanza, trabajo justo, derechos humanos, equidad, acción climática y circularidad. Uruguay cuenta con 23 empresas B certificadas, dentro de un movimiento que supera las 10.000 a nivel global. Mencionó además iniciativas como la Mesa de Impacto, las rondas de negocio de impacto, el protocolo de compras sostenibles y el Nodo de Innovación Económica.

Carolina Moreira intervino con una doble representación. Desde la Cámara Nórdica, señaló que la sostenibilidad forma parte de la impronta cultural y empresarial de los países nórdicos, y que la Cámara ha impulsado intercambios sobre movilidad sostenible, construcción en madera, barrios sostenibles y compras públicas. Desde Montes del Plata, informó que la empresa cuenta con un área de sostenibilidad desde 2009, reporta anualmente con metodologías *Global Reporting Initiative* (GRI) y el *Sustainability Accounting Standards Board* (SASB), y articula sus objetivos al 2030 con los ODS, complementados por certificaciones forestales, sociales y ambientales, así como programas en biodiversidad, economía circular, desarrollo local y salud ocupacional.

Teresa Pérez del Castillo, de Impact Hub Montevideo, presentó a la organización como parte de una red global orientada a poner los negocios al servicio de las personas y del planeta. Los ODS funcionan como brújula en sus programas de formación, incubación, aceleración, innovación social e innovación abierta. Planteó además, que muchas empresas y emprendimientos generan impacto concreto vinculado a los ODS, pero no siempre

encuentran canales claros para que ese impacto sea visibilizado o incorporado en los reportes nacionales.

4.4.3 Acciones y desafíos

Las organizaciones participantes identificaron acciones concretas vinculadas a los ODS y desafíos para consolidar, medir y ampliar su contribución. En conjunto, las intervenciones muestran un ecosistema empresarial, cooperativo, académico y de organizaciones de impacto que incorpora la Agenda 2030 en herramientas de gestión, reportes, certificaciones, formación, innovación social, alianzas y estrategias institucionales.

Pacto Global Uruguay presentó acciones de acompañamiento al sector empresarial para incorporar la Agenda 2030 en la gestión, los reportes y las estrategias de negocio. Felipe Filomeno presentó herramientas, aceleradores, espacios de reporte y acciones de movilización orientadas a promover cambios sistémicos. Como desafío, se señaló la necesidad de mejorar los mecanismos para que la información generada por las empresas —especialmente pymes— llegue a los sistemas nacionales de seguimiento, sin perder la “cara humana” de los ODS ni reducir el impacto únicamente a números.

Desde FCEA- UDELAR se destacó el trabajo en formación, investigación y generación de información sobre sostenibilidad y ODS. Aiblis Vidal señaló la incorporación de estos contenidos en grado, posgrado y educación permanente, incluyendo la asignatura obligatoria sobre sostenibilidad en la carrera de Contador Público y el desarrollo del Observatorio de Reportes de Sostenibilidad, con posible aporte a la meta 12.6.1. Como desafíos, se planteó fortalecer alianzas entre academia, organizaciones, empresas e instituciones públicas; ampliar la base de datos del Observatorio; mejorar la formación de estudiantes y profesionales; y evitar que la contribución a los ODS se reduzca al uso de íconos sin vínculo sustantivo con metas, indicadores y resultados.

CUDECOOP planteó que el movimiento cooperativo nacional se encuentra alineado con los ODS desde sus principios y valores, en línea con la Alianza Cooperativa Internacional, que incorporó tempranamente la Agenda 2030. Silvana Avondet señaló que, en Uruguay, los ODS forman parte de los planes estratégicos y de las acciones permanentes del movimiento cooperativo, con aportes en sectores económicos, sociales, productivos, de vivienda y de consumo. Como desafío, se señaló la necesidad de mostrar lo ya logrado y medir y reportar de forma sistemática lo que el cooperativismo realiza.

Socialab presentó su trabajo en el apoyo a emprendimientos de impacto y triple impacto, la ejecución territorial de proyectos sociales y el acompañamiento a empresas para incorporar esta mirada en su gestión. Analía Giménez señaló que la organización incluyó por primera vez en su memoria anual un capítulo sobre cadena de valor y contribución a los ODS, destacando especialmente educación, juventudes, igualdad de género, trabajo decente, crecimiento económico, innovación y reducción de desigualdades. Como desafío central, planteó la necesidad de incorporar el impacto social en la estrategia de empresas, organizaciones y emprendimientos, fortalecer metodologías para medirlo y comunicarlo, y promover la escalabilidad de emprendimientos sociales y ambientales.

La Unión de Exportadores del Uruguay (UEU) presentó su área de sostenibilidad y el Sello Gestión Sostenible (UEU-LATU), desarrollado junto al LATU, que certifica a empresas exportadoras en distintos niveles y cuya matriz de requisitos está alineada con los ODS. Débora Bertani señaló que más de treinta empresas, que representan más del veinte por ciento de las exportaciones uruguayas, participan de este proceso. Como desafío, planteó llegar a empresas exportadoras y cadenas de proveedores que aún perciben la sostenibilidad como un costo. Para ello, destacó la importancia de generar incentivos financieros, fiscales y comerciales, así como de articular mejor sellos, certificaciones y beneficios. Como ejemplo positivo mencionó el convenio para el Sello Gestión Sostenible (UEU-LATU) y Marca País de Uruguay XXI. Santiago Arturo mencionó la incorporación de compras públicas sostenibles en el plan estratégico 2025-2030 de ARCE.

Sistema B Uruguay presentó su trabajo con empresas que incorporan impacto social, ambiental y económico en su modelo de negocio. Felipe Lasida destacó el B Impact Assessment™, herramienta gratuita de medición y gestión de impacto, y señaló que en Uruguay hay 23 empresas B dentro de un movimiento global que supera las 10.000. También mencionó iniciativas vinculadas al ODS 17, como Mejores Empresas para Uruguay, la Mesa de Impacto en el marco de la Red Uruguay Emprendedor de ANDE, las Rondas de Negocios de Impacto, la Mesa de Empresas y Biodiversidad, el protocolo de compras sostenibles, Compromisos para la Transformación y el Nodo de Innovación Económica. Como desafíos, señaló la necesidad de promover las sociedades y fideicomisos de Beneficio e Interés Colectivo, generar un marco de negocios más favorable para empresas que miden impacto, transparentan información y modifican su gobernanza, y fortalecer canales de comunicación entre organizaciones de impacto, agencias públicas y ministerios.

La FUCC señaló que el proyecto “Cooperativismo uruguayo por el desarrollo sostenible”, desarrollado con apoyo de la Unión Europea, permitió incorporar de forma más sistemática

la relación entre ODS, economía verde, acciones comerciales, dimensión institucional y vínculos con otras organizaciones. Jorge Cartagena destacó la intercooperación entre cooperativas, con el Estado y con otras organizaciones como eje de trabajo. Como desafíos, planteó sensibilizar y capacitar a las cooperativas socias, avanzar gradualmente en una “ruta del enverdecimiento” y sostener alianzas que permitan generar capacidades hacia el horizonte 2030.

INCUBACOOOP presentó su trabajo como incubadora de emprendimientos cooperativos innovadores, surgida de una alianza estratégica entre CUDECOOP, INACOOOP y el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Jessica Pauer señaló que la organización acompaña tanto la dimensión empresarial como la dimensión cooperativa, de cogestión y propiedad colectiva. Identificó vínculos especialmente fuertes con el ODS 8, por el apoyo a cooperativas de trabajo y generación de empleo para personas socias, especialmente jóvenes, y con el ODS 9, por el énfasis en innovación en sectores donde el cooperativismo tenía menor presencia, como audiovisual, videojuegos y ambiente. Como desafíos, planteó incorporar la sostenibilidad desde el inicio del diseño de los emprendimientos, atender tensiones con el ecosistema jurídico, legal y de contralor, y mejorar la medición del impacto social y de las transformaciones no estrictamente económicas que generan las cooperativas.

Impact Hub Montevideo presentó su trabajo como parte de una red global orientada a poner los negocios al servicio de las personas y del planeta. Teresa Pérez del Castillo señaló que la Agenda 2030 funciona como marco de referencia para sus programas de formación, incubación, aceleración, innovación social, innovación abierta y consultoría, desde los cuales acompaña a empresas y emprendimientos en la medición y gestión del impacto social y ambiental. Como desafío, subrayó la necesidad de que ese impacto pueda ser medible, comunicable y visible en reportes nacionales, regionales o globales, como condición para generar incentivos y voluntad política.

Carolina Moreira intervino desde dos lugares institucionales. Desde Cámara Nórdica destacó su trabajo de intercambio, conexión y difusión de prácticas de sostenibilidad vinculadas a empresas y experiencias de países nórdicos. Señaló que la organización reúne empresas de origen nórdico o con vínculos comerciales con esos países, y que detrás del comercio circulan formas de hacer, cultura empresarial e impronta de sostenibilidad. En Uruguay, la Cámara desarrolla alianzas con Pacto Global, DERES y otras instituciones, y promueve actividades sobre educación, movilidad sostenible, construcción en madera, barrios sostenibles, compras públicas sostenibles y el evento Sustainable Nordics.⁷

⁷ https://www.caun.org.uy/sustainable_Nordics

Desde Montes del Plata, destacó que la empresa cuenta con un área de sostenibilidad desde 2009 y reporta anualmente sus avances vinculados a los ODS mediante metodologías como GRI y SASB⁸. También mencionó certificaciones forestales como FSC y PEFC⁹, certificaciones vinculadas a DDHH y prácticas responsables en la cadena de suministro como SMETA y Sedex¹⁰, así como acciones de conservación, biodiversidad, economía circular, desarrollo local, género, empleo local y trabajo con comunidades. Como desafíos en ambos casos, Carolina Moreira señaló las dificultades para integrar los aportes empresariales a reportes nacionales sin generar doble contabilidad (riesgo de que un mismo aporte, resultado o impacto sea contado dos veces en los reportes nacionales y la dificultad de dos sistemas de información para producirlos).

Cooperativas Agrarias Federadas presentó su contribución al ODS 12 sobre producción y consumo responsables. Alejandra Caballero señaló que la federación nuclea cooperativas agrarias integradas por aproximadamente 10.000 productores agropecuarios asociados, de los cuales cerca del 80% son productores familiares, y que participó del proyecto con la Unión Europea mencionado por FUCC y CUDECOOP. Como desafíos, identificó problemas estructurales del sector agropecuario y cooperativo: disminución de la población rural, altos costos de producción, dificultades de acceso a crédito, asimetrías tributarias, obstáculos para acceder a beneficios de la Ley de Promoción de Inversiones, concentración en cadenas agroalimentarias y crecientes exigencias de trazabilidad, cuidado ambiental y bienestar animal.

4.4.4 Valoraciones

Las valoraciones sobre el avance de Uruguay en la Agenda 2030 fueron en general constructivas y reconocieron la existencia de un ecosistema amplio de organizaciones comprometidas con la sostenibilidad. Al mismo tiempo, estuvieron atravesadas por preocupaciones compartidas, como la fragmentación de ese ecosistema, las dificultades para medir y reportar de forma sistemática, la falta de incentivos claros y la necesidad de acelerar avances antes de 2030.

⁸GRI (*Global Reporting Initiative*) y SASB (*Sustainability Accounting Standards Board*) son estándares internacionales de referencia para la elaboración de reportes de sostenibilidad y la comunicación de impactos ambientales, sociales y de gobernanza.

⁹FSC (*Forest Stewardship Council*) y PEFC (*Programme for the Endorsement of Forest Certification*)

¹⁰SMETA (*Sedex Members Ethical Trade Audit*) y Sedex (*Supplier Ethical Data Exchange*) son herramientas y estándares internacionales orientados a evaluar y reportar prácticas responsables en cadenas de suministro, incluyendo condiciones laborales, derechos humanos, salud, seguridad y ética empresarial.

Un primer eje de valoración refiere al reconocimiento de que Uruguay cuenta con un ecosistema amplio y diverso de organizaciones que ya trabajan en sostenibilidad. Las intervenciones dieron cuenta de empresas privadas y públicas que reportan sus prácticas de sostenibilidad con estándares como GRI o SASB, cooperativas que integran los ODS en sus planes estratégicos, incubadoras que acompañan emprendimientos de impacto desde su diseño, herramientas de certificación alineadas con la Agenda 2030, un observatorio académico que monitorea el reporte de sostenibilidad en Uruguay, redes de impacto, programas de formación universitaria y espacios de articulación intersectorial. Sin embargo, ese ecosistema aparece todavía fragmentado y con dificultades para convertir sus experiencias en información agregada, comparable y útil para la toma de decisiones.

Varias intervenciones coincidieron en que Uruguay tiene avances relevantes, pero que necesita mejorar la forma en que sistematiza, comunica y valora las contribuciones del sector privado, cooperativo, además del estatal. Hacer visible lo que ya existe aparece como una deuda pendiente. Silvana Avondet (CUDECOOP) señaló, por ejemplo, que el sistema cooperativo de vivienda, con cerca de 2.000 cooperativas en el país sostenidas por una política pública vigente desde 1968, es una contribución concreta a los ODS que rara vez se reconoce como tal. A eso se suma, como se mencionó anteriormente, la necesidad de evitar la doble contabilidad, mejorar la calidad de los datos y generar mecanismos para que los aportes del conjunto de actores lleguen efectivamente al reporte nacional.

Otro punto de consenso fue la necesidad de que los ODS no se reduzcan a un marco declarativo. Aiblis Vidal (FCEA-UdelaR) fue contundente al respecto, señalando que usar los íconos o mencionar los ODS en una página web es un primer paso, pero que las empresas necesitan entender cómo su actividad cotidiana contribuye a metas e indicadores concretos. Felipe Filomeno (Pacto Global Uruguay) agregó que el sector empresarial debe poder identificar en qué ODS específicos su acción tiene mayor potencial de impacto, para concentrar esfuerzos donde el avance es posible. La agenda es ampliamente valorada como lenguaje común entre sectores, pero eso no alcanza si no se traduce en prácticas reales de gestión y medición.

El ODS 17 atravesó la conversación como un tema transversal. Las alianzas fueron presentadas por múltiples organizaciones (Pacto Global, Sistema B, CUDECOOP, Impact Hub, Socialab, Incubacoop y otras) como la condición de posibilidad para que la agenda avance, más que como un objetivo en sí mismo. Teresa Pérez del Castillo (Impact Hub Montevideo) planteó que la desarticulación es uno de los problemas centrales, pero que cualquier esfuerzo de coordinación requiere segmentar bien los interlocutores, porque los incentivos, los lenguajes y las prioridades de una cooperativa, una pyme y una empresa global son muy diferentes. Jorge Cartagena (FUCC) subrayó que organizaciones con décadas de trayectoria no habían podido incursionar en la agenda de sostenibilidad hasta contar con apoyo externo, lo que habla de cuánto depende la articulación de recursos e incentivos concretos. En ese sentido, varias intervenciones coincidieron en que los vínculos entre actores no pueden

sostenerse solo en la buena voluntad y requieren ámbitos institucionalizados con continuidad en el tiempo.

Un cuarto eje de valoración refiere al rol del Estado. Silvana Avondet (CUDECOOP) y Débora Bertani (Unión de Exportadores del Uruguay) coincidieron en que los instrumentos, fondos y políticas de promoción existen, pero que no están suficientemente sistematizados ni comunicados hacia las organizaciones que podrían beneficiarse de ellos. Bertani planteó además que muchas empresas perciben la sostenibilidad como un costo, y que revertir esa percepción requiere señales claras del Estado en forma de incentivos fiscales, beneficios financieros y reconocimiento en compras públicas. Aiblis Vidal (FCEA-UdelaR) sumó que el Estado podría dar mayor valor a las empresas que elaboran reportes de sostenibilidad de forma voluntaria, por ejemplo incorporando ese criterio en licitaciones públicas, algo que en Uruguay todavía está pendiente.

También se expresó una preocupación por el contexto internacional. Carolina Moreira (Montes del Plata / Cámara Nórdica) advirtió que algunas señales recientes del escenario global pueden frenar el impulso normativo y político de la sostenibilidad, y que en ese marco cobra especial relevancia el ODS 16, referido a paz, justicia e instituciones sólidas. Señaló que la democracia, el republicanismo y la separación de poderes son condiciones habilitantes para que todo lo demás sea posible, y que Uruguay debe cuidar esas instituciones como un activo estratégico. En ese sentido, la Agenda 2030 fue presentada como una fuente de orientación y legitimidad en un momento en que el multilateralismo enfrenta presiones crecientes.

Desde el sector cooperativo y agropecuario, la valoración incluyó una preocupación más estructural sobre las condiciones de sostenibilidad social y territorial. Alejandra Caballero (Cooperativas Agrarias Federadas) resaltó que 2026 es el Año Internacional de los Pastizales y los Pastores, y que eso pone en primer plano el valor del campo natural como recurso productivo y ambiental para Uruguay. Señaló que el sector agropecuario enfrenta desafíos profundos, entre ellos la disminución de la población rural y las crecientes exigencias de los mercados en materia de trazabilidad y cuidado ambiental, y que hay mucho por hacer para que los productores que trabajan sobre campo natural reciban beneficios concretos por preservarlo. Para Caballero, la sostenibilidad en el agro tiene una dimensión que va más allá de los reportes e implica preservar el arraigo territorial y las capacidades productivas de las generaciones que vendrán.

Finalmente, varias intervenciones destacaron la necesidad de empezar a pensar la agenda posterior a 2030. Felipe Filomeno (Pacto Global Uruguay) planteó que Uruguay y el sector empresarial deberían participar activamente en esa conversación, tomando aprendizajes del ciclo actual y reconociendo que los ODS originalmente no fueron diseñados con el sector empresarial como destinatario principal, algo que debería cambiar en el próximo marco. Señaló además que una debilidad histórica de la Agenda 2030 es la ausencia de un objetivo específico sobre cultura, una dimensión que interpela al conjunto de la sociedad y no

únicamente a las industrias culturales. La propuesta apunta a que Uruguay contribuya activamente a esa discusión global antes de que el próximo ciclo tome forma, tal como ocurrió en los años previos a la aprobación de los ODS en 2015.

Lista de Asistentes (Mesa virtual IV)

Participante	Organización / Institución
Gustavo Méndez Barbato	Facultad de Ciencias Sociales - UDELAR (Moderador)
Rodrigo Seroubian	Facultad de Ciencias Sociales - UDELAR
Daniel Greif	Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)
Gabriela Camps	Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)
Laura González	Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)
Paula Manera	Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)
Felipe Filomeno	Pacto Global Uruguay
Aiblis Vidal	Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - UDELAR
Silvana Avondet	Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (CUDECOOP)
Analía Giménez	Socialab
Débora Bertani	Unión de Exportadores del Uruguay
Santiago Arturo	Unión de Exportadores del Uruguay
Felipe Lasida	Sistema B Uruguay
Jorge Cartagena	Federación Uruguaya de Cooperativas de Consumo (FUCC)
Jessica Pauer	Incubacoop
Teresa Pérez del Castillo	Impact Hub Montevideo
Carolina Moreira	Montes del Plata / Cámara Nórdica
Alejandra Caballero	Cooperativas Agrarias Federadas (CAF)

5. Sistematización de Propuestas

Las propuestas relevadas en el proceso de consulta fueron formuladas en distintos espacios -mesas presenciales por ODS, mesas virtuales transversales y plataforma digital de participación ciudadana- y presentan diferentes niveles de especificidad, alcance temático y grado de elaboración. El proceso combinó instancias sincrónicas de intercambio multiactor con un canal digital asincrónico que permitió recibir propuestas más desarrolladas (22 aportes distribuidos entre los cinco ODS priorizados).

Para su presentación en este capítulo, las propuestas fueron reorganizadas con un criterio de agregación transversal. Esta decisión responde a tres objetivos. En primer lugar, evitar una presentación atomizada o excesivamente extensa, que reproduzca una lista de

iniciativas individuales difíciles de leer en clave de política pública. En segundo lugar, preservar el contenido sustantivo de los aportes sin identificar a las personas u organizaciones que los formularon, presentándolos como orientaciones generales surgidas del proceso de consulta. En tercer lugar, mantener la distinción entre acciones de corto plazo y líneas de mediano o largo plazo, dado que varias propuestas combinan medidas inmediatas con transformaciones institucionales, normativas, presupuestales o culturales de mayor alcance.

La clasificación no pretende sustituir la riqueza ni la especificidad de los aportes originales (se incluyen en Anexo I). Por el contrario, busca identificar núcleos comunes, convergencias y orientaciones estratégicas que atraviesan distintos ODS y espacios de participación. Así, una misma propuesta puede vincularse con más de un eje, pero fue ubicada en aquel donde realiza su principal contribución. El resultado es una sistematización orientada a facilitar la lectura integrada de las propuestas y a ofrecer insumos para una eventual hoja de ruta de trabajo posterior al Informe Nacional Voluntario.

A partir del análisis conjunto de los insumos, las propuestas fueron agrupadas en ocho ejes: i) gobernanza, articulación institucional y participación; ii) información, monitoreo, reporte y transparencia; iii) financiamiento, incentivos y compras públicas sostenibles; iv) infraestructura, servicios básicos y transición socioambiental; v) innovación, desarrollo productivo y economía circular; vi) formación, capacidades y cultura de sostenibilidad; vii) territorialización, descentralización y comunidades sostenibles; y viii) regulación, fiscalización y coherencia normativa.

5.1 Gobernanza, articulación institucional y participación

5.1.1 Corto plazo

Un primer conjunto de propuestas apunta a fortalecer de manera inmediata los espacios de articulación entre organismos públicos, gobiernos departamentales, municipios, sociedad civil, academia, sector privado y cooperación internacional. En distintos espacios del proceso se señaló que Uruguay cuenta con diagnósticos, capacidades e iniciativas relevantes, pero que muchas veces se encuentran dispersas, superpuestas o insuficientemente conectadas. Por ello, se propone consolidar ámbitos regulares de coordinación, con objetivos claros, responsabilidades definidas y mecanismos de seguimiento que permitan evitar duplicaciones y mejorar la coherencia de las intervenciones.

En el corto plazo, también se plantea mejorar la calidad de la participación ciudadana. Las propuestas insisten en que la participación no debe limitarse a instancias consultivas o formales. Debe generar condiciones reales de incidencia, especialmente en temas ambientales, territoriales, energéticos y de infraestructura. Esto implica revisar formatos de audiencias públicas, fortalecer comisiones de cuenca y otros ámbitos existentes, asegurar que las instancias de participación sean difundidas con suficiente antelación y de manera eficaz, garantizar información previa accesible, reducir asimetrías entre actores y generar mecanismos de devolución sobre cómo los aportes ciudadanos son considerados en la toma de decisiones.

Asimismo, se propone ampliar la difusión pública de los ODS mediante una estrategia de comunicación clara, territorializada y conectada con problemas cotidianos. La Agenda 2030 aparece todavía como una referencia conocida sobre todo en ámbitos técnicos o institucionales, pero con baja apropiación social. Por ello, se plantea desarrollar campañas de comunicación y materiales accesibles que permitan mostrar cómo las políticas públicas, las acciones comunitarias y las prácticas de organizaciones y empresas se vinculan con metas concretas de desarrollo sostenible.

5.1.2 Mediano plazo

En una perspectiva de mediano y largo plazo, las propuestas apuntan a institucionalizar la articulación multiactor más allá del ciclo del informe. Esto supone crear o fortalecer espacios permanentes de diálogo entre Estado, sociedad civil, sector productivo, cooperativismo, academia y organismos de cooperación, evitando que la participación quede asociada únicamente a momentos puntuales de consulta. Estos ámbitos deberían permitir construir prioridades compartidas, articular recursos, identificar brechas, monitorear avances y sostener agendas de trabajo con continuidad.

También se propone avanzar hacia esquemas de coordinación orientados por metas país. En lugar de que cada institución actúe únicamente desde su mandato sectorial, se plantea la posibilidad de definir objetivos comunes de desarrollo sostenible a los que distintos organismos puedan contribuir con recursos, capacidades e instrumentos propios. Esta lógica permitiría reducir la fragmentación institucional y fortalecer la coherencia entre planificación, presupuesto, implementación y evaluación, clarificando también la asignación de responsabilidades.

Finalmente, se plantea la necesidad de consolidar alianzas territoriales más estables, especialmente en localidades pequeñas, zonas rurales, territorios de baja densidad y comunidades con menor acceso efectivo a servicios. La articulación interinstitucional

aparece aquí como una condición para que las respuestas públicas no lleguen de forma fragmentada, así como también para una intervención del Estado más eficiente y efectiva anclada en los diferentes acumulados institucionales. Esto implica estrategias integrales que combinen vivienda, agua, saneamiento, energía, transporte, educación, salud, conectividad, cultura y participación.

5.2 Información, monitoreo, reporte y transparencia

5.2.1 Corto plazo

Un segundo eje transversal refiere a la necesidad de mejorar la producción, integración y uso de información para la toma de decisiones. En varias mesas se señaló que el problema no reside en la ausencia total de datos, sino en su dispersión, falta de interoperabilidad, baja comparabilidad y escaso uso efectivo en la gestión. Por ello, se propone avanzar en sistemas de información más articulados entre niveles de gobierno, organismos públicos, instituciones académicas, sociedad civil y sector privado.

En el corto plazo, se propone mejorar los criterios de medición y reporte de contribuciones a los ODS. Esto implica evitar reportes meramente declarativos o centrados en el uso de iconografía, y promover informes basados en metas, indicadores, evidencia de impacto, materialidad sectorial y trazabilidad de las acciones. También se propone facilitar que pequeñas y medianas empresas, cooperativas, organizaciones sociales y emprendimientos puedan medir y comunicar sus contribuciones sin enfrentar costos desproporcionados.

Otro conjunto de propuestas apunta a mejorar la transparencia y el acceso público a la información. Esto incluye datos sobre calidad del agua, saneamiento, gestión de residuos, contaminación lumínica, impacto ambiental, avances de proyectos, contribuciones empresariales a los ODS, incentivos disponibles y resultados de programas públicos. La información es entendida como un insumo técnico, pero también como condición para la participación, la confianza pública y la rendición de cuentas, así como para la apropiación social de la Agenda.

5.2.2 Mediano y largo plazo

En el mediano y largo plazo, se propone construir sistemas integrados de inteligencia de datos orientados al desarrollo sostenible. Entre las áreas mencionadas aparecen los flujos de materiales reciclados, la trazabilidad de residuos, la gestión de recursos hídricos, las redes de saneamiento, los indicadores de infraestructura sostenible, la contaminación lumínica, la innovación no contabilizada y las contribuciones de empresas y organizaciones a

los ODS. Estas propuestas convergen en la necesidad de pasar de registros fragmentados a sistemas interoperables capaces de orientar políticas, inversiones y controles.

También se plantea avanzar hacia una arquitectura más permanente de monitoreo y reporte, que vincule la información nacional, departamental, municipal, institucional y sectorial. La idea central es que los ODS no funcionen únicamente como una grilla de reporte periódico, y sean una herramienta de gestión capaz de informar decisiones cotidianas, priorizar intervenciones, evaluar impactos y ajustar políticas.

En este eje se incluye además la propuesta de explorar herramientas de inteligencia artificial para sistematizar información dispersa, identificar patrones, mejorar el seguimiento y facilitar la articulación entre aportes de distintos actores. Esta línea fue planteada como una posibilidad para mejorar la capacidad de monitoreo y reporte, siempre que se combine con criterios claros de calidad, transparencia y control público.

5.3 Financiamiento, incentivos y compras públicas sostenibles

5.3.1 Corto plazo

Un tercer eje reúne propuestas orientadas a alinear recursos, incentivos y mecanismos de reconocimiento con los objetivos de desarrollo sostenible. En el corto plazo, se plantea sistematizar y comunicar mejor los fondos, beneficios, programas e instrumentos ya existentes, dado que muchas veces las políticas públicas que contribuyen a los ODS no son reconocidas como tales o no resultan suficientemente accesibles para los actores que podrían utilizarlas.

También se propone otorgar mayor valor público a las organizaciones que reportan, miden o demuestran contribuciones verificables a la sostenibilidad. Esto podría expresarse en compras públicas, licitaciones, programas de apoyo, mecanismos de reconocimiento o ponderaciones positivas para empresas, cooperativas, organizaciones sociales y emprendimientos que acrediten prácticas sostenibles con evidencia suficiente.

En materia de compras públicas, varias propuestas convergen en acelerar la incorporación de criterios de sostenibilidad ambiental, social y de género. Esto implica desarrollar atributos claros, mecanismos de ponderación, criterios sectoriales y capacidades técnicas para que la compra pública funcione como instrumento de transformación productiva, innovación, inclusión y sostenibilidad.

5.3.2 Mediano plazo

En el mediano y largo plazo, las propuestas apuntan a desarrollar instrumentos financieros sostenibles más robustos. Se plantea promover créditos sostenibles, fondos de transición, bonos temáticos, esquemas de cofinanciamiento, incentivos fiscales y mecanismos que ofrezcan mejores condiciones a proyectos alineados con metas de sostenibilidad. Estas herramientas deberían facilitar y promover la inversión en eficiencia energética, transición productiva, infraestructura sostenible, economía circular, saneamiento, resiliencia hídrica, innovación y empleo verde.

También se propone articular certificaciones, sellos y beneficios para evitar superposiciones y cargas excesivas, especialmente para pymes y organizaciones de menor escala. La lógica sugerida es construir un “paraguas” de incentivos que conecte reportes, certificaciones, acceso a financiamiento, compras públicas, marca país, beneficios fiscales y asistencia técnica.

Otra línea de mediano plazo refiere a alinear la contribución empresarial con prioridades nacionales de desarrollo sostenible. Esto supone identificar sectores con mayor incidencia en cada dimensión de sostenibilidad, definir materialidades sectoriales y orientar los instrumentos públicos hacia aquellos ámbitos donde el impacto potencial sea mayor. El objetivo es evitar una lógica homogénea para todos los actores y avanzar hacia estrategias diferenciadas según sector, tamaño, territorio y capacidad de transformación.

5.4 Infraestructura, servicios básicos y transición socioambiental

5.4.1 Corto plazo

Un cuarto eje agrupa propuestas vinculadas con agua, saneamiento, energía, vivienda, residuos, movilidad, iluminación, infraestructura urbana y servicios básicos. En el corto plazo, se plantea fortalecer la gestión del agua y el saneamiento mediante mayor coordinación interinstitucional, planes de saneamiento seguro, mejora del monitoreo, transparencia en la información y sostenimiento de estándares que eviten retrocesos hacia soluciones precarias. Las propuestas subrayan que el saneamiento continúa siendo una deuda relevante y que requiere respuestas adaptadas a cada territorio.

En materia energética, las propuestas de corto plazo combinan equidad, eficiencia y planificación. Se plantea mejorar o recuperar instrumentos tarifarios orientados a hogares

vulnerables o de bajo consumo, revisar subsidios para asegurar su focalización, promover el recambio de flotas públicas hacia tecnologías más limpias y adoptar criterios de iluminación responsable en el alumbrado público. También se señala la necesidad de revisar marcos normativos recientes cuando puedan afectar la sostenibilidad financiera de las empresas públicas y, con ello, las políticas sociales asociadas al acceso a la energía.

En relación con residuos y circularidad, se propone acelerar la implementación de sistemas de recolección diferenciada, fortalecer redes locales de reciclaje, mejorar espacios de acopio, reducir residuos de un solo uso en actividades públicas y turísticas, e incorporar sistemas digitales de trazabilidad. Estas medidas se vinculan tanto con el ODS 11 como con los ODS 9, 12, 13 y 17.

5.4.2 Mediano plazo

En el mediano y largo plazo, las propuestas apuntan a consolidar infraestructuras sostenibles y resilientes. En materia hídrica, se plantea desarrollar reservas estratégicas de agua, fortalecer la planificación integral de cuencas, mejorar la resiliencia frente a sequías y avanzar en mecanismos de conservación, restauración y uso sostenible de ecosistemas relevantes. En saneamiento, se propone ampliar soluciones seguras, adaptadas a pequeñas localidades, ruralidad dispersa y territorios donde las redes tradicionales no siempre resultan viables.

En materia energética, las propuestas apuntan a una segunda transición energética que no se limite a la generación renovable, incorporando eficiencia en el uso, movilidad eléctrica con gestión integral de baterías, valorización energética de residuos, desarrollo de nuevos energéticos, planificación de empleos verdes y reducción de externalidades ambientales. También se propone utilizar enfoques integrales, como el trilema energético, para evaluar simultáneamente seguridad de suministro, equidad y sostenibilidad ambiental.

En infraestructura urbana y territorial, se plantea fortalecer la vivienda adecuada, la movilidad sostenible, los espacios públicos, la infraestructura verde, los circuitos cortos de alimentos, los mercados locales y las ciudades de proximidad. La sostenibilidad urbana es entendida como acceso efectivo a derechos, servicios, naturaleza, movilidad, cuidado, participación y calidad de vida, no solamente como infraestructura física.

5.5 Innovación, desarrollo productivo y economía circular

5.5.1 Corto plazo

Un quinto eje refiere a innovación, industria, tecnología y transformación productiva. En el corto plazo, se propone mapear y visibilizar formas de innovación que actualmente no son captadas por los instrumentos tradicionales: innovación generada por cooperativas, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, comunidades territoriales y prácticas cotidianas de gestión. La innovación no aparece reducida a tecnología de punta. También aparece asociada a soluciones sociales, institucionales, pedagógicas, territoriales y organizacionales.

También se plantea fortalecer instituciones clave de transformación digital e innovación pública, integrar los ODS en planes estratégicos y reuniones de gestión, y evitar sistemas de reporte paralelos que aumentan cargas administrativas sin mejorar la toma de decisiones. Las propuestas sugieren que los ODS deben incorporarse a las rutinas de planificación y evaluación existentes, en lugar de funcionar como una capa adicional desconectada.

En materia de economía circular, se propone avanzar rápidamente en sistemas de trazabilidad de residuos, taxonomías comunes, datos sobre flujos de materiales, información de precios e incentivos para que la industria demande materia prima reciclada en lugar de materiales vírgenes.

5.5.2 Mediano plazo

En el mediano y largo plazo, las propuestas apuntan a construir un ecosistema de innovación más integrado, descentralizado y orientado al desarrollo sostenible. Esto incluye ampliar instrumentos de financiamiento para innovación, fortalecer esquemas de cofinanciamiento público-privado, promover vínculos entre grandes empresas y pymes proveedoras, y desarrollar cadenas de valor sostenibles con incentivos fiscales, regulatorios y comerciales.

También se plantea avanzar hacia una política industrial que incorpore economía circular, trazabilidad, reutilización, valorización de materiales, simbiosis industrial y reducción de dependencia externa. En esta línea, la circularidad deja de ser concebida únicamente como gestión de residuos y pasa a pensarse como infraestructura productiva, tecnológica y logística.

En una escala más estratégica, se propone desarrollar proyectos país de largo plazo vinculados a energías limpias, infraestructura portuaria, hidrógeno verde, tecnología, logística, baterías, reciclaje avanzado y soberanía tecnológica. Estas iniciativas deberían

estar acompañadas por salvaguardas ambientales, participación ciudadana, generación de capacidades locales y planificación territorial.

5.6 Formación, capacidades y cultura de sostenibilidad

5.6.1 Corto plazo

Un sexto eje reúne propuestas orientadas a fortalecer capacidades. En el corto plazo, se plantea desarrollar programas de formación en ODS, sostenibilidad, innovación, transición energética, medición de impacto, ambiente y participación dirigidos a tomadores de decisión, equipos técnicos, empresas, cooperativas, organizaciones sociales y ciudadanía.

También se propone trabajar prioritariamente con jóvenes, niñas, niños y adolescentes, tanto para mejorar la apropiación social de la Agenda 2030 como para reducir brechas de acceso a educación superior, tecnología y empleos del futuro. Esta preocupación aparece especialmente vinculada al principio de “no dejar a nadie atrás”, a la descentralización educativa y a la necesidad de evitar que los avances tecnológicos profundicen desigualdades territoriales o de género.

En materia energética y ambiental, se propone fortalecer capacitaciones prácticas para usuarios, comunidades y organizaciones, de modo que el acceso a tecnologías eficientes se traduzca efectivamente en ahorro, bienestar y cambios de comportamiento. Las propuestas insisten en que la sostenibilidad no depende solo de infraestructura o equipamiento, destacando que es clave la apropiación social, uso adecuado y mantenimiento.

5.6.2 Mediano plazo

En el mediano y largo plazo, se propone incorporar la sostenibilidad de manera más sistemática en la formación profesional, técnica y universitaria. Esto incluye contenidos curriculares, educación permanente, certificaciones, capacitación para empresas y formación de profesionales capaces de gestionar, medir y reportar impactos ambientales, sociales y económicos.

También se plantea anticipar la formación para empleos verdes y sectores estratégicos, especialmente en energía, movilidad, hidrógeno verde, economía circular, agua, saneamiento, logística, digitalización, inteligencia artificial y tecnologías ambientales. La formación aparece como una condición para evitar dependencia tecnológica y para que los beneficios de la transición productiva se distribuyan territorialmente.

Otro componente de largo plazo refiere al cambio cultural. Las propuestas incluyen campañas de consumo responsable, educación ambiental, agroecología, restauración, cuidado de la biodiversidad, reducción de residuos, uso eficiente de recursos y reconocimiento de la dimensión cultural del desarrollo sostenible. En esta perspectiva, la sostenibilidad supone una transformación de valores, prácticas institucionales y hábitos sociales.

5.7 Territorialización, descentralización y comunidades sostenibles

5.7.1 Corto plazo

Un séptimo eje refiere a la necesidad de territorializar la Agenda 2030. En el corto plazo, se propone fortalecer municipios, gobiernos departamentales y espacios locales como canales de apropiación, implementación y seguimiento de los ODS. Las propuestas señalan que muchas brechas no se captan adecuadamente desde categorías nacionales agregadas y que es necesario producir información y políticas sensibles a diferencias entre territorios, localidades pequeñas, periferias urbanas, zonas rurales, agrupamientos irregulares y comunidades alejadas de servicios.

También se plantea mejorar los formatos de participación territorial, utilizando herramientas accesibles y adaptadas a las condiciones reales de la población. En algunos territorios, esto implica combinar encuentros presenciales, plataformas digitales, comunicación por celulares, asambleas de microzonas, redes comunitarias y trabajo con organizaciones locales.

En relación con ciudades y comunidades sostenibles, se propone atender de manera prioritaria la vivienda precaria, los asentamientos, los agrupamientos rurales irregulares, la movilidad cotidiana, el acceso a servicios, la calidad ambiental local, la gestión de residuos y la disponibilidad de espacios públicos adecuados.

5.7.2 Mediano plazo

En el mediano y largo plazo, las propuestas apuntan a convertir a los municipios y gobiernos subnacionales en actores centrales de localización de los ODS. Esto incluye presupuestos participativos, concejos vecinales permanentes, mapeo de actores, planificación por microzonas y fortalecimiento de capacidades locales para definir prioridades, implementar acciones y monitorear avances en un sentido acorde a la realidad de cada territorio.

También se plantea avanzar hacia una planificación urbana y territorial de proximidad, que integre vivienda, alimentación, movilidad, infraestructura verde, circuitos cortos de producción y consumo, mercados locales, espacios públicos, salud, cuidados y naturaleza. Esta perspectiva amplía el ODS 11 desde una mirada estrictamente urbana hacia una agenda de comunidades sostenibles.

Finalmente, se propone fortalecer programas de llegada territorial integrada, donde distintas instituciones coordinen acciones en vivienda, agua, saneamiento, energía, educación, salud, cultura, formación, protección social y justicia. La territorialización aparece así como una estrategia para superar respuestas fragmentadas y construir presencia estatal y social más coherente en los territorios.

5.8 Regulación, fiscalización y coherencia normativa

5.8.1 Corto plazo

Un octavo eje reúne propuestas vinculadas a regulación, fiscalización, control ambiental y coherencia normativa. En el corto plazo, se plantea revisar mecanismos de denuncia ambiental, fortalecer capacidades de respuesta del Estado, establecer sanciones efectivamente disuasorias frente al daño ambiental y asegurar mecanismos de restitución o reparación. Las propuestas insisten en que la normativa debe traducirse en capacidad real de prevención, control y corrección.

También se propone revisar los mecanismos de evaluación de impacto ambiental, reduciendo asimetrías entre empresas, ciudadanía y Estado. Esto incluye mejorar la calidad de la información, fortalecer evaluaciones independientes, asegurar participación temprana de comunidades potencialmente afectadas y revisar formatos de audiencias públicas para que no operen como trámites formales con baja incidencia.

En materia de infraestructura tecnológica y lumínica, se propone incorporar criterios ambientales a la regulación de iluminación pública, infraestructura espacial, megaconstelaciones satelitales y contaminación lumínica, entendiendo que la innovación tecnológica no debe comprometer biodiversidad, salud humana, patrimonio natural ni calidad del cielo nocturno.

5.8.2 Mediano plazo

En el mediano y largo plazo, las propuestas apuntan a fortalecer la coherencia entre normativa, planificación y decisiones públicas. Esto implica avanzar en planes de ordenamiento territorial pendientes, retomar instrumentos ambientales ya elaborados,

coordinar mejor entre ministerios y niveles de gobierno, y asegurar que las decisiones de desarrollo sean consistentes con marcos normativos, evidencia técnica y participación ciudadana.

También se plantea revisar trabas administrativas o regulatorias que impiden escalar innovaciones sostenibles. En algunos casos, existen soluciones técnicas o acuerdos entre actores que no logran implementarse porque las normas no se actualizan al ritmo de los cambios tecnológicos, productivos o ambientales. Por ello, se propone identificar obstáculos normativos y ajustar marcos regulatorios para habilitar soluciones sostenibles sin debilitar controles ni garantías públicas.

Finalmente, se plantea fortalecer la discusión sobre el ciclo posterior a 2030 y su vínculo con una estrategia nacional de desarrollo. Varias propuestas sugieren que el país debería comenzar a sistematizar aprendizajes del ciclo actual de los ODS, identificar vacíos, consolidar capacidades y participar activamente en la construcción de la agenda post-2030. Esta discusión debería vincularse con una visión de largo plazo sobre productividad, competitividad, sostenibilidad, inclusión, cultura, territorio y bienestar.

5.9 Síntesis

La sistematización de las propuestas muestra una convergencia importante, respecto a la necesidad de fortalecer las condiciones institucionales, sociales, productivas y territoriales que hacen posible avanzar en la Agenda 2030. En ese sentido, los énfasis más reiterados son la articulación interinstitucional, la participación sustantiva, la mejora de la información, la transparencia, el financiamiento sostenible, la territorialización, la formación de capacidades, la transición energética, la economía circular, la regulación ambiental y la coherencia entre políticas públicas.

En términos de corto plazo, predominan propuestas orientadas a destrabar capacidades ya existentes: mejorar coordinación, comunicar mejor la agenda, fortalecer espacios de participación, ordenar información, transparentar incentivos, reconocer reportes de sostenibilidad, impulsar compras públicas sostenibles, mejorar sistemas de monitoreo, atender urgencias ambientales y reforzar servicios básicos.

En el mediano y largo plazo, las propuestas se orientan a transformaciones más estructurales: institucionalizar alianzas, consolidar sistemas integrados de información, desarrollar instrumentos financieros sostenibles, profundizar la transición energética, fortalecer la economía circular, formar capacidades para empleos verdes, descentralizar

conocimiento, territorializar la Agenda 2030, revisar marcos normativos y vincular el INV con una estrategia nacional de desarrollo sostenible.

En conjunto, las propuestas sugieren que Uruguay no parte de cero. Existen experiencias, capacidades, instrumentos y aprendizajes acumulados. El principal desafío identificado es convertir esos acumulados en arreglos más estables, visibles, coordinados y orientados a resultados, capaces de sostener el avance de la Agenda 2030 más allá del ciclo puntual de elaboración del Informe Nacional Voluntario y de generar condiciones para la construcción de la agenda post-2030.

Cuadro síntesis de propuestas sistematizadas

Eje	Corto plazo	Mediano plazo
1. Gobernanza, articulación institucional y participación	Fortalecer espacios de coordinación entre organismos públicos, gobiernos departamentales, municipios, sociedad civil, academia, sector privado y cooperación internacional. Mejorar la calidad de la participación ciudadana, con información previa accesible, mecanismos de devolución y reducción de asimetrías entre actores.	Institucionalizar espacios permanentes de articulación multiactor más allá del INV. Avanzar hacia metas país compartidas, con responsabilidades, recursos y capacidades distribuidas entre instituciones. Consolidar alianzas territoriales estables.
2. Información, monitoreo, reporte y transparencia	Mejorar criterios de medición y reporte de contribuciones a los ODS. Facilitar reportes de sostenibilidad para pymes, cooperativas y organizaciones sociales. Ampliar el acceso público a información sobre agua, saneamiento, residuos, energía, impactos ambientales, incentivos y avances de proyectos.	Construir sistemas integrados e interoperables de información sobre desarrollo sostenible. Desarrollar inteligencia de datos sobre flujos de materiales, residuos, agua, contaminación lumínica, innovación y contribuciones a los ODS. Usar la información como herramienta de gestión y no solo de reporte.
3. Financiamiento, incentivos y compras públicas sostenibles	Sistematizar y comunicar mejor los fondos, beneficios e instrumentos existentes. Reconocer a empresas y organizaciones que reportan o demuestran contribuciones verificables a la sostenibilidad. Incorporar criterios de sostenibilidad en compras públicas y licitaciones.	Desarrollar créditos sostenibles, bonos temáticos, fondos de transición, incentivos fiscales y esquemas de cofinanciamiento. Articular certificaciones, sellos y beneficios para evitar superposiciones. Alinear la contribución empresarial con prioridades nacionales y materialidades sectoriales.

4. Infraestructura, servicios básicos y transición socioambiental	Fortalecer la gestión del agua y el saneamiento, sostener estándares seguros y mejorar el monitoreo. Promover eficiencia energética, iluminación responsable, movilidad limpia y acceso equitativo a la energía. Mejorar recolección diferenciada, reciclaje y trazabilidad de residuos.	Consolidar infraestructuras sostenibles y resilientes: reservas estratégicas de agua, saneamiento adaptado a territorios diversos, transición energética integral, movilidad eléctrica con gestión de baterías, valorización energética de residuos, vivienda adecuada, infraestructura verde y ciudades de proximidad.
5. Innovación, desarrollo productivo y economía circular	Mapear y visibilizar innovaciones no contabilizadas generadas por sociedad civil, cooperativas, sindicatos, instituciones públicas y territorios. Integrar los ODS en planes estratégicos y sistemas de gestión. Fortalecer trazabilidad de residuos y datos sobre materiales reciclados.	Construir un ecosistema de innovación más integrado, descentralizado y orientado al desarrollo sostenible. Promover economía circular como infraestructura productiva. Impulsar instrumentos de cofinanciamiento, vínculos entre grandes empresas y pymes, cadenas de valor sostenibles y proyectos país de largo plazo.
6. Formación, capacidades y cultura de sostenibilidad	Desarrollar capacitaciones en ODS, sostenibilidad, innovación, ambiente, transición energética, medición de impacto y participación. Priorizar jóvenes, niñas, niños y adolescentes. Fortalecer formación práctica para usuarios y comunidades en eficiencia energética, ambiente y uso de tecnologías.	Incorporar sostenibilidad en formación técnica, profesional y universitaria. Anticipar capacidades para empleos verdes y sectores estratégicos. Promover cambios culturales en consumo responsable, educación ambiental, agroecología, restauración, biodiversidad y uso eficiente de recursos.
7. Territorialización, descentralización y comunidades sostenibles	Fortalecer municipios y gobiernos departamentales como canales de apropiación e implementación de los ODS. Mejorar formatos de participación territorial. Atender vivienda precaria, agrupamientos rurales, periferias, movilidad, servicios, residuos y calidad ambiental local.	Convertir a municipios y gobiernos subnacionales en actores centrales de localización de los ODS. Desarrollar presupuestos participativos, concejos vecinales, planificación por microzonas y capacidades locales. Avanzar hacia comunidades sostenibles con vivienda, servicios, movilidad, alimentación, naturaleza y cuidados.
8. Regulación, fiscalización y coherencia normativa	Fortalecer sistemas de denuncia ambiental, sanciones disuasorias, reparación del daño y capacidades estatales de fiscalización. Mejorar evaluaciones de impacto ambiental y participación temprana. Incorporar criterios ambientales en iluminación, infraestructura tecnológica y contaminación lumínica.	Asegurar coherencia entre normativa, planificación y decisiones públicas. Avanzar en planes de ordenamiento territorial y revisar trabas regulatorias que impiden escalar innovaciones sostenibles. Vincular el INV con una estrategia nacional de desarrollo y con la discusión post-2030.

Fuente: elaboración propia a partir de las propuestas recogidas en mesas presenciales, mesas virtuales y plataforma digital de participación ciudadana.

6. Consideraciones finales

El presente informe constituye un insumo para la elaboración del Informe Nacional Voluntario de Uruguay 2026 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Su propósito principal fue sistematizar los aportes recogidos en el proceso de consulta pública orientado a incorporar la perspectiva de la sociedad civil en torno a los ODS priorizados para este ciclo: ODS 6, ODS 7, ODS 9, ODS 11 y ODS 17. En ese sentido, el documento busca contribuir a que el INV 2026 incorpore voces, experiencias, valoraciones y propuestas que provienen de actores no gubernamentales y de espacios de diálogo multiactor.

Esta incorporación resulta especialmente relevante porque el INV 2026 puede ser entendido como un informe de segunda generación en la relación entre el Estado y la sociedad civil en el marco de la Agenda 2030. Al igual que en 2017, el país vuelve a incluir una perspectiva específica de la sociedad civil en el proceso de reporte, pero lo hace en un contexto diferente: más cercano al horizonte de 2030, con mayores aprendizajes acumulados, con una agenda más instalada en algunos ámbitos institucionales y sectoriales, y también con nuevas demandas de participación, transparencia, territorialización y coherencia de políticas. El valor de este ejercicio radica, entonces, en ampliar el campo de observación del INV, incluyendo, además del reporte del gobierno, la percepción, experiencias y valoraciones de distintos actores sociales, académicos, profesionales, productivos, cooperativos y territoriales acerca de los avances y desafíos de la Agenda 2030 y su puesta en práctica.

El proceso de consulta mostró que la sociedad civil no participa únicamente como destinataria de políticas públicas ni como fuente de demandas. A lo largo de las mesas presenciales, las mesas virtuales y la plataforma digital, los aportes relevados dieron cuenta de organizaciones y actores que producen conocimiento, sostienen experiencias territoriales, generan capacidades, identifican brechas, formulan propuestas, innovan en sus prácticas y participan en el seguimiento público de los compromisos de sostenibilidad. En muchos casos, las acciones relevadas ya contribuyen de hecho a los ODS, aunque no siempre se nombren o registren bajo ese marco. Este punto es relevante porque muestra que la Agenda 2030, además de ser un instrumento de reporte, puede funcionar como una estructura común para reconocer, ordenar y potenciar prácticas que ya existen en el país,

definiendo prioridades compartidas y ofreciendo herramientas para su monitoreo y evaluación.

El diseño metodológico adoptado permitió combinar distintas modalidades de participación. El proceso articuló mesas presenciales, instancias virtuales y participación digital asincrónica, con el objetivo de ampliar la cobertura y recoger aportes diversos. Las mesas permitieron generar intercambio, contraste de perspectivas y construcción colectiva de diagnósticos; la plataforma digital, por su parte, habilitó propuestas escritas más desarrolladas y con mayor trazabilidad, abiertas al intercambio público. La sistematización posterior buscó transformar esos insumos heterogéneos en materiales comparables y utilizables para la elaboración del INV, preservando al mismo tiempo la diversidad de enfoques, experiencias y preocupaciones recogidas.

Al mismo tiempo, el proceso presenta limitaciones que deben ser consideradas al interpretar sus resultados. En primer lugar, se trató de una consulta temporalmente acotada, desarrollada en un período breve, lo que condicionó tanto el alcance de la convocatoria como la profundidad posible de algunas discusiones. En segundo lugar, la participación se estructuró sobre una convocatoria abierta y voluntaria, por lo que los aportes no deben leerse como una representación estadística de la sociedad civil en su conjunto, sino como la expresión diversa de quienes efectivamente participaron. En tercer lugar, la composición de algunas mesas mostró una presencia más fuerte de actores institucionales o técnicos que de organizaciones sociales de base, mientras que otras instancias -especialmente las virtuales- permitieron ampliar la llegada territorial y recoger voces con mayor anclaje comunitario. Estas limitaciones no invalidan el proceso, pero sí delimitan su alcance: se trata de un insumo cualitativo, plural y situado, no de una medición representativa del universo de la sociedad civil.

Más allá de esas limitaciones, el proceso permitió identificar convergencias relevantes. Una primera refiere a la necesidad de fortalecer la articulación interinstitucional y multiactor. En casi todos los ODS apareció la percepción de que Uruguay cuenta con capacidades, experiencias, marcos normativos e iniciativas valiosas, pero que muchas veces se encuentran dispersas, poco conectadas o débilmente sistematizadas. La demanda por más coordinación no aparece como un reclamo meramente procedimental. Es señalado como una condición para mejorar la implementación: coordinar mejor para evitar duplicaciones y solapamientos, aprovechar aprendizajes, trabajar junto con el territorio, sostener políticas y traducir diagnósticos en decisiones.

Una segunda convergencia remite a la importancia de la información. Los intercambios mostraron que el país ha avanzado en producción de datos, indicadores, reportes y sistemas de monitoreo, pero también que persisten desafíos de acceso, interoperabilidad, desagregación territorial, transparencia y uso efectivo de la información en la toma de decisiones. En varios casos, los participantes señalaron que no alcanza con medir para reportar: es necesario medir para decidir, comunicar, rendir cuentas, corregir y orientar políticas. La Agenda 2030 puede contribuir en este punto si deja de ser vista únicamente como una grilla de indicadores y se convierte en una herramienta de gestión pública, aprendizaje institucional y deliberación social.

Una tercera convergencia refiere a la participación. Las intervenciones recogidas valoraron la existencia de espacios de consulta, pero también señalaron con fuerza que la participación debe tener mejores condiciones de incidencia. Esto implica fortalecer los mecanismos de devolución, asegurar información clara y oportuna, reducir asimetrías entre actores, generar formatos adecuados a los territorios y evitar que la participación quede reducida a una instancia formal. En este sentido, el proceso deja planteado un desafío para futuros ciclos: pasar de la consulta como evento puntual a la participación como práctica sostenida de gobernanza.

Una cuarta convergencia se vincula con la territorialización. Los aportes mostraron que muchos desafíos de la Agenda 2030 se expresan de manera desigual según territorio, escala y tipo de comunidad. La situación de pequeñas localidades, ruralidad dispersa, periferias urbanas, agrupamientos irregulares, cuencas, humedales, barrios, municipios y departamentos no siempre queda adecuadamente reflejada en indicadores agregados ni en políticas diseñadas desde una mirada centralizada. Por ello, una de las orientaciones más claras que deja el proceso es la necesidad de fortalecer capacidades locales, mejorar la coordinación entre niveles de gobierno y reconocer el papel de municipios, gobiernos departamentales, organizaciones territoriales, academia y actores comunitarios en la localización de los ODS.

Una quinta convergencia se expresa en el capítulo de propuestas. Allí se observa que las recomendaciones no se reducen a una lista de demandas sectoriales, configurando una agenda transversal de fortalecimiento institucional, social y productivo. En el corto plazo, predominan propuestas orientadas a destrabar capacidades existentes: mejorar coordinación, comunicar mejor la Agenda, fortalecer participación, ordenar información, transparentar incentivos, reconocer reportes de sostenibilidad, impulsar compras públicas sostenibles, mejorar sistemas de monitoreo, atender urgencias ambientales y reforzar servicios básicos. En el mediano y largo plazo, las propuestas apuntan a transformaciones

más estructurales: institucionalizar alianzas, consolidar sistemas integrados de información, desarrollar instrumentos financieros sostenibles, profundizar la transición energética, fortalecer la economía circular, formar capacidades, descentralizar conocimiento, territorializar la Agenda 2030, revisar marcos normativos y vincular el INV con una estrategia nacional de desarrollo sostenible.

En conjunto, el proceso muestra que en Uruguay existen experiencias acumuladas, capacidades institucionales, iniciativas sociales, aprendizajes territoriales y prácticas innovadoras que pueden ser reconocidas y potenciadas. Sin embargo, también muestra que uno de los principales desafíos es convertir esos acumulados en arreglos más estables, visibles, coordinados y orientados a resultados. La Agenda 2030 aparece, así, como una oportunidad para ordenar esfuerzos dispersos, pero también como una invitación a revisar los modos en que el Estado, la sociedad civil, la academia, el sector privado, el cooperativismo y los organismos de cooperación construyen problemas comunes y trabajan sobre ellos.

Por ello, el valor del presente informe trasciende su función inmediata como aporte para el INV 2026. El proceso de consulta permitió recoger aportes para el reporte nacional, pero también habilitó una conversación más amplia sobre los caminos posibles de trabajo conjunto. En este sentido, el INV no debería concebirse únicamente como un punto de llegada o como una obligación periódica de rendición de cuentas ante el sistema internacional. También puede ser entendido como un punto de partida para fortalecer vínculos, abrir agendas compartidas, identificar prioridades de cooperación y construir mecanismos de seguimiento que mantengan activa la participación de la sociedad civil más allá del momento del informe.

Esta perspectiva resulta especialmente importante en el tramo final hacia 2030. A pocos años del horizonte temporal de la Agenda, los desafíos no remiten solamente a acelerar el cumplimiento de metas específicas. Implican consolidar capacidades de gobernanza democrática del desarrollo sostenible. Ello supone sostener espacios de diálogo, mejorar la calidad de la información pública, fortalecer la participación territorial, reconocer el aporte de actores no estatales, articular recursos y generar condiciones para que las propuestas recogidas puedan traducirse en líneas de acción. La continuidad de estos espacios permitiría que el proceso no quede limitado a la elaboración del INV y que contribuya a una agenda más permanente de colaboración. Este objetivo no tiene únicamente un valor normativo, sino que es también una herramienta fundamental para fortalecer la apropiación de la Agenda y, con ello, avanzar en su cumplimiento.

En suma, este informe deja tres mensajes centrales. Primero, que la incorporación de la voz de la sociedad civil en el INV 2026 enriquece la comprensión del avance de Uruguay en la Agenda 2030, porque permite incorporar percepciones, experiencias y propuestas que no siempre aparecen en los reportes gubernamentales. Segundo, que el proceso desarrollado tuvo un alcance relevante, aunque condicionado por limitaciones de tiempo, convocatoria y representatividad, por lo que sus resultados deben leerse como un insumo cualitativo y no como una representación exhaustiva de la sociedad civil. Tercero, que la Agenda 2030 trasciende el informe y abre la posibilidad de construir caminos de trabajo conjunto, más estables y sostenidos, orientados a fortalecer la implementación de los ODS y a proyectar aprendizajes hacia una estrategia nacional de desarrollo sostenible de largo plazo.

Anexos

Anexo I. Propuestas

En este Anexo se incluyen la sistematización de propuestas de cada espacio de intercambio, organizados en tres apartados: Mesas presenciales, Mesas virtuales, Plataforma de participación ciudadana.

Mesas presenciales

ODS 6

En el plano propositivo, las mesas convergieron en la idea de que Uruguay no necesita empezar de cero, sino destrabar condiciones para avanzar. La conversación dejó la impresión de que existen diagnósticos, marcos normativos, experiencias y capacidades técnicas suficientes para identificar buena parte de los problemas; lo que falta es mayor articulación, más decisión política, mejores mecanismos de financiamiento, fortalecimiento de la participación y capacidad para traducir aprendizajes dispersos en estrategias más estables.

La propuesta más reiterada fue la de fortalecer la articulación interinstitucional y multisectorial. El avance del ODS 6 fue pensado como una tarea que no puede recaer en un solo organismo ni en un solo nivel de gobierno, sino que requiere coordinación entre Estado, sector privado, sociedad civil, academia y ámbitos parlamentarios. En esa línea, Mauro de la Vega (AUA) insistió en la necesidad de reducir la brecha de articulación entre actores y de construir esquemas donde el sector privado pueda cumplir un papel más activo en el apoyo a soluciones estratégicas. También Magdalena Preve (PNUD) subrayó que la gobernanza del agua exige acuerdos más sólidos entre actores con competencias e intereses diversos, especialmente en un contexto de tensión entre distintos usos del recurso, mientras que Leandro Valdomir (MPP) colocó el acento en la necesidad de una mejor coordinación interinstitucional y de una gestión más integrada de los recursos hídricos.

En conexión con este planteo, surgió la cuestión del financiamiento. Varias intervenciones coincidieron en que la brecha existente para avanzar en infraestructura, saneamiento y conservación no puede cerrarse únicamente con recursos públicos tradicionales. Por eso se propuso explorar formas innovadoras de financiamiento, como bonos temáticos o esquemas de participación público-privada, y sobre todo encontrar mecanismos para movilizar y alinear capital privado con metas públicas. En este punto, la idea no fue desplazar al Estado, sino asumir que el cumplimiento del ODS 6 exige ampliar la escala de recursos disponibles y orientar mejor su uso.

Otro eje fuerte de propuestas fue la jerarquización política y parlamentaria del tema. Se insistió en la necesidad de instalar de forma más sostenida el agua y el saneamiento en la agenda pública, en la agenda legislativa y en los mecanismos de seguimiento de la Agenda 2030 más allá del Poder Ejecutivo. Desde esta mirada, uno de los déficits actuales no es solo de ejecución, sino también de jerarquización institucional y de seguimiento sistemático. En ese sentido, Leandro Valdomir (MPP) subrayó el rol que pueden cumplir los parlamentos en el control político, la rendición de cuentas y el monitoreo legislativo de los ODS.

También se propuso potenciar la participación ciudadana y fortalecer los ámbitos ya existentes, como las comisiones y consejos de cuenca. Sin embargo, la conversación sugirió que no alcanza con preservar estos espacios en términos formales: es necesario dotarlos de mayores capacidades para que puedan cumplir efectivamente con sus objetivos. La participación fue entendida no solo como consulta, sino también como acceso a información, educación ambiental y construcción compartida de capacidades para intervenir en la gestión del recurso. En este punto, Magdalena Preve (PNUD) insistió especialmente en la necesidad de fortalecer la presencia de organizaciones de la sociedad civil y otros actores territoriales, mientras que Soledad Ávila (PNUD) remarcó la importancia de recuperar y sistematizar aprendizajes de experiencias previas para nutrir respuestas más ajustadas a cada contexto. Mariana Ulery (AEU), por su parte, subrayó la necesidad de mayor transparencia en la información sobre calidad del agua, así como de regulaciones más exigentes sobre los impactos de la actividad industrial en el recurso.

En relación con el saneamiento, las propuestas apuntaron a sostener estándares de saneamiento seguro, destrabar la coordinación entre organismos prestadores y evitar retrocesos hacia soluciones más precarias. Leonardo Martínez (MEVIR) puso el foco en la necesidad de no resignar estándares ni volver a respuestas insuficientes frente a las dificultades de implementación, así como en la necesidad de fortalecer la articulación interinstitucional en este asunto. En una línea convergente, Paula Suárez (URSEA) planteó la necesidad urgente de avanzar hacia planes de seguridad del sistema de saneamiento en todo el país.

Por último, la conversación dejó planteada la necesidad de profundizar la información, la concientización, la educación y la formación profesional en torno al agua y al saneamiento. Anabela Aldaz (CCSUY) propuso generar instrumentos concretos —como programas, plataformas, guías o manuales— que permitan a las empresas incorporar mejores prácticas de uso eficiente del agua. En términos generales, varias intervenciones coincidieron en que el cumplimiento del ODS 6 también requiere fortalecer la educación ciudadana y la incorporación de buenas prácticas en sectores productivos, especialmente en aquellos con mayor incidencia sobre los usos del agua.

En conjunto, las propuestas recogidas en ambas mesas permiten identificar algunas orientaciones claras para avanzar en el cumplimiento del ODS 6 en Uruguay: mejorar la articulación interinstitucional; pensar creativamente en nuevas fuentes o mecanismos de financiamiento; fortalecer la gobernanza multisectorial y la participación social en los procesos de decisión y gestión; ampliar y refinar los instrumentos de monitoreo e información pública; fortalecer el sistema de saneamiento, promoviendo planes de saneamiento seguro, adecuados a cada territorio; e instalar con mayor firmeza el tema en la agenda pública, política y presupuestal.

ODS 7

El intercambio permitió pensar en una agenda de trabajo conjunta que trascienda la actual matriz eléctrica renovable, enfocándose en la descarbonización de la demanda y la modernización de la infraestructura industrial.

La Intendencia de Montevideo (IM) propuso profundizar la articulación con todos los actores de la política energética, y valoró que los gobiernos departamentales tengan un rol más activo en la gestión de la movilidad urbana y el alumbrado inteligente. Ana Bravo sugirió la creación de un marco de cooperación técnica permanente entre la academia y las intendencias para avanzar en soluciones en el marco de los ODS. Una propuesta específica fue el escalamiento de proyectos de reciclaje como los Eco Centros o la reconversión de aceite usado.

La representante de UTE aclaró explícitamente que su rol en la mesa era identificar desafíos y no presentar un pliego de propuestas formales. No obstante, señaló que el asunto central está en la profundización de la matriz renovable y la defensa de la integralidad del sistema. La institución impulsa la expansión de la energía solar fotovoltaica con nuevos parques en Punta del Tigre y Melo para complementar la eólica e hidráulica. Una postura central es la exigencia de una planificación integral, advirtiendo que tecnologías como la movilidad eléctrica solo son beneficiosas si se garantiza que la generación sea renovable y se gestione el destino final de las baterías. Asimismo, se planteó una preocupación crítica respecto a normativas (como el decreto de 2024) que permiten a grandes consumidores contratar energía fuera de UTE.

La propuesta central de MEVIR radica en que la eficiencia energética debe ser parte de un abordaje integral del hábitat digno, que incluya necesariamente el acceso a la energía, al agua y la vivienda segura. Verónica Helbling subrayó que el éxito de estas políticas depende de una articulación interinstitucional proactiva, evitando que los técnicos trabajen aislados. MEVIR propone fortalecer la capacitación y formación de los usuarios a través de talleres obligatorios, bajo la premisa de lograr un usuario eficiente. A estas capacitaciones que hoy son en eficiencia energética en la vivienda, arbolado y áreas verdes, compostaje, se propone incorporar otras temáticas como cambio climático, emisiones, entre otras. Además, planteó como meta prioritaria para el quinquenio alcanzar a los asentamientos irregulares rurales y parajes aislados (como localidad de Clara en Tacuarembó), asegurando que el acceso a la energía llegue a los estratos más bajos de ingresos de manera equitativa.

En ANCAP, la estrategia se enfoca en gestionar la transición del modelo de refinación tradicional hacia la sostenibilidad garantizando la viabilidad económica de la empresa. Sofía Ruiz y Sebastián Torrado propusieron que el Estado lidere con el ejemplo mediante el recambio de la flota oficial por vehículos eléctricos o híbridos, además de asegurar que el impuesto al carbono se destine específicamente a financiar proyectos de transición energética. Asimismo, destacaron la necesidad de mejorar la focalización del subsidio al supergás para los hogares vulnerables y de implementar esquemas de incentivos y acompañamiento que faciliten al usuario final la adopción de alternativas renovables de manera sencilla.

Desde la Universidad Tecnológica (UTEC), Álvaro Pena propuso el desarrollo de ecosistemas de innovación en todo el territorio que permitan una distribución equitativa del desarrollo y una articulación real entre los actores públicos y privados. Se sugirió que la formación técnica e institucional (incluyendo a organismos como Inefop) debe planificarse con anticipación, identificando los nuevos roles y "empleos verdes" que demandarán transiciones como la del hidrógeno verde, para evitar que la población solo "vea pasar" el progreso tecnológico sin participar en él. La postura académica subraya que no existe industria o infraestructura sostenible sin talento humano descentralizado, advirtiendo que la brecha educativa entre Montevideo y el interior es un obstáculo crítico.

Desde CEMPRE, Marisa Cirillo y Emiliano Sánchez centraron sus propuestas en el fortalecimiento de la cadena de valor del reciclaje, buscando pasar de iniciativas aisladas a una gestión sostenible plenamente integrada en la industria. Se planteó la necesidad de desarrollar una herramienta de inteligencia de datos que unifique la

información sobre los flujos de materiales y sus precios, superando la actual fragmentación de los indicadores nacionales. Asimismo, la organización propuso impulsar incentivos económicos y regulatorios que motiven a las empresas a demandar materia prima reciclada en lugar de virgen, complementado con el mantenimiento de programas de capacitación descentralizada que conecten los desafíos de la industria con la labor de las cooperativas de clasificadores en el interior del país.

Desde el Colegio de Contadores, Silvia Leal planteó que el desafío fundamental del Estado para avanzar en los ODS es la articulación y la unión de esfuerzos entre las distintas instituciones para evitar la duplicación de tareas. Señaló que la falta de comunicación suele provocar que los organismos "tiren de la cuerda" en direcciones opuestas, por lo que su propuesta principal consistió en fortalecer estos espacios de intercambio multisectorial para enriquecer la mirada técnica de cada entidad.

ODS 9

Las propuestas emergentes de ambas mesas se organizan en dos categorías: medidas urgentes (o a corto plazo), entendidas como acciones con capacidad de impacto inmediato o que atienden bloqueos actuales, y medidas de mediano y largo plazo, que requieren diseño institucional, normativo o presupuestal.

Un primer conjunto de propuestas apunta a resolver los déficits de visibilidad y medición. Daniel Carranza (OPP), Alejandro Martínez y Jimena Souteras (Ceibal) coincidieron en la necesidad de mapear, medir y visibilizar la innovación no contabilizada: la producida por cooperativas, sindicatos, sociedad civil e instituciones públicas cuya operación cotidiana genera innovación que no figura en ningún indicador ODS. Carranza (OPP/ DATA Uruguay) observó con preocupación el debilitamiento actual de AGESIC, identificándola como un motor de innovación pública transversal cuya pérdida de capacidad institucional tiene impacto directo en múltiples dimensiones del ODS 9 y que debería fortalecerse con carácter urgente.

Un segundo conjunto aborda la integración de los ODS en la gestión organizacional. Souteras y Sofía Ruiz (ANCAP) propusieron incorporar los ODS en las reuniones gerenciales y planes estratégicos ya existentes, eliminando estructuras de reporte paralelas que generan duplicidades y refuerzan la percepción de carga adicional. Souteras profundizó esa propuesta, planteando la fusión de la memoria institucional con el reporte de sostenibilidad como práctica de eficiencia: Ceibal está iniciando esa transición como experiencia piloto replicable.

Finalmente, Alejandro Martínez (Ceibal) y Álvaro Pena (UTEC) propusieron instaurar programas de capacitación de alto nivel en innovación, sostenibilidad y ODS para tomadores de decisión —directivos, jefes y legisladores—, señalando que eso no puede depender del voluntarismo individual. Complementariamente, Alejandra Reyes (DNE/MIEM) y Pena identificaron la necesidad urgente de incorporar a universidades del interior, especialmente la UTEC, a los grupos de investigación en baterías de litio y economía circular, hoy concentrados en Montevideo, evitando así reproducir la centralización del conocimiento que ambos identificaron como obstáculo estructural.

En materia de política industrial y apoyo a pymes, Juan Opertti (CZFUY) propuso implementar una figura de empresa madrina (o, en sus palabras, el rol de padrino) entendiendo esta como un modo de acompañamiento desde las grandes corporaciones que ya incorporaron los ODS a pymes proveedoras en ese proceso, con reconocimiento fiscal a través de la COMAP como innovación en la cadena de suministro. Pía Alonso (ONUDI) propuso ampliar y diversificar el instrumento REIF hacia otros rubros tecnológicos, replicando el modelo de

cofinanciamiento con banca privada que demostró su viabilidad: menos de 6 millones de fondos concesionales movilizaron 30 millones de inversión privada.

Sobre propuestas relativas a la información e indicadores, Matilde Cánepa (IM) y Jimena Souteras (Ceibal) propusieron construir un sistema articulado de indicadores entre actores nacionales, subnacionales e institucionales, evitando la multiplicación de sistemas paralelos que consume recursos sin generar información integrada. En esa misma línea, Marisa Cirillo (CEMPRE) y Alejandra Reyes (DNE/MIEM) propusieron desarrollar un sistema de inteligencia de datos sobre flujos de materiales reciclados, de modo que la industria pueda demandar materia prima secundaria con la misma información con que hoy accede a la virgen. Cirillo propuso además fortalecer la cadena de valor del reciclaje como política industrial integrada, reemplazando la lógica de gestión de residuos por una lógica de gestión de materiales con segunda vida, y subrayó que eso requiere no solo datos sino también incentivos económicos y regulatorios que permitan pasar de experiencias piloto a escala industrial.

En materia de coordinación institucional, Souteras (Ceibal) y Pena (UTEC) plantearon como una necesidad consolidar la coordinación de la Agencia de Innovación bajo Presidencia para reducir la dispersión entre agencias y articular el PENTI con las estrategias sectoriales. Carranza (OPP/ DATA Uruguay) advirtió sobre la necesidad de rediseñar los incentivos a la innovación con mayor sofisticación estructural, superando la lógica de startups y pilotos para orientarse a cambios institucionales de fondo.

Referido a formación y territorio, Carranza (OPP/ DATA Uruguay) y Pena (UTEC) propusieron aumentar la tasa de acceso a educación terciaria como base estructural del talento, señalando que Uruguay llega al tercio de jóvenes mientras Chile ronda el 70%. Martínez (Ceibal) propuso ampliar el alcance de Ceibal más allá del ciclo básico, aprovechando la infraestructura ya desplegada para potenciar el desarrollo, la innovación educativa y el arraigo de la población en su territorio.

Por último, en materia de transición y coherencia del Estado, Sebastián Torrado y Sofía Ruiz (ANCAP) y Pena (UTEC) propusieron que el Estado dé el ejemplo reconvirtiendo su propia flota pública como señal de política industrial coherente. Ruiz (ANCAP) y Reyes (DNE/MIEM) propusieron revisar el destino del impuesto al carbono —fracción del IMESI creada con el objetivo de financiar proyectos de transición pero aplicada por el MEF sin ese destino específico— para orientarlo efectivamente a la reconversión industrial. Pena (UTEC) propuso elaborar un plan de desarrollo país con verticales estratégicas de largo plazo —20 a 30 años— que articule energía, industria, formación y territorio como condición de base para que el resto de las propuestas tengan un marco coherente donde aterrizar.

ODS 11

El apartado de propuestas no dejó un paquete cerrado de medidas puntuales, pero sí una orientación bastante nítida y consistente sobre posibles líneas de fortalecimiento del cumplimiento del ODS 11 en Uruguay. Como síntesis de las dos mesas, pueden identificarse algunos lineamientos que aporten a la construcción de una hoja de ruta: comunicar mejor la agenda, territorializar más las políticas, fortalecer la coordinación interinstitucional, producir información más útil para decidir, construir una institucionalidad más sensible a la toma de decisiones basada en información y datos, así como fortalecer los instrumentos de participación sustantiva de la sociedad y colocar en el centro del debate las condiciones concretas de acceso al hábitat, los servicios y la vida cotidiana. En ese sentido, el debate dejó como propuesta de fondo pasar de una lógica centrada en el reporte a una lógica más sustantiva de implementación, articulación y uso de la Agenda 2030 como herramienta de orientación de políticas.

Un primer núcleo propositivo, más visible en la mesa de la mañana pero compartido también por el resto del intercambio, apuntó a mejorar la difusión pública y la apropiación social de los ODS. Ana Inés López (INE) planteó con claridad la pregunta respecto de cuánto de esta agenda está realmente presente en “el común de la gente”, sugiriendo la necesidad de una política de comunicación más efectiva, menos técnica y más conectada con problemas concretos. En la misma línea, Mauricio López (Ministerio de Ambiente) propuso repensar los formatos de participación para que dejen huella en la resolución de problemas reales y no se agoten en consultas esporádicas, mientras Cristina Sienra (MEVIR) subrayó que, sobre todo en localidades pequeñas o aisladas, participar exige dispositivos adecuados a las condiciones reales de la población, aprovechando herramientas accesibles como el celular, WhatsApp o internet. Paola Arjona (IM) reforzó este eje al destacar la necesidad de fortalecer a los municipios como escala estatal más cercana a la ciudadanía, mientras que Fabiana Castillo (IM) resaltó la necesidad de crear instancias más estables de articulación entre organismos, no limitadas al momento del informe voluntario, planteando la relevancia de que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) lidere ese proceso.

Un segundo bloque de propuestas se concentró en la necesidad de mejorar la base de información y su articulación con la toma de decisiones. Virginia Pedemonte (DINOT-MVOT) sintetizó esta preocupación en una idea sencilla pero central: lo que no se mide no se puede mejorar. En la misma línea, varias intervenciones empujaron la necesidad de contar con datos confiables, comparables y territorializados, capaces de identificar necesidades, monitorear avances y orientar mejor la acción pública. Esta línea se enlazó con propuestas de innovación institucional: Paola Arjona (IM) recuperó la posibilidad de pensar laboratorios de innovación pública como espacios de cocreación y aceleración de los ODS, mientras que Fabiana Castillo (IM) insistió en que la coordinación debería sostenerse en el tiempo para construir indicadores consistentes y útiles más allá del ejercicio puntual de reporte. En conjunto, la mesa de la mañana dejó como propuesta una arquitectura más permanente de producción de información, coordinación y aprendizaje entre niveles y organismos.

En la mesa de la tarde, las propuestas convergieron con más fuerza en torno al acceso a la vivienda adecuada como prioridad urgente. Alberto Leira (SAU) lo planteó de forma explícita en la ronda final, al sostener que el esfuerzo interinstitucional debería concentrarse en reducir la vivienda precaria y ampliar el acceso a la vivienda. Pero la discusión no redujo este punto a una respuesta habitacional en sentido estrecho. Victoria Morena (MEVIR) insistió en que la pregunta central no debe ser únicamente cómo proveer infraestructura, sino qué entendemos por vivienda adecuada y para quién, debiendo también generarse las condiciones para que las personas puedan sustentarse en los lugares donde residirán. Resaltó, asimismo, que es fundamental incluir en ese proceso la voz de las poblaciones involucradas, evitando imponer soluciones diseñadas desde una mirada excesivamente urbana o técnica. Braulio Cantera (IICA) agregó que esa vivienda debería pensarse también con materiales sostenibles, apropiables por la población local y articulados con una noción más amplia de vida digna. A su vez, Vidimara Nalotto (MEVIR) propuso priorizar los lugares donde ya existe infraestructura, reparar o recuperar viviendas deterioradas y evitar una expansión urbana que siga reproduciendo periferias frágiles y costosas en términos del acceso a servicios.

Un tercer eje de propuestas amplió el horizonte del ODS 11 hacia una visión más integrada del territorio y de la calidad de vida. Andrés Passadore (MEVIR) destacó la necesidad de visibilizar problemáticas poco reconocidas, como los agrupamientos irregulares rurales, y de generar espacios de participación con capacidad real de incidir; esa línea quedó recogida en el cierre de la mesa como parte de una propuesta más general de territorializar mejor las políticas y llegar a poblaciones que siguen lejos de los puntos efectivos de acceso a derechos. Braulio Cantera (IICA) propuso incorporar a la planificación de las ciudades funciones de aprovisionamiento y atención de necesidades bajo una lógica de proximidad —circuitos cortos de alimentos, mercados locales, infraestructura verde, ciudades de diez minutos—, mientras que Soledad Ávila (PNUD) subrayó la importancia de pensar ciudades más verdes e inclusivas, donde la vida urbana no implique perder el vínculo con la naturaleza. Rosario Casanova (DINOT-MVOT), por su parte, resaltó que resulta clave visibilizar

mejor el vínculo entre lo que las instituciones ya hacen y las metas del ODS 11, porque muchas veces ese enganche existe sin estar suficientemente explicitado.

Como síntesis, el bloque de propuestas deja una agenda bastante coherente: hacer del ODS 11 una herramienta más conocida, más territorial, mejor medida, más participativa y más útil para decidir. La discusión no se inclinó por una única gran política, sino por una combinación de prioridades, incluyendo la importancia de mejorar la comunicación de la agenda, la participación de las comunidades y la coordinación y articulación interinstitucional. Se resaltó, asimismo, la importancia de aprovechar mejor lo existente, fortalecer capacidades locales, producir información relevante y colocar en el centro el acceso efectivo a vivienda, servicios, naturaleza, movilidad y bienestar en clave de dignidad. En ese marco, la principal recomendación transversal que surge de ambas mesas es que el ODS 11 debería servir menos como una grilla de reporte y más como una estructura común para leer, ordenar y potenciar prácticas ya existentes, corrigiendo al mismo tiempo sus fragmentaciones y vacíos, aportando así a la aproximación del Uruguay al cumplimiento de las metas planteadas por el Objetivo y, como consecuencia de ello, a la mejora de la calidad de vida de su población.

ODS 17

Las propuestas surgidas combinaron dos movimientos: por un lado, fortalecer alianzas e instrumentos ya existentes; por otro, crear espacios más estables de coordinación —como mesas sectoriales, plataformas país o acuerdos interinstitucionales— que permitan ordenar mejor actores, recursos y prioridades.

En ese marco, una de las orientaciones más claras fue institucionalizar mejor la coordinación entre actores. Yanina Aniotz (MEVIR) planteó avanzar en acuerdos formales entre instituciones, clarificar responsabilidades y ordenar la implementación en distintos niveles, de modo que la articulación no dependa de impulsos coyunturales o de vínculos personales. En esa misma línea, Martín Batalla (MEVIR) insistió en que estas articulaciones deben sostenerse más allá de las administraciones y apoyarse también en las capacidades reales de los equipos técnicos.

En una escala más estratégica, Paloma Morazo (PNUD) planteó avanzar hacia una lógica de metas compartidas a nivel de Estado. Su planteo fue que, aun manteniendo presupuestos y mandatos propios, las instituciones puedan asignar parte de sus recursos y capacidades a objetivos comunes definidos de manera explícita. En esa línea, los planes nacionales y los espacios participativos fueron señalados como oportunidades para construir visiones más sostenidas y orientar mejor los esfuerzos de distintos organismos hacia prioridades compartidas.

Otra propuesta apuntó a ordenar mejor la información disponible y hacerla más accesible y utilizable. Martín Alvez (MRREE) retomó experiencias de otros países y planteó que Uruguay podría avanzar hacia una ventanilla única o portal integrador, capaz de concentrar instrumentos, apoyos e información relevante, siempre que los distintos actores efectivamente alimenten ese espacio. En una línea convergente, Elizabeth Begosian (MRREE) y Flavia Fernández (CCEAU) advirtieron que el problema no es solo la falta de información, sino también su dispersión y el escaso uso de herramientas ya existentes, como el visualizador. A esto se sumó el planteo de Viviana Rumbo (PIT-CNT) quien subrayó la importancia de ampliar la difusión pública de los ODS, para que esa información no quede encerrada en ámbitos especializados y pueda ser apropiada por otros actores de la sociedad. En conjunto, la propuesta apunta a construir un sistema más integrado, visible y útil, donde distintas instituciones puedan volcar información de manera continua y donde actores diversos sepan mejor qué existe, dónde buscarlo y cómo utilizarlo.

También surgió con fuerza la necesidad de mejorar las condiciones para que las alianzas se traduzcan efectivamente en resultados. En este plano, Inés Tiscornia (ORT) subrayó que muchas innovaciones no logran aplicarse porque chocan con normas o procedimientos que no se actualizan al mismo ritmo. Como referencia, recuperó el caso de BIOVALOR para mostrar que la coordinación entre organismos logró traducirse en habilitaciones normativas concretas, que en ese caso, logró incorporar el compostaje como enmienda orgánica. En dirección complementaria, Flavia Fernández (CCEAU) planteó que la eficacia de los instrumentos o fondos depende de que exista acuerdo claro y compartido sobre cuál es el problema a resolver. Desde esta perspectiva, las propuestas apuntan tanto a revisar marcos normativos y administrativos como a construir diagnósticos compartidos que permitan ajustar mejor las herramientas disponibles a necesidades reales.

Otro eje propositivo estuvo orientado a fortalecer espacios más estables de articulación estratégica. En este punto, Martina Lejtregger (ONU) formuló una propuesta operativa concreta al sugerir que Uruguay explore, en modelos de *country platforms* o plataformas país, adoptados en países vecinos. Según su planteo, se trataría de una mesa coordinada por el Estado que reúna a banca privada, banca de desarrollo y cooperantes alrededor de objetivos compartidos, con el fin de ordenar mejor recursos y aliados, evitar superposiciones y focalizar apoyos y alianzas en áreas estratégicas. En una escala diferente pero convergente, Flavia Fernandez (CCEAU) propuso fortalecer mesas sectoriales - espacios estables de articulación que permitan compartir información, identificar brechas y construir prioridades comunes- y hojas de ruta por cadena o sectores, de modo de acordar prioridades comunes antes de seleccionar instrumentos o soluciones.

En una dirección complementaria, varias intervenciones propusieron construir instrumentos más ajustados al contexto uruguayo. Flavia Fernández (CCEAU) insistió en que no conviene partir directamente de herramientas ya disponibles o de soluciones importadas, sino identificar primero la brecha concreta que se busca resolver y acordar ese diagnóstico entre los actores involucrados. Recién a partir de ahí tendría sentido adaptar fondos, estándares o instrumentos al problema en cuestión. En la misma línea, Cecilia Baillo (MEVIR) dejó planteada la necesidad de profundizar la llegada territorial de las alianzas y de equilibrar capacidades operativas entre instituciones para sostener la interinstitucionalidad en el interior del país.

Otra propuesta fue fortalecer actores colectivos capaces de sostener alianzas más allá de proyectos puntuales. Ana Laura Barrios (UTEC) planteó como orientación de mediano plazo consolidar la Red de Universidades por la Sostenibilidad del Uruguay (UNIS) como espacio estable de articulación entre universidades, y avanzar en su integración a redes regionales como ARIUSA para ampliar intercambios y posibilidades de cooperación con organismos nacionales e internacionales.

Finalmente, también se propuso aprovechar de manera más estratégica el posicionamiento internacional de Uruguay. En este punto, Paloma Morazo (PNUD) planteó que, aún en un contexto de menor elegibilidad para la ayuda tradicional, el país sigue despertando interés como socio confiable, caso piloto y espacio de aprendizaje. A partir de ello, la propuesta concreta es desarrollar una estrategia más activa para traducir ese interés en cooperación técnica, pequeños fondos, experiencias piloto e intercambios, sin depender exclusivamente de los mecanismos tradicionales de financiamiento. En esta línea, sus aportes sugieren fortalecer modalidades como la cooperación Sur-Sur y triangular.

En conjunto, las propuestas convergen en una misma dirección: fortalecer la capacidad del Estado y de los distintos actores para coordinar mejor información, recursos, regulación y prioridades en torno a objetivos comunes. Más que multiplicar iniciativas aisladas, lo que se plantea es construir arreglos más estables, legibles y eficaces, capaces de sostener alianzas en el tiempo y traducirlas en resultados concretos.

Mesas virtuales

Propuestas (Mesa virtual I)

En la ronda final de propuestas, los participantes realizaron planteos concretos que abarcaron desde medidas urgentes hasta objetivos de mediano plazo, intentando traducir sus experiencias y las valoraciones en acciones transformadoras. Las propuestas pueden agruparse en torno a cuatro ejes principales.

Medidas Urgentes

Existe un amplio consenso en que, para avanzar, se requiere una base sólida de comunicación y diálogo territorial. Las acciones más inmediatas planteadas se centran en:

- *Campaña Nacional de Comunicación y Visibilidad de los ODS*: Surge como la base para cualquier otra acción. Se propone implementar una campaña que acerque los ODS a la ciudadanía, explicando de manera clara cómo las acciones cotidianas (como el cambio a luces LED) y las políticas públicas (obras locales) contribuyen a metas concretas. Esta iniciativa busca generar una mayor adhesión y compromiso social.
- *Fortalecer el Diálogo Local*: Tayna Larzábal (Centro de Navegación) propuso consolidar espacios de diálogo como la comisión "Puerto-Ciudad". El objetivo es atender las necesidades de las comunidades aledañas a grandes infraestructuras, integrando desarrollo económico y bienestar social como una acción concreta y ejemplar de articulación (ODS 11 y 17).

Propuestas de Mediano Plazo

A partir de esa base, los participantes delinearon propuestas más estructurales que requieren un trabajo coordinado y pueden agruparse en torno a dos ejes principales.

1. Articulación y coordinación interinstitucional

- *Diálogo Nacional-Local*: Daiana Ferraro (Intendencia de Montevideo) propuso profundizar el diálogo entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales para que la agenda de los ODS pueda "bajar" efectivamente al territorio, trabajando codo a codo con quienes son el principal vehículo para llegar a la población.
- *Mesas de Trabajo Permanentes*: En la misma línea, Sabrina Ademar (Omic) abogó por crear mesas de trabajo estables entre ministerios, intendencias, academia y organizaciones de la sociedad civil para abordar políticas públicas específicas.
- *Transparencia y Gestión de Conflictos de Interés*: Como parte fundamental de esta articulación, la organización OMIS propuso definir criterios claros y transparentes para la participación en estas mesas de política pública. Esto implica incorporar un análisis de impacto en salud y una gestión explícita de los conflictos de interés, especialmente en áreas sensibles, para garantizar que las políticas respondan al interés público.

2. Incentivos y simplificación para el sector productivo

- *Simplificación de Certificaciones y Articulación de Beneficios*: Santiago Arturo (Unión de Exportadores) propuso simplificar los sistemas de certificación para no saturar a las empresas, que enfrentan múltiples auditorías. Sugirió crear un "paraguas" de incentivos que articule certificaciones de sostenibilidad (como el Sello Gestión Sostenible (UEU-LATU)) con beneficios concretos de otros organismos (ANII cubriendo parte de los salarios, BROU con mayor puntaje para créditos, Uruguay

XXI para Marca País). Señaló que ya existen experiencias exitosas que podrían ampliarse y articularse mejor para hacer más atractivo el camino hacia la sostenibilidad, especialmente para las PyMEs.

- *Instrumentos Financieros Sostenibles*: Desde la Intendencia de Montevideo también se planteó la necesidad de generar incentivos de flexibilidad crediticia para proyectos públicos y privados que tengan los ODS entre sus prioridades. En sintonía, Santiago Arturo propuso desarrollar e impulsar "créditos sostenibles" en el sistema financiero uruguayo, similares a los Sustainability-Linked Loans europeos, donde las empresas obtengan mejores condiciones crediticias a cambio de cumplir metas de sostenibilidad pre-acordadas.
- *Incluir la Dimensión Alimentaria en el Ordenamiento Territorial*: Sabrina Ademar (OMIS) propuso incorporar de manera estructural la planificación de entornos alimentarios saludables en los planes de ordenamiento territorial. Esto implicaría un trabajo coordinado entre salud, planeamiento urbano y desarrollo social para garantizar el acceso equitativo a alimentos saludables.
- *Vincular agendas y construir alianzas*: Daiana Ferraro (IM) sintetizó la clave para avanzar en un contexto desafiante: conectar la agenda de los ODS con otras agendas, como la de financiamiento sostenible, y territorializar el trabajo en conjunto con gobiernos departamentales y municipios.
- *Cada contribución suma*: Tayna Larzábal (Centro de Navegación) recordó que no se trata de resolver los problemas de forma absoluta e inmediata. Es fundamental comunicar que cada paso, cada iniciativa y cada proyecto que se alinea con los ODS, por pequeño que sea, contribuye a la gran meta global.
- *Prepararse para el futuro de la agenda*: Intervinientes como Martín Rodríguez (LATU) y también el punto focal Enrico Benedetti (OPP) señalaron que ante la proximidad del 2030, se hace necesario empezar a pensar, desde ya, en el legado de estos 15 años y en la construcción de la nueva agenda post-2030, aprendiendo de los éxitos y fracasos, y manteniendo el "trasfondo filosófico" de buscar un mundo más sostenible, a pesar del contexto internacional que desafía al multilateralismo.

Propuestas (Mesa virtual II)

Medidas Urgentes (Corto Plazo)

- *Garantizar la participación vinculante en temas ambientales*: Solana González (RETEMA) propuso como medida urgente insistir en que los espacios de participación, como las mesas de desarrollo y las comisiones de cuenca, tengan carácter vinculante, especialmente en materia ambiental. Señaló que Uruguay cuenta con capacidades y políticas desplegadas en todo el territorio que deben ser aprovechadas, y llamó a defender y abrir los espacios públicos (UTE, OSE, universidad) a la sociedad civil.
- *Trabajo prioritario con jóvenes y niños*: Rossana Santomauro (UTEC) identificó como urgente y prioritario trabajar con jóvenes y niños para asegurar su llegada a la educación superior, evitando que queden atrás en un contexto de baja natalidad. Propuso generar una red entre los participantes de la mesa para coordinar acciones territoriales y compartir información sobre las contribuciones de cada institución a los ODS.
- *Metas obligatorias de género en la transición energética*: Josefina Marmisolle (AUME) propuso como medida urgente crear programas nacionales que incorporen metas obligatorias de género en la transición energética. Esto incluye reportes periódicos de brechas salariales y la priorización de capacitación técnica para mujeres en áreas STEM.

Propuestas de Mediano Plazo

A partir de esa base, los participantes delinearon propuestas más estructurales que requieren un trabajo sostenido en el tiempo y pueden agruparse en torno a los siguientes ejes.

1. Participación ciudadana vinculante y transparencia

- *Transparencia y participación temprana en grandes proyectos:* Gonzalo Claramunt (UTE), a título personal, propuso que los procesos de grandes proyectos sean más transparentes e incluyan la participación temprana de la población potencialmente afectada. Señaló que el temor a que los proyectos se traben suele terminar siendo la causa de que eso efectivamente suceda, y que la participación temprana ayuda a evitar resistencias y cambios de rumbo.
- *Articulación de organizaciones afines:* Claramunt coincidió además en la necesidad de aunar esfuerzos y articular entre las distintas organizaciones y sectores que hoy trabajan en la misma dirección pero de forma atomizada, para multiplicar el impacto de sus acciones.

2. Educación, juventud y descentralización

- *UTEC como agente conector en el territorio:* Rossana Santomauro (UTEC) destacó que, al estar distribuida en todo el territorio, UTEC puede actuar como agente conector entre intendencias y actores locales. Planteó que es fundamental descentralizar capacidades para evitar la concentración en Montevideo y el área metropolitana.
- *Registro colaborativo de contribuciones a los ODS:* Como propuesta concreta, Santomauro planteó generar un registro institucional donde cada organización participante pueda dejar por escrito sus contribuciones actuales y planificadas a los ODS. El objetivo es identificar iniciativas que puedan trabajarse en conjunto de forma articulada, potenciando recursos y evitando duplicaciones.

3. Equidad de género en sectores estratégicos

- *Meta de participación femenina en energía:* Josefina Marmisolle (AUME) propuso como meta de mediano plazo alcanzar un cuarenta por ciento de participación de mujeres en posiciones técnicas y de liderazgo en el sector energético. Esto incluye directorios, gerencias técnicas y proyectos estratégicos de investigación y desarrollo, consolidando una transición energética con perspectiva de género.
- *Articular para no atomizar:* Gonzalo Claramunt (UTE) dejó un mensaje clave sobre la necesidad de superar la fragmentación, sumando esfuerzos entre quienes comparten objetivos comunes para construir una agenda más sólida y con mayor incidencia real. Rossana Santomauro (UTEC) cerró con un llamado concreto a la acción, proponiendo que todos los participantes de la mesa conformen una red para trabajar de forma articulada en los desafíos territoriales. El objetivo es aprovechar las capacidades desplegadas en el interior del país, compartir información y asegurar que nadie quede atrás en el acceso a la educación y el desarrollo.

Propuestas (Mesa virtual III)

En la ronda final de propuestas, los participantes realizaron planteos concretos que abarcaron desde medidas urgentes hasta objetivos de mediano plazo. Las propuestas pueden agruparse en torno a cuatro ejes principales.

Medidas Urgentes (Corto Plazo)

- *Declarar el delito ambiental con sanciones significativas y restitutivas:* María Forte (Ecofeminismo Río Negro) propuso que las multas por daño ambiental sean lo suficientemente altas como para que las empresas no las consideren un costo más, y que además incluyan la restitución del daño causado. Ejemplificó la realidad actual, recordando que *'Cuando UPM volcó soda cáustica, se le cobraron 40.000 pesos, un vuelto. Que la multa duela, y que tengan que parar la planta hasta que los técnicos constaten.'*
 - *Revisar el sistema de audiencias públicas:* Fernando Niggemeyer (Sauce de Portezuelo) propuso revisar el formato de las audiencias públicas para eliminar la inequidad entre la ciudadanía y las empresas, que ejemplificó señalando que *'Estar sentado 3 horas esperando que te toque hablar te desconcentra. Hay condiciones que no son justas.'* En ese sentido, Isabel Bortagaray (Udelar- aunque participó a título personal), agregó que es importante revisar el tema de la asimetría en la participación de los distintos actores, en términos de los recursos con los que cuentan, incluyendo la información, y en lo que respecta al peso/incidencia de su participación en las decisiones (no sólo en las audiencias, sino en general de los mecanismos de participación).
- *Veda de transformación de uso de suelo:* Agustina Melotto (UDAC) propuso como medida urgente decretar una veda de transformación de uso de suelo a nivel país hasta que se aprueben los planes de ordenamiento territorial de las regiones, microrregiones y cuencas, que en muchos casos aún no existen.
- *Formación ambiental para tomadores de decisiones:* Déborah Díaz (Naturalmente Piriápolis) propuso implementar planes de educación ambiental para los tomadores de decisiones, ya que *'parece que no pasaron por la escuela'*.

Propuestas de Mediano Plazo

- *Participación ciudadana vinculante:* Varios participantes coincidieron en que los espacios de participación deben ser vinculantes y no meramente consultivos. Agustina Melotto (UDAC) propuso que la participación ciudadana sea coordinada por la academia como mediadora neutral, y que incluya instancias de diálogo con ida y vuelta, no sólo exposiciones unidireccionales.
- *Sistema de información accesible, riguroso e interoperable:* Isabel Bortagaray (Udelar- aunque participó a título personal) señaló la necesidad de avanzar en la construcción de sistemas de información ya que la información respecto a los avances/desafíos o retrocesos sustantivos del desarrollo sustentable está muy fragmentada a nivel de los ámbitos de toma de decisión y a nivel de las problemáticas.
- *Inversión del peso de la carga probatoria:* Agustina Melotto (UDAC) propuso que la investigación técnica no recaiga ni en el denunciante ni en la empresa, sino en el Estado, que debería licitar evaluaciones de impacto ambiental independientes para cada proyecto.
- *Sistema efectivo de denuncias ambientales:* La organización UDAC planteó la necesidad de construir un sistema de denuncias que no solo registre, sino que responda efectivamente y garantice la recuperación ambiental.
- *Restitución del daño ambiental:* María Forte insistió en que las multas deben ser restituidas: *'Si te deforestan un monte, el ministerio cobró la multa y se fue con la plata, y los arbolitos siguieron sin estar. Tienen que restituir lo que rompieron.'*
- *Avanzar en los planes de ordenamiento territorial:* Agustina Melotto (UDAC) y Enrique Ceno (Medioambiente La Capuera) coincidieron en la necesidad de aprobar los planes

de ordenamiento territorial ya elaborados y planificar el abordaje de aquellos que aún no están construidos, con participación ciudadana desde el inicio del proceso, no solo al final.

- *Retomar el Plan Ambiental Nacional 2018*: Enrique Cenoz propuso retomar los objetivos del Plan Ambiental Nacional de 2018, que contó con trabajo académico y participación ciudadana, así como avanzar en el plan agroecológico.
- *Fortalecer los municipios como espacios de participación*: Enrique Cenoz propuso aprovechar la ley 19.272 de 2014, que otorga a los municipios competencias en participación ciudadana y desarrollo sostenible, para generar un trabajo conjunto entre lo político y lo civil que permita transmitir las inquietudes territoriales hacia arriba.
- *Priorizar actividades que sostengan la vida*: Victoria D'Onofrio (Humedal Tesoro Natural) propuso priorizar la agroecología, las huertas comunitarias, la plantación de flora nativa, el ecoturismo y la educación ambiental como ejes de las políticas públicas.
- *Coherencia entre normativa y decisiones*: Victoria D'Onofrio (Humedal Tesoro Natural) y Jimena Del Pino (Espátulas Rosadas) propusieron que haya coherencia entre la normativa vigente y las decisiones de los gobernantes.
- *Fortalecer la comunicación interministerial*: Jimena Del Pino señaló la necesidad de mejorar la comunicación entre los ministerios, ya que '*las personas que toman decisiones no se comunican entre ellos o no se entienden entre ellos, y si ya ahí no hay comunicación, imposible que surja para abajo*'. Esta propuesta también fue acompañada por Victoria D'Onofrio (Humedal Tesoro Natural) y Jimena Del Pino (Espátulas Rosadas)
- *Exigencia de que los tomadores de decisiones conozcan las propuestas ciudadanas*: Jimena Del Pino propuso que sea una exigencia que los tomadores de decisiones entren a la plataforma de participación ciudadana y conozcan las propuestas que la ciudadanía presenta.

En conjunto, las propuestas de la mesa convergen en una crítica a las debilidades actuales de la gobernanza ambiental y en una demanda por pasar de mecanismos formales o reactivos a dispositivos efectivos de prevención, control y reparación de los daños ambientales. Más allá de la diversidad de planteos, aparece como hilo conductor la exigencia de un Estado con mayor capacidad regulatoria, sancionatoria y técnica: que imponga sanciones realmente disuasorias, garantice la restitución del daño, produzca evaluaciones independientes y dé respuesta efectiva a las denuncias. A la vez, se reitera la necesidad de que la participación ciudadana deje de ser meramente consultiva y adquiera un carácter vinculante, con formatos más equitativos, instancias de diálogo real y una articulación más sólida entre ciudadanía, academia y niveles de gobierno.

Un segundo eje transversal remite a la planificación territorial y ambiental como herramienta preventiva, visible en la insistencia por avanzar en planes de ordenamiento, retomar instrumentos ya elaborados y frenar transformaciones del suelo mientras no existan marcos claros. Finalmente, varias intervenciones subrayaron que la protección ambiental requiere coherencia entre normas y decisiones, mejor comunicación interinstitucional y una orientación del desarrollo que reconozca e integre la relevancia de la educación ambiental y otras dimensiones, como la agroecología, la restauración ambiental y el cuidado de los territorios.

Propuestas (Mesa virtual IV)

En la ronda final, las organizaciones formularon propuestas de corto y mediano plazo.

Propuestas de corto plazo

Fortalecer los mecanismos de medición y reporte. Varias organizaciones propusieron avanzar rápidamente en criterios más claros para que empresas, cooperativas y organizaciones puedan reportar su contribución a los ODS. Esto implica no limitarse a nombrar objetivos o usar iconografía, sino trabajar con metas, indicadores, materialidad sectorial y evidencia de impacto. También se propuso mejorar la calidad de los reportes y facilitar que las pymes puedan incorporar prácticas de medición y monitoreo sin enfrentar costos desproporcionados.

Sistematizar y comunicar los incentivos existentes. CUDECOOP propuso que el Estado sistematice y comunique con mayor claridad qué políticas, fondos, beneficios o instrumentos ya existen para promover contribuciones a los ODS. Silvana Avondet puso de ejemplo al sistema cooperativo de vivienda y el Fondo Nacional de Vivienda, señalando que existen políticas públicas históricas que contribuyen a los ODS, pero que no siempre se visibilizan como tales.

Dar mayor valor público a las empresas y organizaciones que reportan. Desde FCEA-UDELAR se propuso que el Estado reconozca e incentive a las empresas que, de forma voluntaria, elaboran reportes de sostenibilidad y muestran su contribución a los ODS. Esto podría expresarse en licitaciones, compras públicas u otros mecanismos donde estos reportes aporten valor.

Impulsar compras públicas sostenibles. Sistema B, Cámara Nórdica, Unión de Exportadores y otras intervenciones señalaron la necesidad de acelerar la incorporación de criterios de sostenibilidad en las compras públicas. Se mencionó el rol de ARCE y la necesidad de apoyar técnicamente el diseño de criterios, atributos y mecanismos de ponderación positiva para empresas con prácticas sostenibles.

Generar incentivos para que más empresas incorporen la sostenibilidad. La Unión de Exportadores planteó que avanzar en la sostenibilidad implica lograr que incorporar esta dimensión se vuelva más atractivo para empresas que aún la perciben como un costo. Esto incluye recursos, asistencia técnica, reconocimiento, incentivos fiscales, beneficios financieros y oportunidades comerciales.

Fortalecer capacidades en medición de impacto social. Socialab, Incubacoop e Impact Hub destacaron la necesidad de formar a organizaciones y emprendimientos en medición de impacto social, con criterios comunes que permitan comunicar mejor las transformaciones generadas y no solo los resultados económicos o ambientales.

Propuestas de mediano plazo

1. Articulación institucional y continuidad del diálogo

Crear o fortalecer espacios permanentes de articulación. Varias intervenciones coincidieron en que la instancia de consulta no debería agotarse en el INV. Teresa Pérez del Castillo propuso dar continuidad a la conversación y evitar que existan múltiples diálogos paralelos sin coordinación. En la misma línea, se planteó la necesidad de una institucionalidad que promueva y sostenga el vínculo entre Estado, empresas, cooperativas, academia y organizaciones de impacto más allá de los cambios de gobierno.

Mejorar la coordinación entre agencias, organismos del Estado y organizaciones de impacto. Sistema B propuso generar canales fluidos de comunicación con agencias como Uruguay XXI, ANDE, ANII e INIA, así como con ministerios vinculados a ambiente, economía, desarrollo social y producción. El objetivo es evitar la dispersión de interlocutores y mejorar la eficiencia de la articulación público-privada.

Construir una mirada país sobre materialidad sectorial. Carolina Moreira, de Montes del Plata y Cámara Nórdica, propuso que el Estado, y en particular OPP, contribuya a identificar los sectores con mayor incidencia en las distintas dimensiones de sostenibilidad, de modo de priorizar esfuerzos y diseñar estrategias diferenciadas. Esto permitiría no tratar a todas las empresas de la misma forma y concentrar acciones donde el impacto potencial sea mayor.

Alinear la contribución empresarial con prioridades nacionales. Aiblis Vidal, de FCEA-UDELAR, propuso incrementar el nivel de alineación entre los ODS priorizados por las empresas y las prioridades país. Aunque cada empresa debe atender su materialidad sectorial, se planteó la necesidad de que las prácticas empresariales se orienten a contribuir también a los desafíos nacionales de desarrollo sostenible.

2. Incentivos, financiamiento y certificaciones

Desarrollar instrumentos de financiamiento sostenible. La Unión de Exportadores propuso favorecer la implementación de créditos sostenibles en el sistema financiero uruguayo. Se señaló que tanto la banca pública como la privada tienen margen para desarrollar instrumentos que ofrezcan mejores condiciones a empresas que cumplan metas de sostenibilidad.

Articular certificaciones, sellos y beneficios. Débora Bertani propuso avanzar en mecanismos que permitan que distintas certificaciones dialoguen entre sí, evitando superposiciones y cargas excesivas para las empresas. El convenio entre el Sello de Gestión Sostenible (UEU-LATU) y Marca País fue presentado como una experiencia que podría ampliarse hacia otros instrumentos.

Incorporar sellos o criterios específicos en compras públicas. La Unión de Exportadores mencionó como referencia el caso chileno del “Sello Empresa Mujer”, que otorga beneficios en compras públicas a empresas con liderazgo o propiedad femenina. Se propuso pensar instrumentos similares para Uruguay, vinculados a género u otros objetivos de la Agenda 2030.

Promover la figura de las sociedades BIC. Sistema B propuso fortalecer la difusión, reglamentación operativa y disponibilidad de información sobre sociedades y fideicomisos BIC. También planteó que el Estado debería mejorar la articulación entre organismos para producir datos claros sobre esta figura y facilitar su adopción.

3. Educación, sensibilización y cultura de sostenibilidad

Incorporar sostenibilidad en la formación profesional. Desde FCEA-UDELAR se planteó la necesidad de profundizar la formación en sostenibilidad, tanto en estudiantes como en profesionales ya egresados. Esto incluye contenidos curriculares, educación permanente y certificaciones que permitan dotar al país de capacidades técnicas para gestionar y reportar en clave de sostenibilidad.

Sensibilizar a cooperativas, empresas y emprendimientos desde etapas tempranas. FUCC e Incubacoop destacaron que muchas organizaciones necesitan iniciar rutas graduales de sensibilización y capacitación. Para los emprendimientos cooperativos, se propuso incorporar la sostenibilidad desde el inicio del diseño del modelo de negocio.

4. Agenda post-2030 y estrategia nacional de desarrollo

Comenzar la conversación sobre el ciclo posterior a 2030. Pacto Global Uruguay propuso que el país y el sector empresarial participen activamente en la discusión sobre el ciclo posterior a 2030. Esta conversación debería tomar aprendizajes del ciclo actual, reconocer el rol del sector empresarial y proyectar nuevas formas de contribución.

Reconocer la dimensión cultural de la Agenda 2030. Felipe Filomeno, de Pacto Global Uruguay, planteó que una debilidad histórica de los ODS es no contar con un objetivo específico sobre cultura. De cara a la agenda posterior a 2030, propuso promover esta dimensión como parte de la conversación nacional e internacional.

Vincular el INV con la Estrategia Nacional de Desarrollo. En el cierre, Daniel Greif, de OPP, señaló que las contribuciones de organizaciones productivas, sociales y cooperativas confluyen con la mirada de largo plazo que OPP viene impulsando a través de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Esta estrategia identifica tres desafíos: productividad, competitividad y sostenibilidad, y plantea una dinámica de políticas orientadas por misiones. En ese sentido, el INV fue presentado como un proceso que puede abrir nuevos espacios de trabajo.

Usar inteligencia artificial para mapear, medir y reportar mejor. Teresa Pérez del Castillo, de Impact Hub, propuso explorar el uso de inteligencia artificial para mejorar la articulación, el monitoreo y el reporte de las contribuciones a los ODS. La propuesta apunta a aprovechar nuevas herramientas para sistematizar información dispersa, identificar patrones y mejorar la capacidad de seguimiento.

En conjunto, las propuestas de la mesa convergen en la necesidad de pasar de una etapa de sensibilización general a una fase de implementación más sistemática, monitoreable y con incentivos más robustos. La Agenda 2030 aparece ampliamente conocida por las organizaciones participantes, pero requiere mayor traducción operativa: metas claras, reportes de calidad, incentivos coherentes, financiamiento sostenible, compras públicas con criterios de impacto y espacios permanentes de articulación. La sostenibilidad es entendida no sólo como un compromiso normativo, sino como una estrategia de desarrollo que debe involucrar al Estado, al sector privado, al cooperativismo, la academia y las organizaciones de impacto.

Plataforma de participación ciudadana

ODS 6

Agua y saneamiento

Propuesta 1

Título de la propuesta: Aporte del movimiento sindical

ODS: 6

Persona/s que propone	Viviana Rumbo / PIT-CNT
Fecha	2026-03-20
Resumen de la propuesta	Este documento del PIT-CNT plantea que el cumplimiento del ODS 6 en Uruguay enfrenta tensiones estructurales pese al reconocimiento constitucional del agua como derecho humano. Señala la crisis hídrica de 2023 como evidencia de vulnerabilidades, critica el modelo agroexportador por la contaminación y el uso intensivo del recurso, y advierte sobre debilidades en OSE, como las elevadas pérdidas en las redes y la falta de inversión. Propone fortalecer la empresa pública con recursos y personal, reducir pérdidas de agua, regular efectivamente el uso productivo mediante un canon, garantizar control estatal sobre el agua embotellada, y desarrollar una planificación hídrica integral con participación social. Sostiene que el ODS 6 no se reduce a ampliar

	cobertura, sino que exige transformar el modelo de gestión y desarrollo priorizando el agua como bien común.
Propuesta completa	Ver propuesta
Cantidad de apoyos	0
Cantidad de comentarios	0
Observaciones asistente	La propuesta es presentada por una persona que representa a una organización. Incluye varias propuestas.

Propuesta 2

Título de la propuesta: Agua limpia, Humedal del Arroyo Maldonado y San Carlos

ODS: 6

Persona/s que propone	Jimena Paola Del Pino Dutra / Espátulas Rosadas
Fecha	2026-03-19
Resumen de la propuesta	Este documento, presentado por la agrupación Espátulas Rosadas, propone un plan de protección y gestión para el humedal del Arroyo Maldonado y San Carlos (Ecoparque Metropolitano), un ecosistema clave para la regulación hídrica y la biodiversidad. El objetivo es fortalecer las acciones de cuidado, restauración y uso sostenible del área mediante limpiezas semanales, restauración con especies nativas y educación ambiental con charlas obligatorias previas a las jornadas. Las propuestas incluyen articular con la Intendencia y otras instituciones, promover voluntariado abierto a la comunidad e integración de centros educativos, desarrollar turismo sostenible como avistamiento de aves y caminatas interpretativas, y gestionar financiamiento a través de donaciones, apoyos empresariales y fondos públicos. Se espera como impacto la conservación de especies, reducción de residuos, agua limpia y participación comunitaria.
Propuesta completa	Ver propuesta
Cantidad de apoyos	0
Cantidad de comentarios	0
Observaciones asistente	La propuesta es presentada por una persona que representa a una organización. Incluye imágenes.

Propuesta 3

Título de la propuesta: Red de Reservas Estratégicas de Agua Fuera de Cauce para la Resiliencia Hídrica del Uruguay

ODS: 6 (se vincula también a ODS 7, 9, 11 y 17)

Persona/s que propone	José Daniel Fernández Viñoli
------------------------------	------------------------------

Fecha	2026-03-19
Resumen de la propuesta	Este documento propone crear un programa nacional de reservas estratégicas de agua fuera de cauce, mediante la reconversión de canteras aptas y la construcción de nuevos reservorios en suelos de bajo valor productivo y baja sensibilidad ambiental. El esquema consiste en captar agua superficial en períodos de disponibilidad, bombearla con energía solar o sistemas híbridos, y almacenarla para reforzar el abastecimiento durante sequías, contingencias operativas o picos de demanda, complementando así la infraestructura hídrica existente. La propuesta no implica ejecutar obras sin estudios previos, sino desarrollar una metodología nacional de identificación de sitios, prefactibilidad, pilotos y monitoreo, con coordinación interinstitucional. Se basa en experiencias internacionales exitosas de reconversión de canteras en reservorios y en almacenamiento fuera de cauce, y aporta a los ODS 6 (resiliencia hídrica), 7 (bombeo solar), 9 (infraestructura innovadora), 11 (seguridad urbana) y 17 (alianzas institucionales).
Propuesta completa	Ver propuesta
Cantidad de apoyos	0
Cantidad de comentarios	0
Observaciones asistente	La propuesta se vincula a todos los ODS priorizados. Cita bibliografía e incorpora imágenes de ejemplos internacionales.

Propuesta 4

Título de la propuesta: Calidad del agua y la luz artificial nocturna (ALAN).

ODS: 6 (se vincula también a ODS 7 y 11)

Persona/s que propone	Fernando Roberto Fabbiani Elzaurdia / DarkSky Uruguay
Fecha	2026-02-22
Resumen de la propuesta	La propuesta, presentada por DarkSky Uruguay, plantea la gestión de la luz artificial nocturna (ALAN) como un desafío transversal para el desarrollo sostenible y advierte sobre la fragmentación institucional de su abordaje en Uruguay. En ese marco, señala que esta dispersión institucional limita la coherencia de las políticas públicas y la incorporación sistemática de la variable lumínica en la planificación, la regulación y el seguimiento de la Agenda 2030. Propone desarrollar lineamientos nacionales sobre iluminación exterior sostenible, fortalecer la coordinación interinstitucional y las capacidades de monitoreo, e incorporar indicadores específicos sobre contaminación lumínica al sistema de seguimiento de los ODS. Asimismo, plantea generar ámbitos de articulación multiactor e integrar actores especializados de la sociedad civil en estos procesos.

Propuesta completa	Ver propuesta
Cantidad de apoyos	0
Cantidad de comentarios	0
Observaciones asistente	La propuesta es presentada por una persona que representa a una organización. La propuesta se vincula a los ODS 6, 7 y 11.

ODS 7

Energía asequible y no contaminante

Propuesta 1

Título de la propuesta: Eficiencia luz

ODS: 7

Persona/s que propone	Paola Silvana Leites
Fecha	2026-02-21
Resumen de la propuesta	La propuesta insta a incluir en el Informe Nacional Voluntario 2026 metas de reducción del consumo eléctrico en alumbrado público, promoviendo la adopción de estándares DarkSky por parte del MIEM y los municipios. Se propone el uso de luminarias con apantallamiento total, sensores y luz cálida (<3000K), una gestión ya implementada en Rocha desde 2023 que reduce costos operativos, protege la salud y disminuye la huella de carbono nacional.
Propuesta completa	Insto a que el Informe Nacional Voluntario 2026 incluya metas de reducción de consumo eléctrico en alumbrado público. Iluminar el cielo es desperdiciar recursos. Propongo que el MIEM y municipios adopten estándares DarkSky: luminarias con apantallamiento total, sensores y luz cálida (<3000K). Esta gestión, sostenida en Rocha desde 2023, reduce costos operativos, protege la salud y baja la huella de carbono nacional.
Cantidad de apoyos	1
Cantidad de comentarios	1

Propuesta 2

Título de la propuesta: Energía limpia no alcanza, debemos mirar el uso de la energía

ODS: 7

Persona/s que propone	Fernando Roberto Fabbiani Elzaurdia
Fecha	2026-02-22
Resumen de la propuesta	La propuesta señala que la transición energética no culmina en la generación renovable, sino que se consolida en el uso eficiente y ambientalmente responsable de la energía disponible. Propone integrar la gestión de la luz artificial nocturna en el ODS 7, permitiendo a Uruguay avanzar hacia una transición energética integral que incorpore eficiencia avanzada y reducción de externalidades.

Propuesta completa	La transición energética no culmina en la generación renovable; se consolida en el uso eficiente y ambientalmente responsable de la energía disponible. Integrar la gestión de la luz artificial nocturna en ODS 7 permitiría a Uruguay pasar de una transición energética exitosa a una transición energética integral, incorporando eficiencia avanzada y reducción de externalidades.
Cantidad de apoyos	0
Cantidad de comentarios	0

Propuesta 3

Título de la propuesta: Propuestas varias desde el grupo de Futuros Líderes Energéticos Uruguay

ODS: 7

Persona/s que propone	Melissa Bariani Bremermann
Fecha	2026-03-20
Resumen de la propuesta	La propuesta, presentada por Futuros Líderes Energéticos Uruguay, reúne cuatro iniciativas para contribuir al ODS 7: (1) incorporar el enfoque del Trilema Energético del World Energy Council como indicador de seguimiento de políticas energéticas; (2) promover programas piloto de valorización energética de residuos orgánicos mediante digestión anaerobia e incineración; (3) fortalecer la formación y participación de jóvenes profesionales en la transición energética; y (4) proponer la reincorporación de la Tarifa de Consumo Básico (TCB) para mejorar la equidad en el acceso a la energía eléctrica.
Propuesta completa	En el documento adjunto se detallan las propuestas de parte de la organización para contribuir al ODS 7. (Se sube en este espacio dado que no se pueden subir documentos en el ODS 7). 1. Incorporar el enfoque del Trilema Energético en la planificación energética Promover la incorporación del enfoque del Trilema Energético (seguridad energética, equidad energética y sostenibilidad ambiental) como indicador de seguimiento y posible marco conceptual para la evaluación de políticas energéticas en Uruguay. Esto podría implementarse mediante el desarrollo de indicadores nacionales inspirados en el índice del World Energy Council, que permitan evaluar de forma integrada el desempeño del sistema energético en términos de acceso y asequibilidad, seguridad de suministro y sostenibilidad ambiental. Tener una métrica que se utiliza en diferentes países nos brindaría la oportunidad de identificar a aquellos mejor posicionados, y tomar como ejemplo sus herramientas de gestión y los cambios que hayan encontrado exitosos como un insumo adicional para la toma de decisiones en nuestro país. 2. Transición energética urbana mediante la valorización de residuos Promover programas piloto a nivel municipal o departamental para el aprovechamiento energético de residuos orgánicos mediante tecnologías como digestión anaerobia e incineración de residuos. Estos proyectos permitirían generar energía renovable distribuida, reducir emisiones de

	metano, mejorar la gestión de residuos urbanos y agroindustriales, y generar potenciales fuentes de trabajo. El enfoque propuesto permitiría consolidar el rol de la valorización energética de residuos dentro de la transición hacia sistemas energéticos más sostenibles, contribuyendo simultáneamente a los ODS 7, 11 y 13. 3. Formación de talento para la transición energética Fortalecer y contribuir a programas de formación y participación de jóvenes profesionales en temas de transición energética mediante difusión como apoyo institucional. Sería muy provechoso generar sinergias con iniciativas ya existentes, como la de Futuros Líderes Energéticos Uruguay (NFEL-UY). 4. Inclusión energética Se propone la reincorporación de la Tarifa de Consumo Básico (TCB). Los hogares que pueden sostener consumos eléctricos menores a 230 kWh/mes son en general unipersonales, que incluyen a jubilados y estudiantes. Esta tarifa beneficiaría a algunas de las personas de menores ingresos y haría que la energía eléctrica sea más equitativa para todos.
Cantidad de apoyos	0
Cantidad de comentarios	0

ODS 9

Industria, Innovación e Infraestructura

Propuesta 1

Título de la propuesta: Gestión de la luz artificial nocturna (ALAN) como criterio de infraestructura sostenible y modernización tecnológica.

ODS: 9

Persona/s que propone	Fernando Roberto Fabbiani Elzaurdia
Fecha	2026/02/22
Resumen de la propuesta	DarkSky Uruguay propone incorporar la gestión de la luz artificial nocturna (ALAN) como criterio de calidad infraestructural en el marco del ODS 9, argumentando que la iluminación pública debe evaluarse no solo por su funcionalidad sino por su eficiencia ambiental y desempeño fotométrico. La contaminación lumínica se plantea como síntoma de infraestructura no optimizada y, al mismo tiempo, como oportunidad para impulsar la innovación productiva nacional mediante luminarias inteligentes, telegestión y auditoría energética. La propuesta concluye con cinco medidas concretas orientadas a incorporar criterios fotométricos sostenibles en obra pública nueva, establecer estándares nacionales de iluminación, impulsar innovación en iluminación inteligente, crear programas de certificación lumínica, e integrar indicadores de desempeño lumínico en auditorías de infraestructura.

Propuesta completa	Ver propuesta
Cantidad de apoyos	1
Cantidad de comentarios	0

Propuesta 2

Título de la propuesta: Aporte del movimiento sindical al ODS 9 (PIT-CNT)

ODS: 9

Persona/s que propone	Viviana Rumbo Aparicio
Fecha	2026/03/17
Resumen de la propuesta	La propuesta del PIT-CNT plantea medidas orientadas a superar la dependencia externa a través de un proceso de industrialización inclusiva y sostenible. Para ello, reconoce fundamental un Estado activo que oriente la innovación hacia el bienestar colectivo mediante la compra pública innovadora, el apoyo a las pymes y la creación de espacios institucionales de identificación de demandas tecnológicas. A ello suma la construcción de una institucionalidad CTI participativa y la integración regional —particularmente con el MERCOSUR— como dimensión estratégica para reducir la dependencia externa y fortalecer capacidades colectivas. Para el movimiento sindical, avanzar en el ODS 9 implica democratizar el conocimiento, fortalecer la soberanía tecnológica y garantizar que la innovación esté "al servicio de una sociedad más justa e igualitaria".
Propuesta completa	Ver propuesta
Cantidad de apoyos	0
Cantidad de comentarios	0

Propuesta 3

Título de la propuesta: Trazabilidad de residuos y la mitigación de su impacto ambiental

ODS: 9

Persona/s que propone	Andrés Ramirez Radiccioni
Fecha	2026/03/18
Resumen de la propuesta	Impulsar la adopción de STRIN, sistema digital de trazabilidad de residuos, para mejorar el registro, monitoreo y control de flujos de residuos en tiempo real. La propuesta busca fortalecer la gestión basada en datos, optimizar la logística, promover la valorización y reducir emisiones de GEI asociadas a la gestión ineficiente, aportando a ciudades más sostenibles y a una mayor articulación entre sectores.
Propuesta completa	Ver propuesta
Cantidad de apoyos	2

Cantidad de comentarios	0
-------------------------	---

Propuesta 4**Título de la propuesta:** Soberanía Cielo**ODS:** 9

Persona/s que propone	Paola Silvana Leites
Fecha	2026/02/21
Resumen de la propuesta	Propongo que Uruguay exija declaraciones de impacto ambiental para infraestructuras espaciales y mega constelaciones de satélites (como Starlink o Reflect Orbital). La innovación tecnológica no debe comprometer la soberanía del paisaje nocturno ni la biodiversidad. Es urgente regular la saturación lumínica orbital para proteger la observación científica y el patrimonio natural del cielo.
Propuesta completa	Ver propuesta
Cantidad de apoyos	1
Cantidad de comentarios	1
Observaciones asistente	Se conecta con la propuesta 1, vinculada a contaminación lumínica (el único aporte realizado en esta entrada es del autor de la misma).

Propuesta 5**Título de la propuesta:** Polo Atlántico de Hidrógeno Verde y Puerto Oceánico de Nueva Generación para el desarrollo productivo del Uruguay**ODS:** 9

Persona/s que propone	José Daniel Fernández Viñoli
Fecha	2026/03/16
Resumen de la propuesta	Se propone impulsar un Programa País para desarrollar un Polo Atlántico de Hidrógeno Verde y una infraestructura portuaria oceánica de nueva generación, con horizonte 2040 y ejecución en tres fases. El argumento central es convertir el liderazgo uruguayo en energías limpias en una plataforma de desarrollo industrial, logístico y tecnológico. Para ello identifica como condición estructural resolver la restricción portuaria actual, que no permite operar buques de gran porte, lo que erosiona la competitividad exportadora. Finalmente, propone una gobernanza interinstitucional amplia con salvaguardas ambientales, participación ciudadana y desarrollo de capacidades locales como condiciones de credibilidad.
Propuesta completa	Ver propuesta
Cantidad de apoyos	0

Cantidad de comentarios	3
Observaciones asistente	La propuesta articula con los demás ODS de interés para el INV 2026. Dos de las intervenciones realizadas en la plataforma son del autor, posterior a un comentario en contra de la propuesta.

ODS 11

Ciudades y comunidades sostenibles

Propuesta 1

Título de la propuesta: Integración de la gestión de la luz artificial nocturna (ALAN) en la planificación urbana y la calidad ambiental

ODS: 11

Persona/s que propone	Fernando Roberto Fabbiani Elzaurdia
Fecha	2026-02-22
Resumen de la propuesta	La propuesta plantea incorporar la gestión de la luz artificial nocturna (ALAN) como una dimensión explícita de la planificación urbana y de la calidad ambiental en Uruguay, entendiendo que no se trata solo de un asunto técnico de alumbrado, sino de un componente vinculado al bienestar, la equidad territorial, la eficiencia energética, la seguridad y la biodiversidad. En un país altamente urbanizado, se propone reconocer la contaminación lumínica como variable ambiental urbana, integrar criterios lumínicos en los instrumentos de ordenamiento territorial, desarrollar indicadores de calidad del cielo nocturno y promover lineamientos nacionales de alumbrado público que articulen los ODS 7 y 11, con el objetivo de construir ciudades más sostenibles, resilientes y habitables.
Propuesta completa	Ver propuesta
Cantidad de apoyos	1
Cantidad de comentarios	0

Propuesta 2

Título de la propuesta: Normar luz responsable para proteger biodiversidad en Rocha y salud humana

ODS: 11

Persona/s que propone	Paola Silvana Leites
Fecha	2026-02-21
Resumen de la propuesta	La propuesta plantea incorporar la mitigación de la contaminación lumínica en la planificación urbana del país, con especial atención a territorios sensibles como la Laguna de Rocha. Desde una perspectiva ambiental, sanitaria y patrimonial, subraya la necesidad de adoptar estándares de iluminación más responsables —como luminarias con apantallamiento total y luz cálida— para proteger la biodiversidad, resguardar los ritmos circadianos de las personas y preservar el cielo oscuro como bien natural. A su vez, destaca que este enfoque

	puede fortalecer el astroturismo y afirmar una soberanía paisajística frente al creciente impacto de la artificialización del cielo nocturno.
Propuesta completa	Ver propuesta
Cantidad de apoyos	1
Cantidad de comentarios	1

Propuesta 3

Título de la propuesta: Ley del Día del Consumo Responsable 15 marzo

ODS: 11

Persona/s que propone	Helena Almirati Garcia
Fecha	2026-03-16
Resumen de la propuesta	La propuesta, impulsada por la Coordinadora Nacional de Economía Solidaria junto con otros actores, plantea promover una ley de Consumo Responsable con enfoque de cuidados, orientada a poner en el centro la sostenibilidad de la vida, el bienestar de las personas y la protección del planeta. En ese marco, propone acompañar la iniciativa, enmarcada en el Día Mundial del Consumo Responsable (15 de marzo), con una campaña nacional de sensibilización y visibilización, así como incorporar la formación y las prácticas de consumo responsable en todo el sistema educativo, con el objetivo de consolidar cambios culturales e institucionales en los modos de producir, consumir y cuidar.
Propuesta completa	Ver propuesta
Cantidad de apoyos	0
Cantidad de comentarios	0

Propuesta 4

Título de la propuesta: Ciudades y comunidades sostenibles

ODS: 11

Persona/s que propone	Sara Romina Vecino Berrutti
Fecha	2026-03-16
Resumen de la propuesta	La propuesta, presentada a nombre de la Red Ambiental de Colonia, plantea fortalecer la gestión local de residuos a partir de la articulación entre municipios y organizaciones sociales, con un sistema más accesible y estable de clasificación y recolección domiciliar de materiales reciclables, acompañado por capacitación, campañas de sensibilización, herramientas digitales de información ciudadana y más infraestructura pública para acopio.

	También propone intervenir sobre eventos y festividades del Departamento para reducir residuos de un solo uso y avanzar hacia un turismo más sostenible. Como eje prioritario, reclama la implementación urgente del Plan Vale en Colonia, con participación de las organizaciones de la red y con nodos o centros de acopio que contemplen la diversidad territorial del departamento.
Propuesta completa	Ver propuesta
Cantidad de apoyos	0
Cantidad de comentarios	0

Propuesta 5**Título de la propuesta:** Desde el Tercer Gobierno los Municipios**ODS: 11**

Persona/s que propone	Enrique Armando Cenoz Pérez
Fecha	2026-03-19
Resumen de la propuesta	La propuesta destaca el papel de los municipios como ámbito clave para territorializar la Agenda 2030 en Uruguay, aprovechando el marco de la Ley 19.272 para vincular la gestión local con metas concretas de desarrollo sostenible. En ese sentido, plantea fortalecer la descentralización y la participación ciudadana mediante presupuestos participativos con capacidad real de decisión (a cargo de la asignación de parte del FIGM, por ejemplo), concejos vecinales permanentes y diagnósticos territoriales más representativos, contruidos con actores diversos, mirada por microzonas y articulación entre saberes comunitarios y datos técnicos. El objetivo es que cada comunidad pueda incidir de forma efectiva en la definición de prioridades y en la elaboración de planes de desarrollo ajustados a sus necesidades específicas.
Propuesta completa	Ver propuesta
Cantidad de apoyos	0
Cantidad de comentarios	0

ODS 17**Alianzas para lograr los objetivos****Propuesta 1****Título de la propuesta:** Gestión de la luz artificial nocturna (ALAN) como desafío de coherencia institucional y cooperación multiactor.**ODS: Alianzas para lograr los objetivos (ODS 17)**

Persona/s que propone	Fernando Roberto Fabbiani Elzaurdia / DarkSky Uruguay
-----------------------	---

Fecha	2026-02-22
Resumen de la propuesta	La propuesta plantea incorporar la gestión de la luz artificial nocturna (ALAN) como un tema estratégico para el desarrollo sostenible, señalando que su abordaje actual se encuentra fragmentado entre distintos organismos y niveles de gobierno. En ese marco, sostiene que esta dispersión dificulta la coherencia de políticas públicas y limita la incorporación sistemática de la variable lumínica en la planificación del desarrollo sostenible. En términos operativos, propone avanzar en lineamientos nacionales armonizados, fortalecer la cooperación técnica e interinstitucional, incorporar capacidades de monitoreo y generar indicadores específicos sobre contaminación lumínica. Asimismo, sugiere crear una mesa interinstitucional sobre iluminación exterior sostenible, integrar métricas ALAN al sistema nacional de seguimiento de los ODS, promover alianzas para la innovación lumínica responsable e incluir a la sociedad civil especializada en los procesos consultivos.
Propuesta completa	Ver propuesta
Cantidad de apoyos	1
Cantidad de comentarios	0
Observaciones asistente	La propuesta se vincula claramente con el ODS 17, en particular en sus dimensiones de coherencia de políticas, cooperación multiactor, fortalecimiento de capacidades y generación de información para el seguimiento. El documento da cuenta, además, de la transversalidad de la problemática, al explicitar su articulación con los ODS 6, 7 y 11, y permitir también su asociación con el ODS 15 por sus implicancias ecológicas y, en un plano más indirecto, con el ODS 16 por su énfasis en la articulación institucional y regulatoria.

Propuesta 2

Título de la propuesta: Optimizar la posibilidad de reciclar con solo colocar 2 contenedores diferenciados entre reciclable y basura común, de manera sustentable.

ODS: Alianzas para lograr los objetivos (ODS 17)

Persona/s que propone	Ruth Miglino
Fecha	2026-02-16
Resumen de la propuesta	La propuesta plantea simplificar la separación de residuos mediante la disposición de dos contenedores diferenciados —uno para materiales reciclables y otro para residuos comunes— con el objetivo de facilitar el descarte adecuado y fortalecer prácticas de reciclaje a nivel local. En ese marco, propone la participación de los municipios en la organización de contenedores y la realización de jornadas y charlas de sensibilización en centros de atención primaria, orientadas a promover el cuidado ambiental,

	mejorar el conocimiento ciudadano sobre la gestión de residuos y difundir conductas pasibles de sanción, como el arrojo indebido de basura.
Propuesta completa	Ver Propuesta
Cantidad de apoyos	0
Cantidad de comentarios	0
Observaciones asistente	La propuesta se vincula con el ODS 17 en tanto plantea una articulación entre distintos niveles de gobierno —con especial énfasis en el nivel municipal—, los servicios de atención primaria y la comunidad, para impulsar acciones de sensibilización y mejorar la gestión de residuos.

Propuesta 3

Título de la propuesta: Cooperación entre universidad y organizaciones empresariales para el desarrollo de proyectos de negocio sostenibles

ODS: Alianzas para lograr los objetivos (ODS 17)

Persona/s que propone	Maria Ines Tiscornia Roble
Fecha	2026-03-08
Resumen de la propuesta	La propuesta presenta una experiencia de articulación entre la Universidad ORT Uruguay y organizaciones empresariales para el desarrollo de proyectos de negocio sostenibles. A través de la Cátedra de Planes de Negocios, equipos de estudiantes de la Maestría en Administración de Empresas (MBA) elaboran planes aplicados a desafíos reales planteados por las organizaciones participantes, combinando formación, transferencia de conocimiento y vinculación con el sector productivo.
Propuesta completa	Ver propuesta
Cantidad de apoyos	0
Cantidad de comentarios	0
Observaciones asistente	La propuesta se vincula claramente con el ODS 17 en tanto constituye una alianza entre academia y sector empresarial orientada a la generación de capacidades y la promoción de iniciativas sostenibles. También puede asociarse con los ODS 4, 8 y 9 por su componente formativo, su vínculo con el desarrollo productivo y su énfasis en la innovación aplicada. Como aspecto relevante, traduce la lógica de articulación del ODS 17 en un dispositivo concreto y con potencial de replicabilidad.

Propuesta 4

Título de la propuesta: Contaminación lumínica de origen espacial (satélites artificiales en órbita terrestre)

ODS: Alianzas para lograr los objetivos (ODS 17)

Persona/s que propone	Fernando Roberto Fabbiani Elzaurdia
------------------------------	-------------------------------------

Fecha	2026-02-22
Resumen de la propuesta	La propuesta, presentada por DarkSky Uruguay, plantea reconocer la contaminación lumínica de origen espacial como un desafío emergente asociado al crecimiento de constelaciones satélites en órbita baja. En ese marco, advierte sobre sus posibles efectos acumulativos sobre el cielo nocturno, la observación astronómica, el patrimonio cultural y algunas dinámicas ecológicas, y propone fortalecer la cooperación internacional, el monitoreo sistemático y la participación en foros multilaterales para impulsar criterios de mitigación.
Propuesta completa	Ver propuesta
Cantidad de apoyos	0
Cantidad de comentarios	0
Observaciones asistente	La propuesta se vincula con el ODS 17 por su énfasis en cooperación internacional, coordinación técnica e intercambio de información ante un fenómeno transfronterizo. El documento explicita además su articulación con los ODS 9 y 11, y puede también asociarse con el ODS 15 por sus implicancias ecológicas. Como aspecto relevante, incorpora un tema emergente y poco desarrollado en la agenda pública nacional, planteándolo desde una perspectiva precautoria y multilateral.

Propuesta 5

Título de la propuesta: Lograr alianzas efectivas

ODS: Alianzas para lograr los objetivos (ODS 17)

Persona/s que propone	Jimena Paola Del Pino Dutra
Fecha	2026-03-19
Resumen de la propuesta	La propuesta sostiene que el logro de alianzas efectivas para el cumplimiento de los ODS requiere mayores niveles de transparencia y una participación ciudadana real y vinculante en los procesos y proyectos de interés público. En ese sentido, plantea fortalecer la legitimidad de los compromisos asumidos y evitar que las agendas internacionales permanezcan solo en el plano declarativo.
Propuesta completa	Ver propuesta
Cantidad de apoyos	0
Cantidad de comentarios	0
Observaciones asistente	Se destaca por poner el foco en la calidad de los procesos de articulación, aunque requeriría mayor precisión operativa.

Anexo II. Documentos enviados por participantes (mesa virtual 28 Abril)

Participante	Institución	Descripción breve del documento	Enlace
Aiblis Vidal	FCEA – UdelAR	Página del Observatorio de Reportes de Sostenibilidad, que sistematiza y analiza reportes de sostenibilidad de organizaciones en Uruguay.	Enlace
Analía Giménez	Socialab Uruguay	Plataforma de impacto social que presenta iniciativas, proyectos y métricas vinculadas a innovación social y sostenibilidad.	Enlace
Carolina Moreira	Montes del Plata / Cámara Nórdica	Reporte de sostenibilidad 2024 de Montes del Plata, con indicadores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).	Enlace
Carolina Moreira	Cámara Nórdica	Sitio institucional de la Cámara de Comercio Uruguayo-Nórdica, con iniciativas empresariales vinculadas a sostenibilidad.	Enlace
Carolina Moreira	(Referencia datos ODS)	Visualizador de indicadores de los ODS en Uruguay, desarrollado por el INE, que permite monitorear avances.	Enlace
Felipe Filomeno	Pacto Global Uruguay	Memoria anual 2025 del Pacto Global en Uruguay, con avances empresariales en relación a los ODS.	Enlace
Felipe Filomeno	Pacto Global	Artículo sobre balance empresarial a mitad de la Agenda 2030, destacando desafíos y brechas en el cumplimiento de los ODS.	Enlace
Jorge Cartagena	FUCC	Sitio institucional de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Consumo, con información sobre su rol en economía social y sostenibilidad.	Enlace
Silvana Avondet	CUDECOOP	Artículo sobre cooperativas y ODS, destacando su rol como socios estratégicos para el desarrollo sostenible.	Enlace